

Argentina \$ 9

puentes

año 1 - número 4 - Julio 2001



Entrevista a Isvetan Todorov. **Escriben:** Zygmunt Baumann, Bruno Groppo, Elizabeth Jelin, Horacio Verbitsky.
Las opciones morales ante situaciones límite. Doce personalidades cuentan cómo fue vivir en dictadura.

los puentes de la memoria



El pasado reciente argentino está signado por el horror: aquel que fuera ejecutado por el terrorismo de Estado implantado durante la última dictadura militar (1976-1983). Sin dudas, es el período histórico que ha dejado las heridas más profundas en el cuerpo social. Fue una tragedia que suscitará por largo tiempo la formulación de difíciles interrogantes para dilucidar: ¿cómo pudo suceder?, ¿cómo podría haberse evitado?

En cuanto a las opciones a las que se enfrentaron los argentinos durante esos años, subsisten aún dos relatos contrapuestos. Por un lado, el de la victimización de la sociedad en su conjunto, como si toda la culpa estuviera claramente concentrada en un puñado de hombres enquistados en el Estado y nada se hubiera podido hacer para resistir o para oponerse a lo que estaba sucediendo: un grupo de locos o monstruos que un día tomó por asalto el gobierno y llevó adelante atrocidades en el mayor de los secretos. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. La sociedad misma fue víctima del engaño. Por otro, el de quienes señalan a toda la sociedad argentina como cómplice y culpable de lo sucedido.

Entre unos y otros, las variantes y las sutilezas son infinitas; tanto por la realidad de las diferentes actuaciones en aquel momento como por las conceptualizaciones sobre lo que pasó que se hacen desde el presente.

Tan infinitas como las opciones a que se enfrentó cada hombre y cada mujer, desde un simple ciudadano hasta alguien que ocupaba un lugar de poder. El enorme camino entre la resistencia y la colaboración. Entre la heroicidad y el sojuzgamiento.

Si estas categorías son infinitas, también lo son los contextos en que pudieron presentarse. ¿Puede, acaso, medirse

el miedo que cada uno sentía para determinar que en tal o cual situación se justificaba la colaboración, la pasividad, el silencio?

Pero si es importante reflexionar sobre la responsabilidad social o las diferentes complicidades, no lo es menos intentar comprender cómo se gestó la resistencia, por qué algunas personas pudieron sobreponerse al terror y eligieron caminos duros y difíciles, en muchos casos heroicos.

¿Estaban los familiares "locos", irracionalmente comprometidos a punto de no medir el peligro? ¿O realizaron una opción emocional y moral midiendo las consecuencias? ¿Cómo se gestó el compromiso de aquellos que, sin pertenecer al núcleo más cercano, sin tener vínculos de sangre con las víctimas, siguieron un mandato ético, político o humanitario y se sumaron a la resistencia?

Tal vez el 25º aniversario del golpe militar sea el umbral para comenzar a pensar también las lecciones y los legados. ¿Por qué sucedió, cómo fue posible, en qué sociedad? ¿Cuán distinta es hoy nuestra sociedad y nuestro Estado? ¿Cómo hicimos para que conviviera el horror con la vida cotidiana? ¿Cuáles fueron las opciones morales, y cuáles las respuestas de la sociedad?

"Los dilemas de conciencia no son para nada raros en situaciones extremas, y su sólo existencia certifica la posibilidad de elección y, así, de vida moral", escribió Tzvetan Todorov. Comprometidos en la comprensión profunda de las razones, la forma y las consecuencias del genocidio, es que proponemos hoy reflexionar y debatir sobre las opciones morales en situaciones límite. Lo hacemos desde las páginas de *Puentes* y en la convocatoria al II Encuentro Internacional sobre la Construcción de la Memoria Colectiva.

Comisión Provincial por la Memoria

Dirección
Gabriela Cerruti

Edición
Alejandra Correa

Redacción
Dolores Béjar, Ana Cacopardo, Pablo Gianera, Sandra Raggio.

Participaron en esta edición
Zygmunt Baumann, Bruno Groppo, Gonzalo Garcés, Elizabeth Jelin, Pablo Pozzi,

Adriana Puiggrós, Horacio Verbitsky.

Colaboraron en esta edición
Cristian Alarcón, Flor Balestra, Noemí Ciollaro, Mora Díaz Súnico, León Ferrari, Federico Guillermo Lorens, Pablo Piovano.

Producción
Claudia Berlingerí, Paula Bonomi,

Arte y Diseño
Carina Cerruti

Agradecimientos
Claudia Contreras, Víctor Bugge, Viviana Cerruti, Focus, Eduardo Comesaña.

Suscripciones
Editorial Al Margen. Calle 16 N° 587 (1900) La Plata, Argentina.
guriam@satlink.com.

Fotocromía
Dot Prepress
Viamonte 1430, 1º piso
Tel.: 4371-2221 / 9800

Impresión
Latin Gráfica
Rocamora N° 4161.
Tel.: 4867-4777 / 4861-2200

Puentes es una publicación trimestral del Centro de Estudios por la Memoria. Calle 54 N° 445 (1900) La Plata. Tel-fax (0221) 4831737 / 4895191.
cmemoria@netverk.com.ar

sumario

6. Lo que se dice, lo que se calla, por Alejandra Correa.
18. Y vos, ¿qué hiciste papá? **20.** Entrevista a Tzvetan Todorov. **24.** El regreso del pasado reprimido, por Bruno Groppo. **30.** Combatiendo al general, por Pablo Pozzi. **45.** La empresa de la complicidad. **48.** La dictadura entra en la escuela, por Adriana Puiggrós.
50. La educación en la mira, por Noemí Ciollaro. **54.** Con la ayuda de la Iglesia, por Horacio Verbitsky. **60.** Pasaporte a la vida, por Cristian Alarcón. **66.** La terrible verdad emerge ante nosotros, por Zygmunt Baumann. **70.** Colores que iluminan la noche, por Alejandra Correa. **72.** La política de la memoria, por Elizabeth Jelin. **92.** Biblioteca. **94.** Actividades de la Comisión Provincial por la Memoria. **96.** El II Encuentro Internacional por la Construcción de la Memoria Colectiva. **98.** De luces y sombras.



Las opciones morales que planteó la dictadura

Lo que se dice, lo que se calla

por Alejandra Correa

Una docena de figuras relevantes de la sociedad argentina tiene la palabra. ¿Cómo fue vivir en dictadura? ¿Qué caminos marcó el miedo en su accionar cotidiano? ¿Cuáles fueron las opciones que cada uno tomó frente a la represión que impuso el gobierno militar? ¿Cómo se resistió y cómo se fue cómplice? ¿Existe una culpa colectiva por pertenecer a una sociedad donde fue posible un genocidio?

El 24 de marzo de 1976, Andrés Calamaro era un adolescente que borroneaba canciones en el margen de sus carpetas de secundaria y soñaba con el calor de los aplausos. Aníbal Ford era secretario de redacción de la Revista Crisis. Liliana Hecker, una programadora de computadoras de la Caja de Industria y Comercio. Aníbal Ibarra, un alumno de sexto año del Colegio Nacional Buenos Aires miembro del Centro de Estudiantes, militante del partido comunista. Cipe Lincovsky, una actriz que se reponía del pánico que había vivido tres meses antes cuando una bomba estuvo a punto de estallar en el Teatro Estrella donde hacía Galileo Galilei junto a Antonio Gasalla. Eugenio Zaffaroni, un juez federal recién llegado de San Luis. Sergio Renán, el director de cine más famoso del país: había llevado su ópera prima "La Tregua" a competir por los Oscar. Félix Luna, Joaquín Morales Solá, Mónica Cahen D'Anvers y Magdalena Ruiz Guiñazú ya ejercían —de una u otra forma— el periodismo. Delia Tedin era una señora nacida en el seno de una tradicional familia argentina de la oligarquía, con cierta rebeldía y aún no decoraba casas. José Pablo Feimann era un universitario que buscaba su destino mientras editaba revistas de corta duración. Todos ellos eran habitantes de un país sacudido por la violencia y, casi a ciegas, caminaban hacia el futuro de noche y niebla que trajo consigo el Golpe de Estado y la dictadura militar.

¿Cuáles fueron las opciones morales que planteó esta situación de extrema violencia? ¿Era posible desafiar el miedo? ¿Fue la pasividad, la indiferencia frente a lo que estaba sucediendo una forma de complicidad? ¿Existe una culpa general, colectiva, por el mero hecho de pertenecer a una sociedad donde un genocidio fue posible?

A un cuarto de siglo de distancia de aquel día, esta nota da cuenta de las preguntas que comienza a formularse la sociedad argentina.



Anselm Kiefer, acuarela de 1970, fragmento.

Cipe Lincovsky, actriz



“Recibí amenazas y vivía con terror... aguanté hasta donde pude”.

“El clima empezó a instalarse antes del Golpe. El país era un caos. Yo tenía amenazas de bomba y en toda mi vida lo único que hice fue hacer teatro.

Aunque estábamos hartos de la violencia, en ninguna cabeza cabía que las cosas podían llegar a ser peores de lo que eran. No hubo una mirada crítica o una advertencia de que podía ser peor. Existía la idea de que con los militares se iban a organizar las cosas, que iba a haber más disciplina y orden. Sucedió algo que nadie preveía: que los militares con el aparato de Estado se hicieron cargo de una masacre.

Me fui del país el 17 de agosto de 1976. Hasta ese momento, se sabía que los militares se estaban llevando gente, que vaciaban las casas con camiones de mudanza. Había terror en buena parte de la población y otra parte sentía seguridad, porque para ellos los militares eran quienes iban a poner fin a los atentados terroristas. Había mucha gente que creía eso. Había gente feliz, gente que se enriqueció de manera extraordinaria con esto.

Nosotros, los actores, lo único que hacíamos era cumplir con nuestro trabajo. Yo nunca tuve un arma. Nuestra arma era la palabra. Y si nos preguntaban si estábamos en contra de toda la violencia que se veía, sí, claro. Hubo dos películas que se prohibieron: “La Tregua” y “La Patagonia Rebelde” y todos los actores de esas dos películas estaban prohibidos. Nuestros nombres no podían aparecer en los diarios. Yo pude sobrevivir al exilio artísticamente, pero no anímicamente. Aquí quedó mi hija, que en ese momento estudiaba Medicina, y yo vivía con el corazón en la boca. Cuando llegué a España allá se sabía la verdad de lo que pasaba; aunque después la realidad nos mostró que todo fue más espeluznante. Me fui porque corría peligro mi vida y porque no servía para quedarme encerrada en mi casa, sin hacer nada, como le sucedió a tantos actores.

—¿Se arrepiente de no haber hecho algo?

Aguanté hasta que pude. Recibí amenazas por todos lados y el terror por la vida de mi hija fue terrible. Siento que aguanté los límites de mi propio miedo. Volví al país en el '80 y gracias a Lino Patalano, que es un Quijote, hice “Filomena Marturano”. Me pasó algo increíble: Clarín hizo muy buena crítica a la obra y a su protagonista, pero en toda la nota no decía mi nombre.

—¿Cómo entiende el tema de la responsabilidad colectiva en estos hechos?

Todos tenemos responsabilidad. Nadie está exento de responsabilidad. Los militares son responsables y ciertos políticos y ciertos empresarios tienen una responsabilidad diferente a la que tiene la ciudadanía común. Pero deberíamos empezar a preguntarnos qué pasa con la conciencia colectiva del hombre. Cómo puede ser llevado a tales extremos de maldad, cómo se pueden desconocer los límites, cómo se puede llegar a tal falta de solidaridad y tal falta de conciencia. El olvido trae rebotes de lo peor que existe en la gente. Hoy sucede algo inusitado: que vengan de otros países a hacer justicia.

Andrés Calamaro, músico y compositor de rock



“Yo tenía 15 años cuando se produjo el golpe. Me enteré cuando iba al colegio, en el colectivo 38. La gente estaba cansada de Isabel y López Rega y no sabía con lo que estaba colaborando. Había un gran malestar. Si en democracia no se sabe qué va a ocurrir después del voto, mucho menos en aquel momento.

Yo estaba más metido en el tema de mis primeros conciertos de rock que en política. Mi hermana, en cambio, militaba dentro de la corriente de músicos revolucionarios.

Creo que la responsabilidad de informar, de hacer tomar conciencia y de levantar la voz debió haber sido de los docentes, de los artistas, de los intelectuales, porque el pueblo tiene más fútbol que pelotas. En la Argentina, el nacionalismo siempre estuvo de moda. Existe un nacionalismo textil: la camiseta de fútbol. Y un patriotismo abstracto, que consiste en no pensar en el país y creer que estamos viviendo en el mejor lugar del mundo. Y la gente siempre fue más bien buchona, colaboracionista.

Los militares habían depurado el sistema de represión usado por los nazis y los chilenos. Fue brutal y encubierto. Quienes iban a tu casa a robar la vida de tus hijos eran los mismos que te recibían en la comisaría cuando hacías la denuncia. Pero en general, creo que la

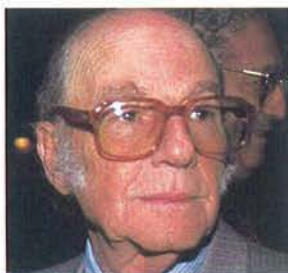
gente no vio nada, porque estaba acostumbrada a pensar en su Citroën. Después del '80, la represión se orientó más hacia lo cultural, se persiguió al rock, al pelo largo, a los "drogados". Muchos vivíamos con una gran paranoia.

Yo no siento ninguna responsabilidad por lo que pasó. Era adolescente, soy un hijo del Proceso y sufrí por la responsabilidad de los demás. No me considero un mártir, pero sí una víctima.

Hoy, todo sigue igual. Ahora estamos más pegados al mundo por la televisión y la política liberal, pero creo que la gente está totalmente desinteresada. Pensamos que la Argentina es la selección de fútbol y estamos tan resignados que lo único que intentamos es mejorar en forma individual para vivir un poco mejor. Y no sé si está mal, esto es lo que hay. Los chicos que usan camisetas con el Che Guevara, si tuvieran dos pesos, tendrían las de Dolce Guevara. En aquel momento fue igual. Charly García fue a comer con Viola o con Videla a la Casa Rosada. También fueron Mirtha Legrand, Mariano Grondona, Ernesto Sábato y Osvaldo Pugliese, que era comunista. Es a ellos a quienes hay que preguntarles. ¿Por qué responsabilizar al pueblo por no darse cuenta, por preferir no darse cuenta, por ignorar o por ser tan torpe? Y hay que pensar en la responsabilidad de estar gobernados por una raza: la de los militares, torturadores y corruptos. Y por qué una parte de nosotros estaba integrada por asesinos."

"Hay que pensar por qué una parte de nuestra sociedad eran asesinos".

Félix Luna, periodista e historiador



"Creo que podría haber tomado una posición más definida".

"El 24 de marzo de 1976 estaba en Estados Unidos, pero tengo la impresión de que se produjo una sensación de alivio en la sociedad. Otra cosa fue lo que ocurrió después. Algo horrible, que dejó a toda la sociedad en un estado de temor jamás visto.

Sobre el tema de los desaparecidos me fui enterando poco a poco y me pareció terrible. Además, las Fuerzas Armadas se metían en un compromiso que las iba a manchar por mucho tiempo. Los hombres que estaban preparados para defender al país se habían convertido en asesinos, secuestradores, ladrones. Cometieron los actos más aberrantes. En ese momento yo no pensé que se pudiera enfrentar al régimen. Era tan brutal y omnívoro que individualmente se podía hacer muy poco.

Creo que las Madres de Plaza de Mayo fueron las primeras que empezaron a concretar una cierta resistencia. La gente sabía lo que estaba pasando a través de susurros y de algunos medios, que eran escasos pero existían, como La Prensa y el Buenos Aires Herald. Yo mismo estuve a punto de caer preso junto a Antonio Salonia, porque dirigíamos una publicación que estaba patrocinada por David Graiver. Después nos enteramos de las acusaciones que había contra él por sus contactos financieros con los montoneros.

Creo que el silencio de la sociedad frente a lo que estaba pasando se debía en parte al miedo. Pero también había muchos sectores que creían que el procedimiento del poder de facto era el único posible para terminar con los grupos subversivos. En buena medida la sociedad convalidó su accionar, aunque no sabía los detalles, convirtiéndose en cómplice de lo ocurrido. Esto no significa diluir responsabilidades, sino decir realmente qué fue lo que pasó. Cada uno sabe lo que hizo o dejó de hacer.

En mi caso personal, creo que podría haber tomado una posición un poco más definida. Qué pude hacer, no sé. Yo soy un intelectual, escribo; tal vez se podía publicar algo en un órgano que tuviera independencia. Casi todos los sectores intelectuales también tienen esta cuota de responsabilidad. Esto lo siento como un déficit que he tenido en mi vida, no lo justifico, pero a veintidós años de ocurrido lo comprendo: uno tenía miedo y el miedo paraliza.

Una de las cosas que yo no perdono al poder de facto es que yo haya tenido que asumir una actitud de pasividad frente a lo que ocurría. Esto me hace sentir mal y me hará sentir mal hasta el resto de mi vida. Pero creo que aun en el caso de que la sociedad no hubiera estado paralizada, no se hubiera podido evitar. Las Fuerzas Armadas estaban decididas a llevar adelante un plan diseñado para liquidar a la subversión por medio de la violencia. Se convirtieron en actores con conductas similares a las de los subversivos, con el agravante de que era el Estado quien actuaba así. Para que la sociedad se haga cargo de esa res-

Anibal Ibarra, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires



“No fui indiferente, no transé, no negocié, me indigné y viví”.

ponsabilidad es necesario tratar de llegar a la verdad, más allá de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos. Otra forma de asumirla es afirmando la democracia, rechazando para siempre las soluciones violentas, de cualquier sector que provengan.”

“En marzo del 76, iba a entrar al sexto año del Colegio Nacional Buenos Aires. Todavía no habían empezado las clases y me llamaron a mi casa para decirme que no podía seguir yendo al colegio. Como no hablaron con mis viejos ni llegó un telegrama, el primer día de clases fui. Ahí me enteré de que lo mismo les había pasado a todos los que de alguna manera participaban del centro de estudiantes. Yo era de la Juventud Comunista. Los únicos que fueron ese primer día de clase éramos Jorge Dorio y yo. El rector nos dijo que para nosotros no había vacantes. Nos anotamos en el ILSE y terminamos ahí el sexto año. Lo que pasó al poco tiempo es que se llevaron a un grupo de compañeros de mi misma promoción. A todos la misma noche. Había con ellos una chica divina de 15 años, Magdalena Gallardo. A los cinco meses del golpe se llevaron a una prima hermana mía. Más tarde, mi padre tenía un amigo cuya mujer era madre de Plaza de Mayo y fue secuestrada junto a las monjas francesas.

En mi casa sabíamos lo que estaba pasando porque dos días antes del Golpe, un militar amigo de mi viejo nos dijo que se venía el Golpe y hasta nos dio los nombres de los que iban a participar. Yo tengo la tranquilidad de que a pesar de ser joven —tenía 18 años—, siempre rechacé el Golpe, siempre supe lo que estaba pasando y muchas veces discutí con gente que defendía a los militares, incluso inconscientemente.

Me acuerdo de que no me gustó el discurso de Balbín que consideraba al Golpe como algo inevitable. También me acuerdo de que los diputados fueron a los dos días del Golpe a retirar sus papeles al Congreso y yo pensé: ¿cómo puede ser que se vayan así? Después empecé a estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires y me recibí en el 80. Creo que las responsabilidades son individuales. Existió un aparato en el que participaron personas con nombre y apellido, un aparato que secuestró, ideó la represión, financió, hizo propaganda. Esos cientos de personas que participaron son las principales responsables. Después hubo una clase media que vio con buenos ojos ese falso orden que se estaba creando y se montó a ese estado de ánimo haciendo propaganda del Golpe, y otra que actuó activamente. Habría que hacer una evaluación de lo que se estaba gestando políticamente y de cuáles eran las condiciones reales de hacer algo. Hubo gente que resistió silenciosamente.

¿Cuál era la opción? La valentía ejercida en forma individual no llevaba a nada. De hecho cientos de miles la ejercieron mal y terminaron engrosando la lista de desaparecidos. Las discusiones en forma irracional no servían de mucho frente a este aparato. La fuerza de la represión y la muerte doblegó cualquier hipótesis de resistencia.

—¿Se arrepintió de no haber hecho algo?

—¿De no haber hecho? (piensa largamente). No. Creo que yo era bastante inconsciente y no me di cuenta de que tal vez corría peligro o estaba en riesgo. A pesar de que sabía todo lo que estaba pasando, tenía cierta omnipotencia como para pensar que a mí nunca me iba a pasar nada. Y sobrevivía. Tenía amigos ‘progres’ con los que hablábamos de lo que pasaba, por ejemplo. Se iban generando espacios de este tipo, microclimas como para poder sobrevivir. Yo tengo la conciencia tranquila. Como joven de 18 años no sé qué hubiera podido hacer en ese momento. Sobrevivir y tener claro lo que estaba pasando ya era mucho.

(Sigue pensando) Conservé los libros... Los habíamos forrado todos y los guardamos en el sótano, hasta con cierta inocencia. Yo escuchaba los discos de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Y tenía grabado el discurso de Allende. No fui indiferente, no transé, no negocié, me indigné cuando secuestraron a mis compañeros, lloré a mi prima y viví.”

Anibal Ford, periodista, escritor e investigador.

“La dictadura, los campos de concentración y los desaparecidos fueron posibles porque en la Argentina se estaba armando un proyecto de transformación, que en su interior tenía



“En mi caso, hice lo que me dio el cuero.”

muchas contradicciones, problemas, frente a los proyectos de los países centrales. Entonces, lo que hubo fue un real proceso de represión, de exclusión, que tuvo efectos sobre más de una generación. Porque tuvo efectos sobre madres y sobre hijos, como lo vemos.

En 1976 yo era secretario de redacción de Crisis, dirigida por Eduardo Galeano. Para nosotros, lo más complejo fue el año '75, que fue el año de auge de las Tres A porque estuvimos trabajando prácticamente todo ese año amenazados de muerte. Fue un año muy crítico, duro, difícil. Pero yo trabajaba igual. Producía y desarrollaba proyectos. Tratábamos de cuidarnos, pero te diría que lo vivíamos con cierta cotidianeidad. Escribimos: “Nadie nos va a ganar”. Pues nos ganaron, pero de alguna manera el régimen no pudo imponerse totalmente. Crisis coexistió un tiempo con la dictadura militar, intentando salvar la discusión y la expresión. Pero las presiones hicieron que fuera imposible mantener la autonomía y se cerró.

Empecé a trabajar en dos proyectos de revistas, pero sus directores fueron asesinados. Entonces, ahí me di cuenta de que no podía escribir, digamos, a no ser que no escribiera más lo que pensaba. Entonces tuve que buscar otro trabajo para sobrevivir. Yo tengo una familia grande, cuatro hijas. Un día me crucé con un viejo amigo de la infancia. Me invitó a trabajar en la empresa y, bueno, durante esos años estuve trabajando en una empresa de productos químicos. Era la etapa de Martínez de Hoz, entonces, de alguna manera, lo hice también con la idea de mantener una industria nacional, de desarrollar productos nacionales. Todo eso que veíamos que empezaba a caer. Seguí ahí hasta después de la dictadura militar.

Hablar de la Argentina de esos años es muy difícil con respecto a los tipos de percepción. Porque se generaliza o se dice que todos decían “Bueno, por algo será”, y la verdad es que en todos los lugares había de todo. Yo creo que hablar de sentir miedo o no sentir miedo corresponde a otro tipo de situaciones. En mi caso, que decidí quedarme, borrar me del periodismo y de todo tipo de publicaciones y trabajar en otras cosas, fue mucha más la tensión que sentimos durante el Proceso de posibilidad de caer o de que... bueno, de que a uno le pasara algo en cualquier momento.

Cuando desapareció Haroldo Conti, nosotros hicimos el operativo para recuperarlo y a las doce horas salió en el New York Times la noticia de su desaparición. Nos movimos. Movimos los medios, la gente, la información y eso que ya estaba Videla. Después la dictadura acentúa más la represión sobre el final del '76, el '77 y el '78. En esa etapa, ya era más difícil salir a defender cualquier cosa. Porque uno ya no tenía medios, ni más formas de comunicarse.

Es muy complejo el tema de la solidaridad. Hubo gente que se borró o no quiso enterarse de lo que pasaba, pero también hubo gente solidaria. En otros, la gente se encerró en sus casas o en sus laburos, por el miedo mismo a la represión o por ver a los militares parados en sus esquinas. Pero no se puede decir que todo el pueblo argentino fue colaboracionista. No. Tampoco quiero eludir una situación que es muy especial: ¿qué pasa bajo un régimen de terror?, ¿cómo hace la gente para sobrevivir?

Yo no me arrepiento. Hice lo que me dio el cuero. No digo que podría haber hecho más ni menos...

En esa etapa, tuve que guardarme. La parte de pulsión que me llevaba a elaborar proyectos, de alguna manera, metido en una empresa en donde tenía que inventarlos, más o menos la canalizaba. Pero no era lo que me interesaba fundamentalmente. Lo de escribir es, es... bravo. Porque uno cuando escribe tiene cierto tipo de feedback, de devolución. Se define también, sabe lo que está haciendo, lo que le cuentan. Entonces, perdés un pedazo. Porque yo no publiqué durante esos años. Bah! Salió un cuento en La Pampa. Porque yo en el '79 hice la primera navegación a Chadileuvú y la hice anónimamente porque todavía no podía firmar nada, salió sin firma. Y yo lo sentía fuerte eso de no poder publicar, dar una opinión, escribir relatos, libros, comunicar. Esa cosa que había hecho antes. Esa pérdida de contacto con los demás... Pero de cualquier manera escribía y guardaba en los cajones. Y ↪

escribía cosas que me pasaban en ese momento.

Cuando empezamos a publicar, en el '80 más o menos, que se ablandó un poco la cosa era difícil controlar todo lo que a uno le salía. Pasó tiempo hasta que se pudo escribir una columna más o menos controlada. Porque uno ya tenía un montón de cosas guardadas, pensadas, razonadas.

A mí me pasaron cosas raras. De golpe, un día, cuatro canas entraron a mi casa por la reja (yo vivía en una casa) y se metieron en la habitación. Yo estaba jugando con una de mis hijas recién nacida. Y dijeron que eran de la brigada de juegos y empezaron a revolver todo... Y después no sé qué hice yo, qué estupidez dije... La cuestión es que se fueron. ¿Qué pasó? Nunca supe.

Además, de golpe salían cosas en las revistas como salió, por ejemplo, en Para ti en el '78, un artículo de cuatro páginas sobre mi cátedra en la Facultad y 'Esto le enseñaban a los chicos'. Denuncias, con textos falsos... Entonces, uno decía: ¿estoy bien acá?, ¿soy consciente o inconsciente?. Fue como vivir en una situación de azar. Una especie de apuesta. Qué sé yo, será omnipotencia, será un montón de cosas, pero alguna situación de apuesta había. Después uno seguía su vida, con sus hijos, salía, en fin. Yo creo que esto todavía no se procesó del todo.

**Magdalena Ruiz Guiñazú,
periodista.**



“Nos faltó la sutileza para saber que el país estaba bajando al infierno”.

“Estoy convencida de que nunca nadie se imaginó los alcances del terrorismo de Estado que aparece con toda su fuerza y con todo el horror en el '76. La gente recibió el Golpe aliviada, porque el país vivía un período de mucha tensión: Isabel Perón, el terrorismo de izquierda, la triple A.

De alguna manera, todo el país fue cómplice y esta afirmación no se debe usar para diluir responsabilidades personales. De entrada, las Fuerzas Armadas hablaron de “aniquilar el accionar de los subversivos en todo el territorio del país”, tal como lo señaló un decreto de Isabel, el 2784, que fue firmado por varios políticos fogueados.

Yo tuve la oportunidad de preguntarles —Cafiero, Robledo, Ruckauf y otros que lo firman— si ellos sabían lo que estaban firmando. Y me dijeron algo en lo que creo: nunca pensaron que lo que estaban firmando iba a llevar al genocidio. Y les creo porque a todos nos faltó

la sutileza necesaria para entender que el país estaba bajando al infierno. Tengo una imagen de la ESMA y su arbolito de Navidad en el '77 cuando se empiezan a saber las cosas que estaban pasando, aunque no se sabía todo lo atroz de la historia. Yo creo que nunca más el país puede

pensar en un golpe de violencia tan espantoso. Fue una ingenuidad que tuvimos que pagar muy cara. Y que estoy convencida de que no tendremos que volver a pagar”.

Delia Tedin, decoradora.



“No tengo culpa porque no sirve para nada y no te ayuda a conocer”.

“Yo pertenezco a una clase social totalmente fascista. Mi familia viene del Alto Perú, y el apellido Uriburu viene de esa rama. El teniente coronel Evaristo Uriburu, que derrocó a Irigoyen en el '30, pertenece a mi familia. Todos mis primos se hacen llamar Tedín Uriburu, pero nosotros usamos Tedín y chau. En el '73 lo voté a Cámpora porque quería una democracia con base social, pero no adhería a la violencia de buena parte de la Juventud Peronista. En la segunda elección me decidí por Oscar Alende.

Yo prácticamente no hablaba con mi familia, me abrí mucho. Alejandro Lanusse es suegro de mi hermana Angélica, pero nunca visité Olivos durante su presidencia, ni siquiera para el cumpleaños de mi hermana; no quería pisar ese lugar. También tuve un hermano que trabajó en el gabinete de Martínez de Hoz con lo cual no hablé con él durante muchos años; y una vez vino a casa con Jorge Bustamante —un funcionario del proceso— y justo estaba Gabriel Levinas y los echamos gritándoles que eran unos ladrones de guante blanco. Mariano (Noblía), mi marido, estaba aterrado porque vinieron con custodia.

Mi padre había sido abogado de los Bemberg. Antes de que muriera discutimos por el tema del Proceso. Mi padre había sido ministro de Frondizi. En esta estancia “El Dorado” (al noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde se desarrolló la entrevista) había visitas periódicas de Frondizi,

Lanusse y otros personajes del ambiente político de la época. Yo sabía que Frigerio le había presentado a Videla carpetas para ser Ministro de Economía a cambio de Martínez de Hoz. Entonces entiendo por qué alrededor mío nadie se quejaba. ¿De qué te ibas a quejar si apoyabas el Golpe para matar a una cantidad de gente y poner un plan económico a tu gusto? No estaba enterada realmente de la parte violenta que traería el Golpe, no me quería enterar probablemente. Muchas de mis amigas más tarde pasaron a la clandestinidad.

Se vivía con una especie de falta de respiración, de aire... muy doloroso, recuerdo tener un sentimiento de estar viviendo en un zoológico. Muy tremendo, mi marido siempre me decía 'vos vas a desaparecer si seguís hablando como estás hablando'.

Cuando Lanusse estuvo preso dije que lo iba a ir a visitar porque era un preso político de Videla, aunque había peligro. Él dijo que Videla y toda la gente que había asumido eran asesinos y que estaban haciendo de todo con la gente. Me pareció que abría un panorama muy jorobado. Venía una mano durísima y lo estaba diciendo un cruel, un traidor porque fue el primer "granadero" que traicionó a un presidente.

Tengo unas primas segundas desaparecidas, cuyos sus padres nunca reclamaron por ellas porque tienen un apellido muy paquete. Conozco mucha gente que jamás reclamó o estuvo adentro de los grupos que buscaban hijos.

Tengo el recuerdo fresco de venir a Vedia con los chicos y Mariano que me decía: 'Quemá esos libros porque te los van a pescar'. Y yo le contestaba que ni se me ocurría quemarlos, pero tengo la impresión de que esa primera etapa es un borrón. Me acuerdo de que por el '78, '79 empecé a tomar clases de danzas con un profesor venezolano, había actores, muchos artistas conocidos, jóvenes. En varias ocasiones íbamos a tomar un café después de las clases y hablábamos de lo que nos pasaba, pero era como que no había futuro. Teníamos la sensación de que no podríamos salir de un pozo de silencio, no había mucha ilusión de que esto podía cambiar.

Lo peor de todo es que la democracia no le gusta a muchos, eso es lo tremendo.

Te diría que no sé si tuve aciertos. Me parece que tampoco fui una de las personas que tuvieron una conciencia muy afinada, para nada, porque si no hoy no estaría aquí. Creo que no tengo culpa porque no sirve para nada, creo que la culpa genera tratar de no conocer. Tampoco soy una fresca. Pero fue difícil vivir acá en el medio de estas cosas... hasta en un ícono de las interrupciones militares a la organización democrática de la Nación, el teniente coronel Evaristo Uriburu, que derrocó el gobierno de Hipólito Irigoyen en septiembre de 1930.. muy bravo y doloroso."

Sergio Renán, director cinematográfico y director del Teatro Colón.



"Había toda una presencia de la violencia en la vida cotidiana que no podía no ser vivida terriblemente por quienes vivíamos en el país. Desde luego, eso comenzó antes del proceso, pero durante el proceso pasó a tener matices diferentes y para mi generación, particularmente conflictivos.

Dirigí La tregua, de Mario Benedetti, en 1974. Cuando volví de la ceremonia de la entrega de los Oscar (1975), me enteré que formaba parte de una larga lista de sentenciados a muerte por la Triple A. Lo que determinó mi decisión de quedarme fue la convicción de que eran sentencias destinadas a aterrorizar y no a ser cumplidas. Fue con esa certidumbre que decidí quedarme... Y después apareció Crecer de golpe. Se filmó a fines de 1976, y está basada en un cuento de Haroldo Conti. Dentro del ambiente cinematográfico hubo gente que no podía creer que se me hubiese ocurrido la idea de presentar ese proyecto, sabiendo que Haroldo Conti era un hombre que provocaba odio en los sectores militares... bueno, en los sectores militares que podían tener alguna idea, porque no creo que fuese particularmente leído... cuenta la historia de un chico cuya madre está desaparecida, y contiene diálogos explícitos sobre la represión. Toda la relación con la libertad y el encierro era lo que generaba la duda de los censores, que percibían un mensaje subversivo en esos

"Después de la dictadura yo creo que soy mucho peor de lo que fui antes". casos que formaban parte de una obra de una ternura maravillosa, de una visión del hombre encantada, candorosa -estoy hablando de la de Haroldo Conti, no de la mía—. Pero bueno, sabemos que los censores tie-

nen una determinada percepción, y sus sentidos y su mirada se particularizan ante esto que, supongo, atenta contra el 'orden establecido'.

Cuando decidí presentar la película, con una enorme cuota de omnipotencia, lo que yo sentía es 'A mí no me pueden decir que no', esa es la verdad. Y un poco fue así... Esa omnipotencia continuó cuando asesores civiles del interventor del Instituto de Cinematografía quisieron pedirme aclaraciones sobre el significado de ciertas escenas y de ciertas frases que el libro contenía, a lo que me negué terminantemente. Finalmente me prohibieron en televisión y cine.

—En 1979, lo convocaron para el largometraje "La fiesta de todos", sobre el mundial de fútbol. ¿Qué piensa hoy de haber realizado ese trabajo donde se mostraba un país feliz, sin inconvenientes en medio de ese contexto?

—Esa es la llaga de mi vida, esa llaga que no puede modificarse. Sin embargo, lo que en esa película se mostraba en cuanto a la alegría popular es absolutamente documental. Esa Argentina que convivía con el terror, la persecución en todas sus formas más despiadadas; vivió con particular euforia ese campeonato de fútbol.

—¿Qué marca dejó en usted la dictadura?

Cuando hablamos de las situaciones límite, que no son un momento puntual de tu vida, sino un período de años, a mi juicio tienen una inevitable consecuencia, y es que uno sea peor persona de lo que fue antes. Yo creo que soy mucho peor de lo que fui antes. Yo a veces veo "La tregua" o "Crecer de golpe" y una de las sensaciones que me provoca es ésa: decir 'Era mejor tipo en aquel momento de lo que soy ahora'. Y eso tiene que ver, también, con la historia que vivimos.

Mónica Cahen D'Anvers,
periodista.



"En el momento del Golpe yo estaba en Francia porque tenía a mi mamá muy enferma. AL morir mi mamá, regresé. En el 77 volví a la televisión con "Mónica presenta". Era un programa periodístico y la censura era tremenda. Teníamos prohibida la palabra 'pobreza'. Los canales eran del Estado, quien ejercía el control. No es que mandarás el material para que lo revisaran, tenías a los militares adentro como directivos. EL canal 13 era de la Marina. Lo que hacíamos era hablarle a la gente con gestos. Cuando leíamos los cables sin levantar la vista del papel que estaba sobre el escritorio, era porque lo que leíamos era mentira. Era un código y la gente lo conocía.

La década del 70 fue de un absoluto terror y como me decía mi psicoanalista, no tener miedo no era sano. El miedo es una defensa del cuerpo, si no la tenés sos un suicida; es como tomarte dos Lexotaniles para negar la realidad. La clave era reconocer que uno tenía miedo y seguir adelante. Desaparecieron compañeros durante la dictadura pero había que seguir trabajando."

Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni,
Director del Depto de
Derecho Penal de la UBA.



"En la época anterior al Golpe yo era Juez Federal. Había llegado desde San Luis y estaba viviendo en una situación precaria. Los otros dos jueces federales que había en ese momento andaban con guardaespaldas y recibían todo tipo de amenazas. Obviamente teníamos que participar de lo que sucedía en la calle. Por ejemplo, comprobar si un enfrentamiento o un tiroteo lo era realmente y no se trataba de un fusilamiento, por ejemplo. Recuerdo hechos puntuales donde las amenazas eran claramente de la Triple A. Fue una época durísima. También dimos muchos hábeas corpus.

Del Golpe de Estado se venía hablando. Cuando finalmente se produce, a mí me confirman en mi puesto. Pero yo no acepto seguir en mi cargo y me pasan a un juzgado de instrucción. Ahí me quedo durante toda la dictadura. Era un lugar donde todos hacían cualquier cosa por ascender y obtener algún beneficio económico. Estuvimos al margen de lo que pasaba, porque no era un juzgado federal y los militares tenían muy organizado el tema: los enfrentamientos y cuestiones similares pasaban por la justicia federal que se regía por la justicia militar.

Lo que estaba pasando se supo siempre. Lo que no se sabía era cómo se hacían las cosas. Yo viajé alrededor del 80 a Europa y desde allí las cosas eran muy claras.

Creo que existen diversos grados de responsabilidad. Por un lado, hay una responsabilidad

corporativa, por otros responsables con nombre y apellido. No podemos decir que todos tenemos la misma responsabilidad porque es como decir que nadie es responsable.

—¿Se arrepiente de no haber hecho algo?

(Duda) No. No podía hacer nada. Hice mi trabajo, no colaboré con el régimen. Y el Golpe me afectó profundamente en mi vida cotidiana.”

Liliana Hecker, escritora.



“Se trata de hablar y ver hasta dónde se puede avanzar”.

“Días después del Golpe, el 6 de mayo de 1976, me echaron de mi trabajo en la Caja de Industria y Comercio y me dijeron que yo era un ‘factor real o potencial de perturbación’. Ahí yo era programadora de computadoras, pero tenía amigos que eran sindicalistas. Tres días después me fueron a buscar a mi casa, pero no me encontraron. Durante 15 días no volví. A pesar de que el peligro era muy cercano, decidí quedarme en la Argentina. No me quería ir, pero no porque fuera heroica o valiente... quizás porque soy irresponsable y porque pensé que no me iba a pasar nada.

Entonces trabajé por un tiempo con un grupo de gente en ILVEM, uno de esos institutos que te prometen todo (lectura veloz, bachillerato acelerado) y que son una terrible estafa. Me aceptaron simplemente porque pagaban una miseria. También entró Silvia Iparraguirre que daba clases, creo que de redacción, y ya adentro nos dimos cuenta de que había una suerte de inteligencia. Ahí trabajaban profesionales en general de izquierda, con una notable formación científica e intelectual, y que habían sido echados de la Facultad de Ciencias Exactas o de Letras. Llegó un momento en que me asqué y me fui. Después, con un grupo de amigos trabajaba en mi casa haciendo programas y hacía changes literarias para alguna editorial. Sobreviví como pude.

—¿Cuál considerás que fue el rol de los intelectuales durante la dictadura?

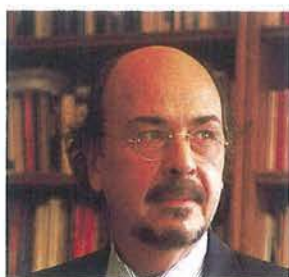
Yo no creo que un intelectual espere que le concedan libertad; un intelectual va avanzando y probando límites; creo que en momentos como los de la dictadura, el lenguaje de la literatura se vuelve más eficaz que el político, que es mucho más directo y sin sutilezas. El lenguaje literario permite construir un texto que habla mucho más sutilmente y que puede abrirse paso a través de la censura. En mi caso yo ya integraba El Ornitorrinco que siempre fue una revista de literatura, no militante, pero que se ubicaba en la izquierda y al mismo tiempo opinaba sobre cuestiones que estaban ocurriendo. En ese sentido, prácticamente no hubo cambios después del Golpe y se transformó incluso en más significativa porque los escritores jóvenes no tenían dónde publicar. Allí pudimos generar ciertos debates culturales, desarrollar ideas y permitir la publicación de autores que no aparecían en otros medios, reproducir listas de desaparecidos... No digo que fueran acontecimientos grandiosos, pero hacíamos lo que podíamos para mantener una red cultural.

Creo que para un intelectual, una persona lúcida, no hay coartadas. No puede decir “a mí me prohíben hablar”: se trata de hablar y ver hasta dónde se puede avanzar, porque si no, no tiene sentido aquello en lo que creemos. Si ni siquiera podemos defender la dignidad o la vida de los hombres, no entiendo para qué escribimos.

—¿La sociedad fue cómplice de la dictadura?

Yo no creo que se pueda englobar a toda la sociedad argentina de acuerdo a una única conducta. De todos modos, creo que buena parte de los ciudadanos tenía posibilidades de darse cuenta de que estaba pasando algo horroroso porque no ocurría en otro mundo. Poco a poco se empezaba a saber de gente que era cercana y que se la habían llevado. Tal vez lo que no se sabía era el destino, ni se podía asegurar que nunca más iban a aparecer con vida; pero había un sentimiento muy claro, físicamente palpable del peligro... Yo puedo reconstruir un clima de inseguridad y miedo... recuerdo haber tenido pesadillas con la desaparición. No creo que haya el mismo grado de complicidad en todos los argentinos. Se es cómplice cuando uno se siente cómplice. Implícita o explícitamente hay gente que es cómplice: a lo mejor tiene la posibilidad de indignarse y ni siquiera se indigna; y además se siente bien porque puede viajar a Miami, porque puede comprar un pelapapas importado, o porque el país está libre de estudiantes revoltosos: eso es complicidad con el régimen. Pero la gente que tenía miedo y se recluyó en lo suyo y no sabía qué hacer, no siento que haya sido

**Joaquín Morales Sola,
periodista.**



“Yo puedo como periodista responder, pero nunca tomé un arma y maté.”

cómplice, simplemente era impotente frente a algo para lo cual no tenía respuesta. Habría sido totalmente extraordinario que el señor que llevaba comida a los campos de concentración, que a lo mejor le pagaban muy bien y estaba muy contento con los militares, hubiese corrido el menor riesgo. Es decir que siempre es una minoría la que corre ciertos riesgos por sus ideas y la que tiene una actitud de rebeldía ante lo que está pasando. Como yo estaba acá y sacaba una revista y sabía hasta dónde se podía hablar, no puedo proyectarme hacia atrás en conductas heroicas..., sin duda en ese momento no vi más conducta de la que tuve. Ni me callé, ni modifiqué mi ideología, ni cambié nada de lo que había hecho hasta ese momento. Durante la Dictadura hice lo que creí que debía hacer.

“Entre el 70 y el 75 fui corresponsal de Clarín en Tucumán. Mis recuerdos son muy malos, como de una época tremendamente difícil. Tucumán fue un laboratorio chico de lo que después pasó en el país.

Lo que pasaba en Tucumán se sabía porque no había desaparecidos. La primera estrategia era ir a sacar a la gente de sus casas, matarlas y hacer figurar esto como un enfrentamiento, blanqueaban a los muertos.

A mediados del 75 comenzó un ola de amenazas a mucha gente y se cumplían, era la triple A, y mucha gente se fue. Yo estuve en una lista y me quedé porque nunca había tenido militancia política, ni de izquierda, ni de centro, en ningún partido.

Cuando el diario me trasladó a Buenos Aires tenía 24 años y no era conocido. Empecé a trabajar en la sección Política un poco como resultado de esa amenaza. Nunca me lo dijeron, pero evidentemente quisieron sacarme de la línea de fuego. El Golpe me encontró nuevamente en Tucumán, porque el diario me mandó a cubrirlo allá.

Con respecto al Golpe, no pasó nada adentro de Clarín. Lo primero que hace el gobierno militar es dictar una serie de leyes que advertían sobre represalias a los medios que difundieran cualquier acto relacionado con la guerrilla.

—¿Qué reacción tenía frente a esos hechos?

—Yo tenía 24 años, no conocía Buenos Aires, no me movía con la información que puedo tener hoy. Lo que recuerdo sí es que escuchaba por ahí de la existencia de campos de concentración, de cárceles, pero nunca tuve una visión muy real de lo que estaba pasando. Nos informábamos mucho de las agencias extranjeras. En vísperas de la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA empezamos a tomar conciencia del método, de la profundidad y de la longitud. Hasta ese momento sabíamos de casos aislados, por ejemplo del hijo de Graciela Fernández Meijide; pero no podíamos decir si eran cien casos, mil casos, dos mil.

—¿Alguien le corregía las notas?

—Yo hasta el 78 no firmaba las notas que escribía, tenía una tarea más bien de edición en la sección Política. No escribí notas como columnista habitual hasta el 80. La mirada del diario se detenía en el tema de la sobrevivencia del diario que es en definitiva una empresa.

—¿Por qué decidió seguir trabajando en la época del Proceso, considerando las presiones y limitaciones?

—Hubo dos clases de periodistas. Unos se fueron. A mí me costaba tomar esa decisión, pensar que a los 24 años uno se tomaba un avión y se iba a vivir a otro país estaba muy lejano. Por otro lado, yo soy hijo, nieto y hermano de periodistas. No había mucho margen de decisiones. Obviamente que para un periodista que estaba en la sección Política de un diario como Clarín, el miedo era permanente. Miedo a las represalias que podía tomar el gobierno, miedo a la clandestinidad de los hechos. He escrito muchas notas pero sin embargo, no recuerdo que el miedo me haya condicionado nunca.

—¿El periodismo no debería volver a analizar su rol durante el Proceso?

—Se hizo mucho, pero creo que el periodismo se debe una autocrítica. Igualmente creo que

**José Pablo Feinmann,
escritor y ensayista.**

“Después del golpe no continúe con ningún compromiso. Yo me volví loco.”



tenemos que separar responsabilidades. Yo puedo como periodista responder, pero obviamente nunca tomé un arma y maté a nadie. Hay niveles de responsabilidad muy diferentes.

“Para la época del Golpe yo estaba encuadrado dentro de la Juventud Peronista que se llamó JP Lealtad y que duró muy poco. Fue un gesto desesperado, casi estúpido. Porque quedamos en la mitad, entre los fascistas y los montoneros, en medio del fuego y de las balas. Logramos sacar una revista que se llamó Movimiento, que duró dos o tres números. Después sacamos Aluvión que sólo duró un número y bueno... para decir la verdad, se nos fue todo a la mierda. Era una situación angustiante, sofocante. Por un lado, Perón rodeado de fascistas y, por el otro, los Montoneros dirigidos por Firmenich, Galimberti y el delirio armado. La verdad es que el recuerdo de esos años es terrible.

Yo no sabía ni cómo manejar un arma ni cómo pasar a la clandestinidad. Y quería que las cosas se resolvieran por el lado de la política, no de las armas. No podía irme del país porque estaba enfermo de cáncer. Se me vino todo junto, dado que yo era muy joven. Se me vino junto al Golpe Militar, con la pérdida de todas las ilusiones, la pérdida de mi participación universitaria, la imposibilidad de escribir y un cáncer. Y sobreviví a todo eso, de lo que deduzco que mi fortaleza es notable. Todavía no lo puedo creer.

Después del Golpe yo no continué con ningún compromiso. Yo me volví loco. Entre la enfermedad y el Golpe me rayé por completo. Se me desencadenó una especie de neurosis obsesiva por la cual lo único que podía hacer era leer discursos militares. Si la represión avanzaba, yo retrocedía. Sí me tenía que ir o si esperaba los resultados de mis análisis. Pasé muchos años muy mal, la realidad me había dado un golpe tremendo. Fueron diez años en los que me costó salir y recuperarme. La muerte estaba adentro, en el cuerpo, y estaba afuera, en las calles. Y no había privacidad en la que refugiarse, porque era invadida por los militares. Así que el único camino era volverse loco. Y yo leía discursos militares, por ejemplo de Ibérico Saint Jean que decía: ‘Vamos a fusilar hasta a los tímidos’. Obviamente no podía evitar que esos discursos me trabajasen la cabeza.

A mí no me tranquilizaba ver gente caminando como si nada ocurriese, me producía el terror de lo que no se dice. Incluso entre los mismos amigos se interpretaba que el que hablaba de la represión y los desaparecidos era un tipo que quería bajonear la reunión. Había que apelar a la capacidad de negación para vivir en el país. Y eso es lo que a mí me destruyó, la capacidad de negación. Al no tenerla, pensaba todo el tiempo en las cosas horribles que pasaban. Los que dicen que no veían y no sabían lo que pasaba mienten, mienten descaradamente para tranquilizar su conciencia. El accionar de la guerrilla era un elemento más de la locura porque le entregaba al poder militar el marco de guerra que ellos requerían. Coincido con Jaspers en el tema de categorizar la culpa. Pero diría que hay dos puntas: la culpa criminal y la culpa colectiva que sería la culpa nacional. Sería una culpa por omisión, pero también por aceptación.

En cuanto a la memoria, creo que mantenerla viva se hace de muchas maneras. Un testimonio, un monumento en la Costanera y escribir, ese acto individual para mantener la memoria. El argentino quiere ser feliz y para serlo sabe que tiene que olvidar. Cuando salimos a putear contra el indulto de Menem, era un fin de semana largo, había muy poca gente en la Plaza de Mayo; porque lamentablemente nada ni nadie le quita a un argentino un fin de semana largo.”

1. Algunas de las entrevistas que conforman esta nota, fueron realizadas por alumnos del seminario Historia de la memoria, de la Universidad de La Plata, dictado por Gabriela Cerrutti en 1999. Tal es el caso de: Liliana Hecker (Natacha Donadio), Sergio Renán (Ana Laura Conde); Joaquín Morales Solá (Paula Salguero), José Pablo Feinmann (Gabriel Morini), Mónica Cahen D'Anvers (D. Burgenik); Delia Tedin (Diego Rodríguez) y Aníbal Ford. Las demás fueron realizadas por Mariana Canavese y Alejandra Correa entre 1999 y la actualidad.

2. La cronista señala que durante el primer año de dictadura, halló en el diario Clarín, una docena de artículos de opinión firmados por Joaquín Morales Solá.

“Un pueblo debe poder hacer frente a su pasado”

por Gonzalo Garcés

Cree que el destino de los hombres está sujeto a una “felicidad vacilante”. Implacable a la hora de juzgar no sólo las experiencias totalitarias del siglo XX –con sus grandes males y sus casos particulares de generosidad y resistencia al Mal– sino también las desviaciones de la democracia liberal Tzvetan Todorov.

Es muy grato conversar con Tzvetan Todorov. No sólo por su cortesía, su claridad expositiva, su voz (las reses a la búlgara después de casi cuarenta años en Francia), sino quizá sobre todo por el escepticismo sonriente que emana de sus palabras. Pienso, me parece, se diría que: reservas de un humanista que sabe que a las certezas catastróficas no se opone otra certeza cualquiera, sino la duda. Como su maestro Rousseau, Todorov sólo cree en una “felicidad vacilante” para los hombres; como su otro maestro, Montaigne, percibe la vida en sociedad como un “jardín imperfecto”. Lo cual no significa tibieza de convicciones: al contrario, Todorov es implacablemente lúcido a la hora de juzgar no sólo las experiencias totalitarias del siglo XX sino también las desviaciones de la democracia liberal, como esa “tentación del Bien” que da título a su último libro, inédito aún en castellano. Se trata de una memoria del siglo, con sus grandes males y sus casos particulares de generosidad y resistencia al Mal.

En verdad Todorov parece indicado para realizar esta summa de los extremos del siglo. Él mismo vivió en Bulgaria bajo el régimen comunista hasta 1964, año en que se trasladó a Francia. Después de introducir en este país a los formalistas rusos (*Théorie de la littérature*, 1966) y

de producir el ya clásico *Introduction à la littérature fantastique* (1970), deja el análisis de las formas literarias por el estudio del hombre y la sociedad. Inicia entonces un ciclo que incluye, entre otros, *Critique de la critique* (1984), *Nous et les autres* (1989) y *Frente al límite*, publicado hace poco en castellano.

La conversación que sigue fue registrada en París, en el despacho que Tzvetan Todorov ocupa como director de investigaciones del CNRS. Todorov dejó expresamente sentado que no es un experto en la historia reciente de Argentina. “Mis fuentes”, advirtió, “son sólo diarios y revistas”. Al leerlo, sin embargo, yo había tenido la convicción (igual que la redacción de Puentes) de que su análisis del totalitarismo, la democracia y la relación entre ambos no es en absoluto ajena al caso argentino.

—¿En qué medida es posible hablar de totalitarismo en relación con las dictaduras latinoamericanas, y en particular la dictadura Argentina de 1976-83? Su definición del totalitarismo es lo bastante precisa como para excluir cierto número de regímenes, incluso entre los más autoritarios. Me parecería interesante, entonces, empezar por recordar un poco los rasgos precisos que usted asigna



El autor de Frente al límite vive en Francia desde 1964.

al totalitarismo.

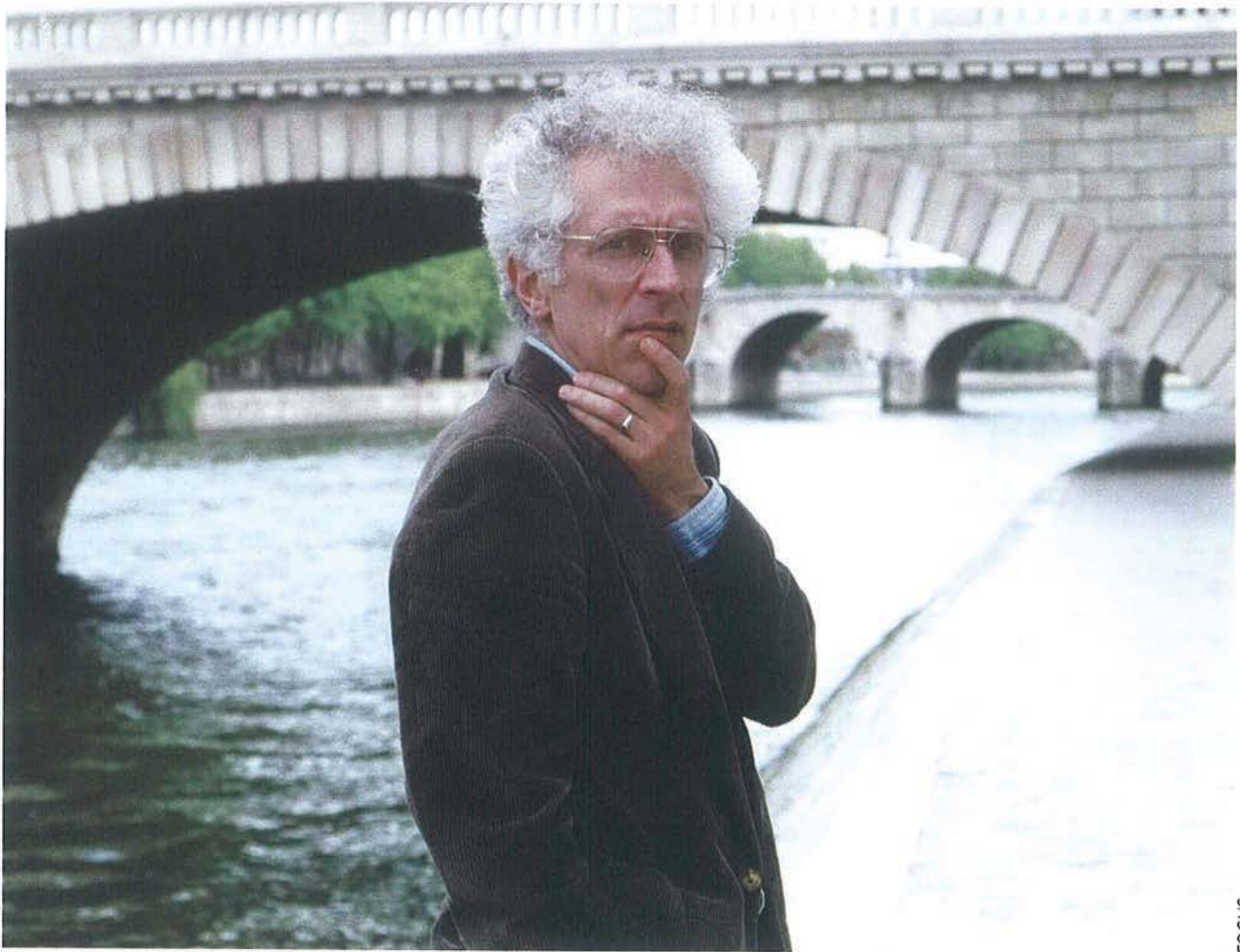
—El régimen totalitario se define, ante todo, por la puesta en cuestión de uno de los principios de la democracia liberal, tal como la conocemos hoy: la autonomía del individuo. Es decir, su derecho a cierta independencia frente a toda fuerza dentro del Estado, incluido el Estado mismo. El gran medio que las democracias liberales encontraron para garantizar esta autonomía es el pluralismo. Pluralismo a todo nivel, empezando por la negativa a unificar lo político y lo económico; o sea, a nacionalizar y expropiar la propiedad privada. La negativa a unificar lo que el vocabulario histórico denomina lo teológico y lo político, es decir, el aparato del Estado y una ideología particular. Pero también, de manera más tradicional, defender el pluralismo de la prensa, de los medios en general, de los partidos políticos, de las opciones educativas y culturales de todo tipo. Ésos, entonces, son los indicios más claros de lo que pertenece a un lado o a otro de la línea divisoria entre totalitarismo y democracia.

Yo pienso que, en todos los casos, se trata de saber si la dictadura controla o no la totalidad del individuo; si controla su vida privada, sus opciones espirituales, o sólo su vida pública. Cuando yo vivía en Bulgaria (los prime-

ros 24 años de mi vida), ése era un país totalitario. Eso quería decir que toda mi vida, sin excluir mis amistades, mis relaciones amorosas, mi vida privada en suma, podían ser controladas y orientadas por la policía política; por no decir nada de mis actividades económicas, ya que en un país totalitario todo el mundo, en el fondo, es funcionario del Estado. O sea que, desde este punto de vista, hay una diferencia grande entre dictadura militar (o régimen autoritario) y régimen totalitario. Esta unificación de todo, este monismo si usted quiere, es lo que designa la misma palabra totalitario.

—Aun así, es interesante que podamos encontrar rasgos totalitarios puntuales en una "dictadura tradicional". Por ejemplo, en el caso argentino, el uso del terror, o el recurso a la figura de un "enemigo interno" (la subversión) o "externo" (la guerra de las Malvinas). ¿Podríamos hablar, en ciertos casos, de totalitarismo parcial, inconcluso o larvario?

—Absolutamente; cuando hablamos de totalitarismo o de democracia liberal, o bien de otros regímenes, hablamos de una abstracción. Es lo que se llama, desde Max Weber, el "tipo ideal". Es decir, una invención de categorías abstractas, una construcción que corresponde ideal-↳



Todorov a orillas del Sena.

FOCUS

mente a esta situación. Pero ningún estado real corresponde al 100% a este modelo. La Italia de Mussolini era un régimen fascista, pero, aunque Mussolini haya sido en cierto modo el inventor, en todo caso el utilizador masivo del término "totalitario" (que él empleaba en sentido positivo), nosotros dudamos a la hora de calificar así el régimen de Mussolini. Pero no hay que pararse demasiado en palabras; se trata de identificar el modelo abstracto y mostrar, entonces, en qué se le parece, en qué se distancia y en qué aspectos, el estado real.

—Usted ha tratado con frecuencia el problema de la complicidad colectiva con un régimen totalitario. En Bulgaria, por ejemplo, subraya la dificultad de identificar responsables, y más aún juzgarlos, cuando la sociedad entera ha contribuido en alguna medida a la conservación del régimen.

—No soy el primero en señalar esta dificultad característica. Recuerdo que Václav Havel (a quien yo critico en otros puntos), en sus análisis de la sociedad totalitaria insiste justamente en eso: el régimen totalitario no es lo que se suele llamar una dictadura, es decir, el reino de una minoría sobre una mayoría sometida por la fuerza; en el régi-

men totalitario, la organización misma del Estado consiste en implicar a todo el mundo (en grados diversos, se entiende) en el funcionamiento de la máquina. Todos, decía Havel, son a la vez verdugos y víctimas; aunque algunos sean mucho más verdugos que víctimas. Por eso la intervención de la justicia, tras el derrumbamiento de un régimen así, plantea verdaderos problemas. Porque el individuo que juzgamos responsable, pongamos por caso el Jefe de Estado, ha sido pese a todo el Jefe de ese mismo Estado que la población aceptó durante cinco, diez, veinte años. O sea que ejerció una función política. Ciertamente, se pueden hacer procesos políticos; pero esos procesos son un poco sospechosos, porque consisten en que el nuevo hombre fuerte declare culpable al precedente. Y siempre desconfiamos de los procesos políticos a los vencidos.

—¿En qué consiste, entonces, la complicidad? Con frecuencia es una complicidad puramente pasiva. La mayoría de nosotros no tiene la fibra de los héroes; a veces tenemos hijos, parientes, amigos, así que nos abstenemos de protestar, aunque juzguemos que la acción del gobierno es condenable. Pero al hacerlo, aceptamos tácitamente

“Cuando un mal violento se ha producido, como la dictadura en Argentina (y creo que con más razón aún los crímenes de Hitler, o los crímenes de los dirigentes comunistas), es muy difícil —por no decir imposible— encontrar una reparación ideal, que satisfaga a todo el mundo”.

la acción de ese gobierno y nos privamos un poco del derecho ulterior a condenarlo.

Fue el caso de Francia en 1944, con la liberación. Pero la liberación combinaba el derrocamiento de un régimen político (el de Pétain) con la expulsión de un invasor extranjero. Se podía cargar en la cuenta de los alemanes y de la colaboración todo el mal que había ocurrido en los años precedentes. Sin embargo, el proceso de depuración, como se lo llama, plantea muchos interrogantes: de un día para el otro, quienes habían aceptado el régimen con absoluta calma fueron los primeros en rapar a las mujeres colaboradoras, en perseguir a quienes habían ocupado un puesto oficial, incluso en fusilar a los responsables políticos.

—En el caso argentino, cuando se juzgó a los jefes principales de la dictadura, uno de los problemas más difíciles fue quizá éste: ¿hasta dónde ir en la jerarquía? Pienso que esta cuestión de la jerarquía también es un tema recurrente en sus ensayos...

—Sí. Pero no hay una respuesta absoluta. Y yo diría que cuando un mal violento se ha producido, como la dictadura en Argentina (y creo que con más razón aún los crímenes de Hitler, o los crímenes de los dirigentes comunistas), es muy difícil —por no decir imposible— encontrar una reparación ideal, que satisfaga a todo el mundo. El mal, una vez introducido en la historia, no puede ser desalojado. Sólo se pueden limitar los daños y esperar que, a medida que se suceden las generaciones, los efectos de ese mal sean borrados. Pero no hay reparación en sentido estricto; así entiendo yo las cosas.

En cierto modo, me parece justo fijar un límite; digamos, que se condene a los generales, pero no a los coroneles y a los de más abajo. Eso porque en una sociedad jerárquica (y sabemos que el ejército es el sector más jerarquizado de nuestras sociedades modernas) hay una obligación de ejecutar las órdenes; entonces no se le puede reprochar el haberlas ejecutado a quien se enlistó precisamente para cumplir órdenes; órdenes que además son enviadas por la jerarquía, por el gobierno, o sea, en principio, por el pueblo. No se le puede reprochar eso legalmente, jurídicamente. No se puede exigir de las personas la insumisión cívica; sólo podemos alabar a quienes la practicaron.

Sin embargo, está claro que para las víctimas, o para los descendientes de las víctimas con más razón, las cosas no

se presentan de este modo. Para quien encuentra a su torturador de ayer en libertad, disfrutando de sus privilegios, hay algo profundamente inaceptable. Y que debe aceptar, sin embargo. Nos encontramos en una situación donde la reparación no puede ser perfecta, donde hay que buscar compromisos. Yo pienso, por cierto, que las comisiones investigadoras como la que hubo en Argentina son una tentativa válida en este sentido; aunque ahí tampoco haya nada perfecto.

—En *L'homme dépaycé*, usted lamentaba que algunos, en nombre de la paz civil, predicaran la negativa a ocuparse del pasado. Ahora, en *Mémoire du mal, tentation du bien*, deplora igualmente el modo en que se encaró el juicio a Papom en Francia. “El culto de la memoria”, escribe usted, “no sirve siempre bien a la historia; lo mismo diremos de la justicia cuando ésta deja de ser una fuente de documentos a ser analizados por la historia, y se convierte en una puesta en escena del saber histórico”. ¿Cuál sería entonces, para usted, la actitud ideal en la confrontación con un pasado totalitario, o semi-totalitario?

—Lo que yo deploro en los antiguos países comunistas no es tanto la ausencia de procesos como la negativa del gobierno, e incluso de la población misma, a mirar con lucidez el pasado reciente. Pero quizá esta capacidad de examinar con un ojo crítico el propio pasado sólo viene después de un cierto tiempo; quizá haga falta para eso media generación, unos veinte años.

En Bulgaria sí hubo, de hecho, una tentativa de juicio contra el Jefe de Estado, Jivkov. ¿Pero por qué había que condenarlo exactamente? Se buscaba una ley en nombre de la cual fuera posible condenarlo. Pero era él mismo quien había escrito las leyes; había actuado de acuerdo con sus propias leyes. Entonces trataron de condenarlo por malversación de fondos, por enriquecimiento ilícito, cosas así; parecía casi irrisorio. Él había arruinado al país con su política, había arruinado la vida interior de la gente. ¿Cómo medir y condenar algo así? Lo cierto es que el juicio a Jivkov terminó en absolucón, o quizá en el pago de una multa, o algo por el estilo; entretanto este señor era muy viejo, pasó un tiempo en un asilo y murió. En suma, ése no era el mejor camino.

Lo que se habría podido hacer, en cambio, es abrir de par en par los archivos, crear comisiones de investigación compuestas por historiadores, por personalidades que fueran respetadas de modo unánime. Porque existía gente así, que había tenido un comportamiento muy digno bajo la dictadura, que no había participado y hasta había sido perseguida, pero había logrado sobrevivir... Esto era posible; no se hizo.

Fue una imagen reprimida. Fue lo que se llama, en la vida de un individuo (y en Argentina, país del psicoanálisis, esto lo saben bien), una imagen o hecho reprimido: no quiero saberlo, porque ese recuerdo es demasiado...

penoso. Ahora, ésta es la condición ideal de la neurosis. Prepara la neurosis por venir, la neurosis colectiva, que no es mucho mejor que la neurosis individual.

—E igual que en la neurosis individual, el objeto reprimido resurge bajo otras formas...

Bajo otra forma, claro. Pienso que en Francia, por ejemplo, ese punto reprimido es la guerra de Argelia. Y de vez en cuando, eso resurge de manera brutal. La dificultad radica en que Francia, en Argelia, estaba convencida de su pleno derecho. Y ahora los *pieds noirs*, los franceses nacidos en Argelia que ahora viven en Francia, se ven de pronto acusados de un modo insoportable para ellos, sobre todo porque ellos nacieron allá, no salieron a colonizar un país extranjero. Pues bien, ese malestar reprimido vuelve bajo otras formas; entre ellas, el voto por la extrema derecha. No necesitamos diabolizar a nadie, podemos entender cómo, históricamente, se constituyó la cosa. Pero lo cierto es que el no hacer aflorar estos hechos a la conciencia pública colectiva se traduce en comportamientos amenazantes y hasta peligrosos.

Yo no estoy a favor de los juicios políticos. En cambio, que la historia se escriba, que las instancias políticas tomen posición sobre estas cuestiones, que los manuales escolares, los sitios oficiales de conmemoración reflejen el pasado reciente: ahí sí creo que hay un buen camino. Un pueblo tiene que poder hacer frente a su pasado.

Cada pueblo prefiere siempre verse como héroe o como víctima: una de dos, o fuimos los mejores, o es que un ogro malo vino y nos venció. Ahora bien, la educación colectiva se beneficia sobre todo en momentos en los que nos damos cuenta de que fuimos también malhechores; que tenemos también una parte de responsabilidad. Esos momentos no hay que silenciarlos.

—A propósito de la actitud de las sociedades contemporáneas en relación con las ideologías “diabolizadas” usted habla de la “tentación del bien”. ¿En qué consiste exactamente esto?

Usted sabe que normalmente se habla de la “tentación del mal”. Es una fórmula cristiana, evangélica: “Protégenos de la tentación del mal.” Ahora bien, al reflexionar me doy cuenta de que la tentación del mal (una vez que dejamos de creer que, por ejemplo, la sexualidad es el mal), la tentación de realizar algo que uno conoce pertinentemente como malo, es un hecho del todo excepcional. Y en el fondo los grandes criminales de la historia (y creo que lo mismo es cierto de los generales argentinos) no fueron tentados por el mal, fueron tentados por el bien; creían poseer la llave del bien, sabían lo que era, querían imponerla por todos los medios a sus compatriotas, incluso a veces al mundo entero. En estos casos precisos es cuando la violencia es más peligrosa: porque en nombre del bien se puede, con impunidad en relación con la propia conciencia, realizar el mayor de los males. En mi

libro cito varias veces una frase de un gran escritor ruso, Vasili Grossman, que dice: “Cuando asoma el alba del bien, los viejos y los niños perecen, corre la sangre.” Cuando uno está convencido de poseer el bien y decide repartirlo alrededor, bueno, eso significa que se acepta sacrificar la voluntad y, por lo tanto, en definitiva, la vida de los otros.

Las democracias liberales de hoy no son la encarnación tranquila del bien; seguimos debatiéndonos entre problemas difíciles, sin excluir esta tentación del bien, que existe igualmente entre nosotros. Ella consiste, entonces, en el dominio interno, en una suerte de política de lo moralmente correcto, tal vez ausente en Argentina, pero que se encuentra fácilmente tanto en Estados Unidos como en Francia; consiste en cierta manera de moralizar la propia posición, una cierta intolerancia en el discurso público. Después, en el dominio externo, consiste en lanzar expediciones punitivas contra estados juzgados “bandidos”, “Estados-gángsters”, y a corregirlos por la fuerza. No es que la paz y la armonía reinen ya en el mundo; pero este tipo de intervención, hasta ahora, ha resultado tener consecuencias negativas. Y esto viene desde las Cruzadas, que fueron hechas con las mejores intenciones, pasando por las conquistas coloniales y hasta hoy, con esto que se llama guerras éticas, guerras humanitarias, una expresión que me pone los pelos de punta, porque no veo cómo una guerra puede ser humanitaria. Aquí tenemos, entonces, una “tentación del bien” característica.

—Usted menciona a Vasili Grossman; es una figura recurrente en muchos de sus libros, junto con Etty Hillesum², Primo Levi³, Germaine Tillion⁴ entre otros... Uno tiene la impresión de que usted, aunque no se niegue a formular principios positivos abstractos, a la hora de oponer algo positivo a los grandes males del siglo, prefiere señalar personas concretas.

Sí, es cierto. Y en este libro en particular, hasta es totalmente deliberado y significativo: los capítulos que analizan los grandes males están escritos según el modo analítico y general; mientras que los retratos de individuos representan el bien se muestra a individuos admirables. Como si la abstracción conviniera al polo negativo y la individualización al polo positivo.

Creo que cuando formulamos el bien de modo abstracto caemos en una especie de catequismo. Nos volvemos moralizadores, en un sentido que no me gusta. Yo no sé cómo hay que hacer; creo que lo mejor que podemos decir

“No soy un triunfalista, no creo que todo vaya para mejor en el mejor de los mundos; pero si vemos las cosas en perspectiva histórica, resulta que no estamos en un momento de crisis violenta”.

es: miren cómo X o Y o Z, en circunstancias sin embargo muy difíciles, se comportaron con dignidad, coraje, generosidad; ahí hay, por lo tanto, un camino posible.

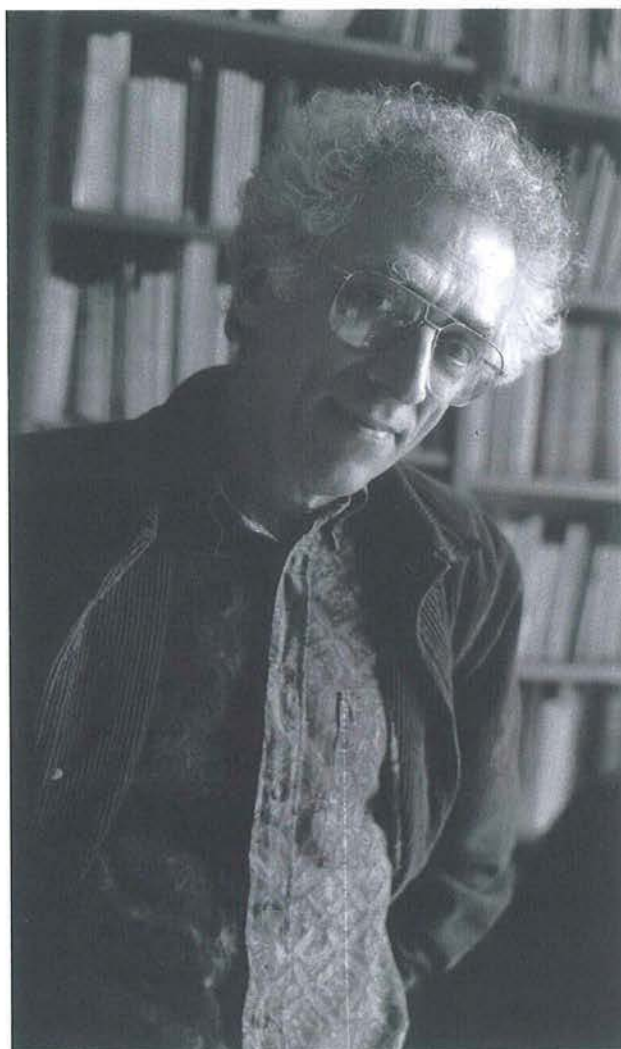
Pero para mí personalmente hay otra razón, más profunda. Me parece que el totalitarismo, este mal del siglo, y con frecuencia más allá del totalitarismo el mundo moderno, representan un ataque contra el individuo. El individuo no es sólo un hecho; es también un valor. En todo caso en este mundo nuestro, porque el individuo no fue siempre un valor; pero desde el siglo XV y en Europa, y además esporádicamente incluso antes, hemos evolucionado hacia una visión del mundo en la que percibimos la dignidad del individuo como un valor. Eso quiere decir que es un crimen alienar por entero la voluntad del individuo; torturarlo, someterlo a violación, matarlo. Ésos son para nosotros la encarnación misma del crimen. ¿Por qué? Porque en la violación la mujer es totalmente privada de su ser individual, se limita a sufrir una acción exterior; así también en la tortura y el asesinato. El individuo es un valor y, en este sentido, yo encuentro justo cantar ese valor retratando a individuos. Así, si se quiere, el modo de escribir ilustra el sentido mismo de lo que quiero decir.

—Se diría que usted no cree en la crisis, tan anunciada, de los valores de la democracia liberal...

No. Yo observo (porque empiezo a tener mis años) que hay una característica notoria en los seres humanos: se perciben siempre en crisis (se ríe). Las voces de Casandra que anuncian desgracias para mañana son siempre muy escuchadas. La decadencia de Occidente, la derrota del pensamiento... A quienes nos dicen que todo va mal, los escuchamos con mucha confianza.

Pero sí observo en relación con mi existencia, con lo que conozco, encuentro que el mundo actual es tirando a menos triste que el de un año como, digamos, 1940. En 1940 Europa entera, salvo Inglaterra, era totalitaria. La mitad estaba ocupada por la Alemania nazi, con varios regímenes violentamente represivos alrededor; por otro lado, la Unión Soviética que ocupaba otros tantos países. Bueno, yo encuentro que era un momento bastante más trágico para la humanidad, en todo caso para este continente, que lo que pasa en 2001. El mundo de hoy no funciona bien, la felicidad no es el horizonte común, pero yo personalmente no creo en el Paraíso en la Tierra; creo que vivimos en un jardín imperfecto y que será por siempre imperfecto.

Eso no quita que buena parte de la población, incluso en Europa, vive en la pobreza, que hay clases excluidas; basta con poner un pie en el llamado tercer mundo para darse cuenta del abismo que separa a los países en el nivel de vida. Pero creo que el hecho de que no haya una guerra abierta es un inmenso bien; el hecho de haber suprimido a los regímenes más represivos es un bien inmenso. Diría incluso que las persecuciones de tipo racial, las



discriminaciones por categoría, se han vuelto relativamente inaceptables, al menos en teoría, en el mundo contemporáneo, lo cual es un paso adelante respecto de, digamos, hace cien años. Así que todo depende de la perspectiva. No soy un triunfalista, no creo que todo vaya para mejor en el mejor de los mundos; pero si vemos las cosas en perspectiva histórica, resulta que no estamos en un momento de crisis violenta. ■

¹ Maurice Papon, secretario general de la prefectura de París bajo la ocupación alemana, fue juzgado por haber participado en la deportación de los judíos franceses. El proceso, muy mediatizado, se inició en 1981 y duró más de 17 años.

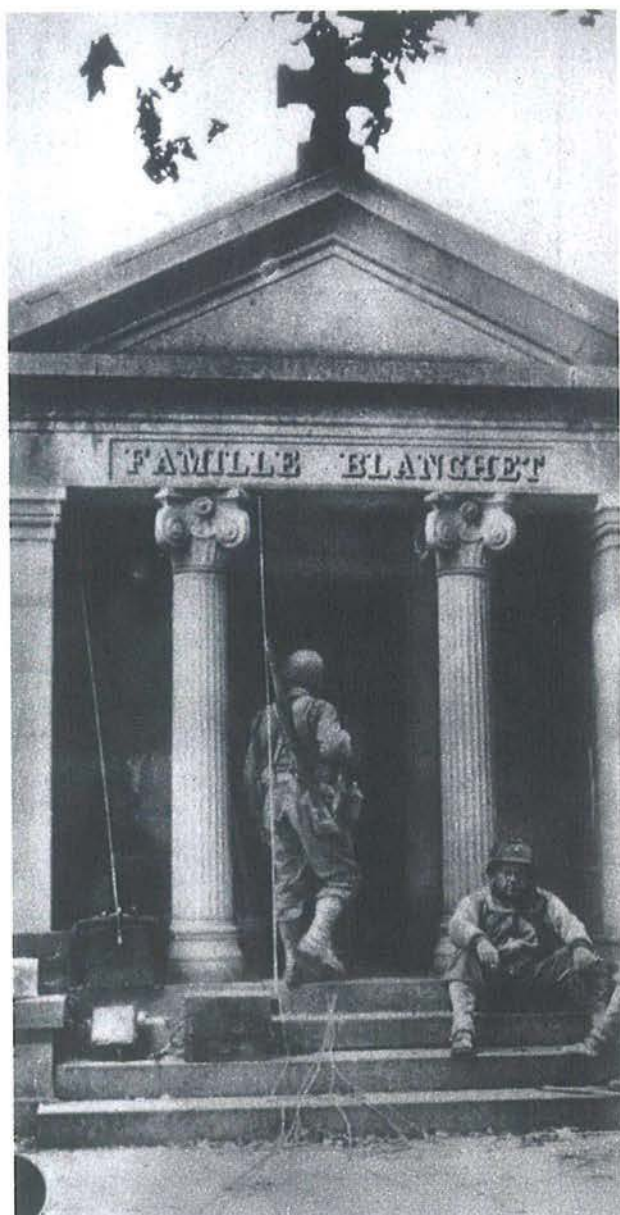
² Judía holandesa muerta en Auschwitz, autora de un *Diario* que ilustra su concepción del perdón y la no-resistencia al mal. Todorov reflexiona sobre su caso en *Frente al límite*.

³ Escritor judeo-italiano, sobreviviente de Auschwitz y autor del famoso testimonio *Si es un hombre* (1987)

⁴ Historiadora y etnóloga francesa. Resistente bajo la ocupación, fue deportada al campo de Ravensbrück, al que sobrevivió.

De Vichy a Argelia: las dificultades de la memoria en Francia.

El regreso del pasado reprimido



por Bruno Groppo

No es posible un olvido sostenido a través del tiempo: el pasado siempre regresa a la superficie y no hay mecanismos eficaces para acallarlo. En Francia, dos sucesos dan cuenta de este fenómeno. Por un lado, el capítulo de Vichy y el colaboracionismo durante la Segunda Guerra Mundial. Por el otro, la guerra de Argelia, que ha vuelto a poner en escena los debates sobre la forma en que actuó el ejército francés. Ambos hechos interrogan sobre lo que sucede cuando la memoria social es reprimida. Groppo también se detiene en la conexión francesa del Ejército Argentino y en cómo los métodos utilizados por la última dictadura militar –la tortura, la desaparición y las redadas en zonas urbanas– fueron producto del adoctrinamiento.

Tema de debate. El rol de Francia en la Segunda Guerra.

Periódicamente, Francia debe enfrentarse con ciertas páginas oscuras de su pasado que desearía olvidar. Entre esos pasados reprimidos que retornan con insistencia, hay dos sobre todo que poseen una importancia muy particular: el período de la Ocupación y de la Colaboración durante la Segunda Guerra Mundial, por un lado, y la guerra de Argelia, por otro. Actualmente, este último es en Francia el centro de un intenso debate que se concentra singularmente en el problema de la tortura, utilizada a gran escala por el ejército y la policía franceses durante el conflicto. Este despertar de la memoria de la guerra de Argelia marca posiblemente el inicio de un ciclo memorial durante el cual este tema ocupará un lugar cada vez mayor en la conciencia colectiva, como ha ocurrido con el caso de Vichy después de los años 60.

Tanto en un caso como en el otro, es constante la imposibilidad de un olvido prolongado y la limitada eficacia de los mecanismos de represión de un pasado traumático. Haré aquí un breve resumen del ciclo memorial de Vichy para analizar el actual debate en torno a Argelia.

El trauma ligado a Vichy y a la Segunda Guerra Mundial ha sido objeto de numerosos trabajos, entre los cuales se destacan particularmente los de Henry Rousso¹, y es acabadamente conocido: se trata del trauma de la derrota de 1940, de la Ocupación, de la Colaboración, de la Deportación.

Después de 1945, la Colaboración fue relegada durante mucho tiempo a los márgenes de la memoria nacional. Según la versión oficial de la historia que sirvió de soporte político y moral a la reconstrucción del país, sólo se consideraba implicados en dicha Colaboración a un pequeño número de “traidores que se habían puesto al servicio del enemigo”; mientras que la gran mayoría de la población había apoyado activamente a la Resistencia².

Poco adecuada a la realidad histórica, esta visión mitificada de una Francia casi unánimemente resistente permitía olvidar el trauma de la derrota de 1940 y, a la vez, no interrogarse acerca de las responsabilidades de unos y otros, empezando por las de la Administración francesa durante los años negros, en particular en la deportación de los judíos³. La memoria oficial, centrada sobre la Francia resistente, termina ocultando la memoria de la deportación⁴. Creación a la vez de gaullistas y comunistas⁵, consagrada por el discurso oficial y las conmemoraciones, popularizada a través del cine, esta visión predominó hasta fines de los años 60. Henry Rousso distingue varias fases de la memoria nacional francesa a propósito de Vichy y de la Colaboración: un primer período de “duelo inacabado” hasta 1954; un período de inhibición que va hasta los inicios de los años 70; y una tercera etapa (“el espejo roto”) caracterizada por el retorno de lo reprimido y por una presencia de los años negros de Vichy en la memoria, que se transforma en una verdadera obsesión⁶. Aquello que se había querido olvidar

“Este despertar de la memoria de la guerra de Argelia marca posiblemente el inicio de un ciclo memorial durante el cual este tema ocupará un lugar cada vez mayor en la conciencia colectiva, como ha ocurrido con el caso de Vichy después de los años 60.”

reaparece en el centro de todos los debates, y ciertos temas adquieren progresivamente una importancia que no tenían inmediatamente después de la Liberación. Así, por ejemplo, las persecuciones a los judíos y su deportación a los campos de exterminio suscitaron una creciente atención⁷. Resulta interesante observar que en los últimos grandes procesos concernientes al período de la Segunda Guerra Mundial —el de Klaus Barbie en 1987, el de Paul Touvier en 1994 y, por último, el de Maurice Papon en 1997-1998— los acusados fueron finalmente condenados por los crímenes relacionados a la persecución de judíos y al genocidio, considerados como crímenes contra la humanidad y por eso mismo imprescriptibles.

En el curso de los últimos años, la atención se ha ubicado más particularmente en el problema de las expoliaciones y una comisión oficial (la comisión Matteoli) integrada por historiadores tuvo a su cargo iluminar este aspecto del pasado. Esta evolución no es propia de Francia: se inscribe en una tendencia más general, que se observa en muchos otros países, orientada a conferirle a la Shoah una importancia central en la historia del siglo XX⁸.

En lo que respecta al período Vichy, la verdad más difícil de admitir es la conducta de la Administración francesa durante la Ocupación y, más específicamente, su responsabilidad en la deportación de los judíos (que en su gran mayoría fueron arrestados por la policía y la gendarmería francesas). Desde ese punto de vista, el proceso contra Maurice Papon, alto funcionario de la Prefectura de Bordeaux durante la guerra, constituyó un hecho particularmente significativo; porque se trata, en cierto modo, del proceso a la Administración francesa o al menos a esa parte de la Administración que se había puesto al servicio de la política alemana sin problemas de conciencia.

La misma dinámica de memoria y olvido imposible se observa también a propósito de un acontecimiento un poco más reciente que ha dejado profundas cicatrices: la guerra de Argelia. Durante esta guerra, que no se tenía por tal —ya que, oficialmente, se trataba de “operaciones de mantenimiento del orden”⁹— y que cobró cientos de miles de víctimas entre la población argelina, el ejército francés utilizó muy ampliamente la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición de personas contra los independentistas y sus simpatizantes, reales o presuntos¹⁰.

En su momento, la utilización de estos métodos y particularmente de la tortura, había sido denunciada en Fran- ➤

cia por una audaz minoría¹¹, en medio de una sociedad que se mostraba bastante indiferente¹². Después del fin de la guerra, y después de la amnistía que había encubierto los crímenes cometidos a lo largo de este período, la actitud predominante en Francia fue la tentativa de olvidar este conflicto. El recuerdo de la guerra de Argelia permaneció largamente reprimido, aun cuando memorias diferentes y opuestas continuaban subsistiendo: memorias argelinas y memorias francesas y, entre estas últimas, memorias de los soldados enviados a Argelia, memorias de la población europea (los llamados "pieds noirs") que había abandonado ese país en el momento de la independencia, memoria de los militantes de la "Argelia Francesa" y de los terroristas de la OAS¹³, memoria de aquellos que, en Francia, se habían opuesto a la guerra. En términos generales, existió respecto de la memoria de la guerra de Argelia un fenómeno de ocultamiento y de represión¹⁴ que recuerda la actitud adoptada después de 1945 en relación a Vichy, pero con una importante diferencia: la ausencia de sentimientos de culpa. Benjamin Stora escribió en 1994: "A diferencia de Vichy, no existe ningún reconocimiento de culpabilidad porque es impensable reconocer que Francia haya llevado adelante una guerra contra una fracción de sí misma ya que ¡Argelia era Francia! Conociendo la tortura, no se la reconocía oficialmente. Es preciso hacer la distinción entre conocimiento y reconocimiento."¹⁵

Ahora bien, en el curso de los últimos años, la memoria de la guerra de Argelia volvió a aparecer en la conciencia colectiva de los franceses. Se vio particularmente reactivada por la publicación, en el diario *Le Monde* del 20 de junio de 2000, del testimonio de una mujer argelina, Louissette Ighi-



Argel, 1961. La ciudad antes de declarar su Independencia.

“En términos generales, existió respecto de la memoria de la guerra de Argelia un fenómeno de ocultamiento y de represión que recuerda la actitud adoptada después de 1945 en relación a Vichy, pero con una importante diferencia: la ausencia de sentimientos de culpa”.

lahriz, joven militante del FLN durante la guerra de Argelia, que había sido horriblemente torturada en 1957 por el ejército francés. Dos ex generales franceses, Jacques Massu y Paul Aussaresses, quienes habían tenido responsabilidades importantes durante la guerra de Argelia, reconocieron públicamente en *Le Monde* del 22 de noviembre de 2000 la utilización de la tortura por el ejército francés¹⁶. Sus declaraciones no aportaron nada nuevo sobre la realidad de los hechos, que la gente conocía, pero son importantes en tanto reconocimiento público de los hechos mismos. Un extenso debate se desarrolló entonces en la prensa y en los medios de comunicación de Francia alrededor de estos temas en los últimos meses del año 2000 y comienzos del año siguiente. “Se manifiesta aquí un gigantesco deseo de verdad a propósito de Argelia”, comentaba el 28 de noviembre de 2000 en *Le Monde* el historiador Pierre Vidal-Naquet, quien se declaraba sorprendido por este tan tardío “retorno de lo reprimido”. Así, se descubrió, por ejemplo, que cerca de 350.000 personas que habían realizado su servicio militar en Argelia sufrían trastornos psíquicos vinculados a la guerra¹⁷. La publicación, en mayo del 2001, de un libro de memorias del ex general Paul Aussaresses¹⁸ sobre la guerra de Argelia tuvo un efecto explosivo. Son “las memorias de un asesino”, comentó Vidal-Naquet en *Le Monde* del 3 de mayo de 2001. Y podría agregarse: de un asesino particularmente pavoroso y cínico que no sólo no manifiesta arrepentimiento alguno sino que, al contrario, reivindica tranquilamente y sin remordimiento los asesinatos, las torturas sistemáticas, las ejecuciones sumarias, las desapariciones, los “suicidios” simulados, las masacres de prisioneros y de civiles y declara, además, que para él la vida humana tiene poco valor. “Sus confesiones son terribles para Francia, para la República y para sí mismo”, escribe *Le Monde* titulado en primera página “Francia frente a sus crímenes en Argelia”. En su editorial “Después de Vichy, Argelia”, el diario recuerda que Francia “cerró durante mucho tiempo con triple vuelta de llave el armario de las memorias donde duermen los fantasmas que, tarde o temprano, vuelven, nos trastornan y nos acosan”. Después del fantasma de Vichy, hoy es el de Argelia el que sale de los armarios de la memoria: el recuerdo pavoroso de “actos contrarios a todas las leyes humanas, incluidas las de las guerras”, cometidos en nombre de Francia y planificados y encubiertos por los gobiernos de entonces. En Argelia, el Estado se transformó en terrorista; mien-



Una escena. Los americanos custodian a un oficial germano en el Norte de Francia durante la Segunda Guerra.

tras conservaba en la metrópolis las formas exteriores de la democracia. Este armario lleno de horrores, desde entonces abierto, difícilmente pueda cerrarse. Francia está obligada a mirar de frente sus propios crímenes y es seguro, como ocurrió en el pasado con el “síndrome de Vichy”, que asistiremos al desarrollo de un “síndrome de la guerra de Argelia”. De aquí en más, como lo subraya el editorial del diario *Le Monde* “la obligación [de verdad] que se impuso para Vichy, se impondrá hoy para Argelia. El acto público y fanfarrón del general Aussaresses obliga a ello. Si esto no ocurriese, el silencio de las más altas autoridades del Estado significaría la aceptación de la dialéctica criminal que el veterano organizador del ‘contra-terror’ en Argelia reivindica hoy”. Aquí también se plantea el problema de la impunidad para estos crímenes que no podemos calificar de otra manera que de ‘crímenes contra la humanidad’. “¿Cómo reivindicar —concluye el editorial de *Le Monde*— el proceso contra Maurice Papon y su ‘crimen de escritorio’ y negarse a la vez a juzgar los crímenes, bien reales, del general Aussaresses?”.

Pero detrás del problema de la tortura en Argelia, aparece el problema más general del pasado colonial. La tortura

y otros métodos bárbaros no comenzaron con esta guerra, sino que han sido utilizados mucho antes en Argelia misma o en Indochina¹⁹. En consecuencia, el problema es el de la represión de la historia colonial²⁰, y esto no afecta sólo a Francia.

El problema de la tortura en Argelia concierne también y directamente a la Argentina. El uso de la tortura y de otros medios de terror son un aspecto importante de la doctrina militar francesa de la contra-guerrilla elaborada sobre la base de las experiencias acumuladas en Vietnam. Esta doctrina (llamada también “doctrina de la guerra psicológica o de la guerra revolucionaria”), enseñada por oficiales franceses en la Escuela de Guerra Argentina, ha ejercido una influencia considerable sobre la formación de los cuadros militares en Argentina, particularmente de aquellos que ocuparon cargos de responsabilidad durante la dictadura.

En una nota publicada el 4 de enero de 1981 en el diario *La Razón*, el general Ramón Camps, jefe de la policía federal durante la dictadura de Videla y uno de los principales organizadores del terrorismo de Estado, reconoció explícitamente la importancia de esta influencia francesa, completada y reemplazada luego por la influencia norteamericana.²¹ Las polé- ↪



1956. Soldados franceses enseñan su idioma a niños argelinos.

micas suscitadas en Francia por la reciente publicación del libro de Aussaresses permiten esclarecer en parte este aspecto de la cooperación militar entre Francia y Argentina.

Una encuesta publicada en junio del 2001 en el semanario *Le Point*²² muestra cómo los especialistas franceses han formado a una parte considerable de los oficiales superiores argentinos²³ en la guerra llamada "psicológica" o "antisubversiva" y cómo los métodos (tortura sistemática, desapariciones y redadas en zonas urbanas, etc.) que fueron aplicados entre 1976 y 1983 por la dictadura militar argentina estaban directamente inspirados en esta doctrina militar francesa y en la experiencia acumulada por el ejército francés en Indochina y en Argelia²⁴. Iniciada en 1957, con el envío a Argentina de dos oficiales franceses (los tenientes coroneles Patrice de Naurois y François Pierre Badie), la cooperación militar franco-argentina se consolidó con la aparición, en febrero de 1960, de una misión militar francesa permanente, compuesta de tres oficiales superiores. Entre ellos, el teniente coronel Henri Grand d'Esnon y el comandante Boulnois²⁵, quienes formaron en los métodos franceses a numerosos militares argentinos. El autor de la encuesta publicada en *Le Point* escribe: "Los cursos franceses de contra-insurrección están en todas partes. En el Colegio Militar, el joven Rafael Videla, quien, quince años más tarde, estaría al frente de la Junta argentina, los aprecia y los enseña. A partir de las teorías francesas, los militares argentinos elaboraron un plan bautizado como Conintes (Comoción Interna del Estado) destinado a prevenir todo movimiento de lucha civil contra el Estado, igual que una circular doctrinaria en tres tomos, en uso hasta el golpe de Estado de 1976: la 'RC-8-2/operaciones contra las fuerzas irregulares'. De 1956 a 1963, los franceses habían formado toda la

nueva camada de los militares argentinos"²⁶. La cooperación no se limita a la enseñanza dispensada a la Escuela de Guerra argentina por los instructores franceses, sino que da lugar también a viajes de estudio, como el que en 1958 realizaron a Argelia sesenta cadetes argentinos pertenecientes a la primer promoción formada por los franceses. ¿Qué mejor, en efecto, que ir a ver en el terreno, en plena guerra de Argelia, cómo los métodos enseñados eran aplicados en vivo por el ejército francés?

Después de un período de eclipse en los años 60, como consecuencia de una orientación más pro-americana de la institución militar argentina, la cooperación "anti-subversiva" franco-argentina fue relanzada en el decenio siguiente, en particular con la llegada en 1974 de otro especialista, el coronel Robert Servant, que había servido antes en Indochina y Argelia; su despacho se encontraba en el cuartel general del Ejército, entonces comandado por Videla²⁷. El período de mayor compromiso francés con el ejército argentino concluye en 1976. En lo sucesivo, París tomará distancia de los torturadores argentinos. La misión militar fue entonces "desactivada"²⁸.

La influencia de las doctrinas militares francesas de la guerra antisubversiva en los militares argentinos ha sido considerable. Las obras teóricas francesas sobre este tema²⁹, traducidas y publicadas en Argentina, figuran entre los principales textos de la Escuela de Guerra, y a partir de Argentina, su influencia se extendió a los otros ejércitos latinoamericanos, que, sobre todo después de la revolución cubana, se consideraban comprometidos en una guerra a escala continental (y planetaria) contra el comunismo. Los métodos franceses, experimentados en las guerras coloniales en Indochina y Argelia, y presentes por otra parte en la doctrina militar americana de la counterinsurgency, parecían particularmente apropiados, a pesar de que no le permitieron al ejército francés ganar esas guerras.

Lo que sucedió en Argentina entre 1976 y 1983 ha sido, en ciertos aspectos, una continuación de la guerra de Argelia. Los militares golpistas argentinos han librado una suerte de "batalla de Argelia" a la escala del país, con los métodos de terror que son en gran parte los mismos de los descritos en el libro de Aussaresses. El desencadenamiento de violencia que acompañó la instauración de la dictadura no fue de ninguna manera el fruto de la improvisación, sino por el contrario la puesta en práctica de una elección maduramente reflejada en la base de una doctrina militar importada. Aquí provocó, según las estimaciones de los organismos de derechos humanos, aproximadamente 30.000 víctimas, entre las cuales se encuentran también quince desaparecidos franceses.

El juez de instrucción francés Roger Leloire, quien investiga estos casos, ha citado recientemente al ex general Aussaresses y a uno de los ex responsables de la misión militar francesa en Argentina, Robert Servant. Según el artículo de

Le Point, ni uno ni otro quisieron suministrar información; pero la cuestión sigue abierta. Se trate de la guerra de Argelia o de la dictadura argentina, ese pasado de torturas y de desapariciones forzadas es imposible de olvidar. ■

Bruno Groppo es investigador del Centre National de la Recherche Scientifique, Centre d'Histoire Sociale du XXe Siècle Université Paris I Panthéon Sorbonne, Francia

1. Ver Henry Rousso, *Le syndrome de Vichy*, París, Seuil, 1987.
2. "La Colaboración en su conjunto fue considerada como un paréntesis, un fenómeno dramático pero minoritario, siendo los valores de la 'Francia eterna' encarnados por la Resistencia" (Eric Conan y Henry Rousso, *Vichy, un passé qui ne passe pas*, París, Gallimard, 1996, p. 29).
3. Por ejemplo, la responsabilidad de la Deportación, que en Francia involucró a más de 70.000 personas, fue atribuida exclusivamente a la ocupación alemana, olvidando que la inmensa mayoría de los deportados habían sido detenidos por la policía y la gendarmería francesas. En efecto, el aparato administrativo francés fue puesto al servicio de la Colaboración y es esta realidad la más difícil de admitir y la que más se ha intentado ocultar.
4. Cfr. Annette Wieviorka, *Déportation et génocide. Entre la mémoire et l'oubli*, París, Plon, 1992.
5. "A partir de 1944-1945, la memoria nacional estuvo polarizada de un lado por la memoria gaullista y, del otro lado, por la memoria comunista. Aunque adversarios irreductibles, gaullistas y comunistas, que constituyen las dos grandes corrientes políticas de la Francia de posguerra, compartieron una cierta visión de la Historia, insistiendo también los segundos en el carácter criminal pero marginal de la Colaboración y definiendo a la Resistencia como una reacción patriótica de masas y como una alianza de clases.(...) Estas dos memorias van a forjar los mitos de los años cincuenta-sesenta". (E. Conan y H. Rousso, op. cit., p. 29).
6. Henry Rousso, *Le syndrome de Vichy*, op. cit.
7. Annette Wieviorka, *Déportation et génocide*, op. cit.
8. Christian Delacampagne observa que, "frente a la dimensión de la Shoah, el mundo occidental ha experimentado una culpabilidad tan intensa que se siente incapaz de asumir esta última y comienza por rechazarla en bloque. Ha elegido reprimir el recuerdo del crimen más que intentar analizar las causas. Y, por miedo, se protege de un eventual retorno de lo reprimido, adoptando durante al menos un cuarto de siglo una estrategia basada en la indiferencia" (*Histoire de la philosophie au XXe siècle*, París, Seuil, 1995, p. 212).
9. Recién el 10 de junio de 1999 el Parlamento francés, en un voto histórico, reconoció como "guerra" a los acontecimientos de Argelia, hasta ese momento calificados, oficialmente, como "operaciones de mantenimiento del orden".
10. Con relación al carácter muy ampliamente difundido de la tortura, véase especialmente la tesis de Raphaëlle Branche, *L'armée et la torture pendant la guerre d'Algérie. Les soldats, leurs chefs et les violences illégales*, París, Institut d' Etudes politiques, 2000. Esta tesis está basada en el minucioso examen de numerosos archivos militares y civiles y, en particular, de los "diarios de marcha de las operaciones" llevados por los regimientos comprometidos en la guerra de Argelia.
11. Recordemos, entre otros, los nombres de Henri-Irénée Marrou, Hubert Beuve-Méry, Pierre-Henri Simon, Claude Bourdet, Pierre Vidal-Naquet,

- Henry Alleg, París de la Bollardière, Paul Teitgen, André Frossard
12. Cfr. "Une opinion informée mais largement indifférente", *Le Monde*, 2/12/2000.
 13. Organisation de l'Armée Secrète, organización terrorista clandestina, ferozmente opuesta a la independencia de Argelia y responsable de numerosos atentados y asesinatos.
 14. Benjamin Stora, *La gangrène et l'oubli. La mémoire de la guerre d'Algérie*, París, La Découverte, 1991.
 15. Benjamin Stora, "Cicatriser l'Algérie. Entretien avec Benjamin Stora" en Dimitri Nicolaidis (Dir), *Oublier nos crimes. L'amnésie nationale: une spécificité française?*, París, Editions Autrement (Série Mutations N° 144), 1994, p. 240. Stora señala que "sólo una reapropiación consciente de las memorias permite reconocer el pasado como pasado, es decir, de no vivirlo más como presente" (*Ibid.*, p. 237).
 16. Massu expresó cierto remordimiento mientras que Aussaresses justificó el recurso a la tortura y reconoció haber procedido él mismo a ejecuciones sumarias, matando, con sus propias manos, a 24 personas.
 17. Cfr. *Le Monde*, del 28/12/2000
 18. Paul Aussaresses, *Services spéciaux: Algérie 1955-1957*, París, Editions Perrin, 2001, El diario *Le Monde* del 3 de mayo, 2001 publicó extractos completamente espantosos del libro ("Les aveux du général Aussaresses", pp. 14-15), además de una entrevista con el autor ("L'accablante confession du général Aussaresses sur la torture en Algérie").
 19. Cr. Alain Ruscio, "Du Tonkin à Alger, des 'violences de détail'", *Le Monde Diplomatique*, n. 567, Junio 2001, pp. 10-11. Ver también Alfred Grosser, *Le crime et la mémoire*, París, Flammarion, 1989, pp. 173-175.
 20. Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire, Nicolas Bancel, "Une histoire coloniale refulée. Les impasses du débat sur la torture en Algérie", *Le Monde Diplomatique*, n. 567, junio 2001, pp. 10-11.
 21. Cit. En Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas, Buenos Aires, Eudeba, 1995 (1ra. Edición 1984), p. 474.
 22. Pierre Abramovici, "L'autre sale guerre d'Aussaresses", *Le Point*, n. 1500, 15 de junio 2001, pp. 26-34.
 23. Entre los cuales se encuentra Antonio Domingo Bussi, considerado como responsable de varios cientos de desapariciones y actualmente buscado por la justicia española por crímenes contra la humanidad.
 24. *Le Point* titula en primera página "Cómo Francia ha exportado la tortura a Argentina". Es necesario precisar que *Le Point* no es una publicación de extrema izquierda, sino más bien de orientación conservadora-liberal.
 25. Según Camps, citado por Pierre Abramovici, "sus cursos [en la Escuela de Guerra Argentina] son hijos de la experiencia francesa en Indochina y aplicada en ese momento en Argelia" (P. Abramovici, art. cit., p. 29).
 26. P. Abramovici art. cit. p. 32.
 27. El año anterior, otro "especialista", Paul Aussaresses, había sido enviado a Brasilia como agregado militar.
 28. P. Abramovici, art. cit. p. 34.
 29. Entre otros, el libro de Roger Trinquier *La guerre moderne* (1961), donde el autor teoriza el uso del terror en la guerra "antisubversiva". Sobre la doctrina francesa de este tipo de guerra ver Werner Hahlweg, *Storia della guerriglia*, Milán, Feltrinelli, 1973, cap. 7, pp. 217-222. La obra de Trinquier es allí analizada, pp. 220-222. Los teóricos franceses olvidaron un aspecto fundamental: que ellos se enfrentaban a dos movimientos de independencia nacional. Incapaces de reconocer este aspecto, no veían más que comunismo: precisamente por eso encontrarán tanto eco en los militares argentinos.

Combatiendo al general

Mientras algunas teorías señalan la idea de un movimiento obrero con un rol pasivo durante la última dictadura, otros defienden la resistencia que se realizó desde el seno de la clase trabajadora. El autor de este artículo sostiene que la participación de los trabajadores fue decisiva para deteriorar el poder dictatorial e instaurar la democracia.

por Pablo A. Pozzi

La apertura democrática, que el 10 de diciembre de 1983 llevó al partido Unión Cívica Radical al gobierno de la Argentina, cerró un proceso iniciado siete años y medio antes con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En cierta forma, este proceso en torno a la apertura ha llevado lentamente a la búsqueda de explicaciones que no sólo justifiquen el pasado sino que también garanticen su superación futura. Éste incluyó la toma de conciencia a nivel nacional sobre la profunda crisis por la que atravesaba la sociedad argentina, ejemplificada en la corrupción masiva, las violaciones a los derechos humanos, la quiebra del aparato productivo.

En esta búsqueda se mezclan, a veinticinco años del Golpe, y particularmente en los sectores medios de la población, sentimientos de culpa y de autojustificación ante lo que se percibe como la participación en el Proceso de Reorganización Nacional (PRN) y sus consecuencias. Esto abarca, desde la negación de lo pasado —excepto en sus aspectos más obvios— a una cierta aceptación apática, pasando por una reinterpretación histórica.

Es así como el sentimiento de los sectores medios de haber participado o de haber permitido el desarrollo del PRN ha llevado a la interpretación de que éste “otorgó” la apertura debido a su fracaso económico, primero, y a la derrota en la Guerra de las Malvinas en 1982, después. Esta per-

cepción, además de ser injusta con los miles de argentinos que desde distintas perspectivas políticas y de diferentes formas se opusieron a la dictadura, es inexacta históricamente.

Es correcto que el Golpe de Estado de 1976 fue considerado por amplios sectores medios, y algunos obreros, como necesario ante el “caos” de los años 1973-1976, puesto que no se percibía ninguna otra alternativa posible; especialmente después del Rodrigazo de junio de 1975. Pero por un lado, no hay que confundir un deseo de “paz y estabilidad” con el apoyo y la compenetración con las prácticas y objetivos del PRN, y menos aún con sus consecuencias. Y por otro, tampoco se puede negar la resistencia que con un sinfín de problemas, realizaron los trabajadores.

Asimismo, es cierto que el fracaso de la política económica del Ministro Martínez de Hoz y su equipo evidenciaron que el PRN naufragaba. Al igual que es indudable que la derrota militar en las Malvinas aceleró el proceso de apertura, especialmente frente a la timidez de los dirigentes políticos, sociales y religiosos del país. Si bien los golpes han “politizado” a la institución militar, también han “militarizado” a la sociedad civil, como diría Rouquié¹.

Varios analistas han señalado la relación entre el fracaso económico y la Guerra, apuntando que la última se torna



“necesaria” como intento por ganar un espacio que permita corregir el modelo. Se plantea que, de haber triunfado en las Malvinas, la dictadura se habría consolidado a largo plazo. Lo curioso de esa última afirmación es que no hay razón para pensar esto ya que, en general, se pone en duda la posibilidad del PRN para revertir la situación económica dados los problemas del capitalismo a nivel internacional y la quiebra del aparato productivo a nivel nacional.

En ambos casos, se deja de lado la relación dialéctica entre la sociedad y la economía. En cierta forma se presenta una sociedad desmovilizada, casi apática, al margen de ciertos conflictos que ocurren de vez en cuando; pero que se aceleran a partir de Malvinas y el fracaso del proyecto económico².

Los signos del poder

La hipótesis que nos interesa desarrollar en este trabajo postula que, si bien el aspecto económico es fundamental al PRN, no es el único. El PRN es un modelo de país que abarca no sólo una reestructuración económica, sino también social, ideológica y por ende política. Se basa en relaciones de poder para llevar a cabo sus fines. A decir de Juan Villarreal “el poder es algo mucho más difuso, general y complejo que una forma de gobierno, que sus protagonistas y sus leyes. Se constituye a partir de una red variable de relaciones de fuerza que recorre la totalidad social produciendo efectos diversos, de una imbricación compleja de relaciones de dominación que no se reconoce verazmente en la simple oposición entre gobernantes-gobernados, no se sitúa en un único punto identificable como gobierno del poder estatal”³.

En este sentido, el aspecto social cobra una importancia básica en el éxito o fracaso del PRN. Así, si bien se conjugan una serie de factores que se interrelacionan entre sí, las actitudes de los distintos sectores sociales frente al Proceso es, para nosotros, lo más importante. Dentro de esto, son los trabajadores —la clase obrera— el sector social clave, como lo supo reconocer en su momento la propia dictadura. En este sentido, el fracaso del régimen dictatorial para lograr sus objetivos con relación a los trabajadores, es la base material o, se presagia, el fracaso del PRN globalmente. La resistencia de la clase obrera frente al tremendo poder que desató la ofensiva de la gran burguesía financiera a través del partido militar, se convirtió en el escollo fundamental frente al cual los relativos éxitos en otros campos se revelarían secundarios.

A partir del Rodrigazo de junio de 1975, se reduce sensiblemente el accionar del movimiento obrero. La represión desatada, tanto por los servicios de seguridad y sus grupos paramilitares como por las Fuerzas Armadas, junto con una falta de alternativa clara y nucleadora, son las razones fundamentales de un reflujo que se concreta entre mediados y fines de 1975.

Ya a principios de 1976, la clase obrera había reducido su accionar esforzándose por no brindar blancos fáciles, a pesar

de que sus sectores más combativos desarrollaban una táctica de enfrentamiento directo con la represión.

Con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se inicia la resistencia obrera a la dictadura. Es importante comprender los límites ideológicos de la misma. Siguiendo el análisis presentado por Daniel James, vemos que la resistencia pocas veces se generalizó tanto como para constituirse en una crítica implícita a las relaciones de producción capitalista⁴. En general, la oposición a la “eficientización” no se extendió a un cuestionamiento del derecho del empresario a administrar sus plantas fabriles. “Es obvio que la aceptación de la legitimidad de las relaciones de producción capitalistas y las relaciones de autoridad contenidas en ellas eran en sí mismas reflejo de ciertos postulados básicos de la ideología peronista”⁵. Así el obrero, si bien favorece aumentos en la productividad, en general opina que ésta no debía lograrse “por un aumento incontrolado de la carga de trabajo, sino más bien por una mejor eficiencia del trabajo, es decir, por un menor gasto de esfuerzo físico”⁶.

Por otra parte, es evidente que, a pesar de estos límites, la resistencia de los obreros representaba un desafío implícito a ciertos aspectos fundamentales de la organización de la producción capitalista; particularmente, en lo que se refiere a la necesidad de readecuar el aparato económico a la concentración y la competencia internacional a través del aumento de la tasa de explotación. “A pesar de la inexistencia de un reto explícitamente articulado al control empresarial, el resultado concreto de la insistencia de los obreros, en lo que se refiere a la reinterpretación de niveles aceptables de rendimiento [...], condujo a un enfrentamiento inevitable con los empleadores”⁷ y con el régimen dentro de las fábricas.

Los reclamos y sus alcances

Al darse el golpe, el movimiento obrero en su amplia mayoría ya estaba realizando el duro proceso de reajuste aprendiendo de los errores de la época. En base a la experiencia histórica forjada bajo dictaduras anteriores, particularmente la de 1955-1958, se aplicarían métodos de lucha y organización más acordes con la represión desatada y la falta de organización legal. Este proceso fue sumamente costoso, puesto que los sectores más combativos y mejor organizados se lanzaron a defender sus conquistas. Así, por ejemplo, tenemos las huelgas automotrices de julio, agosto y septiembre de 1976 que fueron brutalmente reprimidas con desapariciones, detenciones, asesinatos y la ocupación de las fábricas por parte de las Fuerzas Armadas. Lo mismo ocurre con otros sectores obreros. Son los metalúrgicos (marzo de 1976), los portuarios (noviembre de 1976) y los trabajadores de Luz y Fuerza, además de los automotrices, los que llevan la punta en la resistencia obrera a los objetivos socio-económicos del régimen, sufriendo como consecuencia los efectos salvajes de la represión.

Sin embargo, y a pesar de lo denodado de la lucha de estos sectores, es notable que la clase obrera ya se había replegado. Es por eso que los conflictos de 1976, que en otro momento (1969, 1971, 1975) se habrían expandido a todo el movimiento obrero desatando oleadas de medidas de fuerza, no tienen ese efecto. El gran valor de estas luchas es que en ellas se van ensayando nuevos métodos, y desempolvando viejos, para llegar a las mejores formas de oponerse al régimen. Así, el gran saldo positivo de todas estas jornadas fue el crecimiento en la experiencia de lucha de los trabajadores, además de una profundización del odio de clase que generó la represión. Queda claro, también, que hubo éxitos parciales como, por ejemplo el que alcanzaron los portuarios quienes, si bien no lograron la totalidad de sus reivindicaciones, le arrancaron al régimen aumentos de hasta el 35 por ciento. En el gremio automotriz, el primer desafío lo llevaron a cabo los obreros de la fábrica IKA-Renault de Córdoba, el mismo 24 de marzo. Ese día los trabajadores intensificaron el trabajo a reglamento, que se venía realizando desde abril, bajando la producción de 40 a 20 unidades y después a 14 el segundo día, mientras se cubrían las paredes de la fábrica con leyendas: "Fuera los milicos asesinos", "Tenemos hambre", "Sabotaje a la superexplotación". El Ejército acudió a la fábrica donde fue resueltamente enfrentado por los obreros, quienes obligaron a retirarse. En las semanas siguientes, las fuerzas represivas se dedicaron a secuestrar y asesinar a distintos delegados y obreros combativos de la fábrica.

A principios de abril, en la fábrica General Motors de Barracas (Capital Federal) entró en conflicto la sección pintura, que fue ocupada por fuerzas represivas que arrestaron a tres de los huelguistas. Inmediatamente toda la fábrica entró en huelga, obligando al régimen a liberar a los tres compañeros detenidos.

A mediados de mayo, comienzan los primeros paros rotativos de 15 minutos en la fábrica Mercedes-Benz. En Chrysler Monte Chingolo y Avellaneda se adoptan medidas similares con cortes de luz de 10 minutos. A través de septiembre las plantas fabriles dedicadas a la producción automotriz protagonizaron una ola de medidas de fuerza consistentes en paros, quites de colaboración, trabajo a desgano y sabotaje.⁸

El ejemplo más claro de las luchas durante estos meses es la experiencia del gremio de Luz y Fuerza, entre octubre de 1976 y marzo de 1977, que demuestra claramente el cambio en los métodos de lucha aplicados a la transformación en las características de la resistencia, ante el fracaso de una táctica de enfrentamiento abierto a la ofensiva de la dictadura.

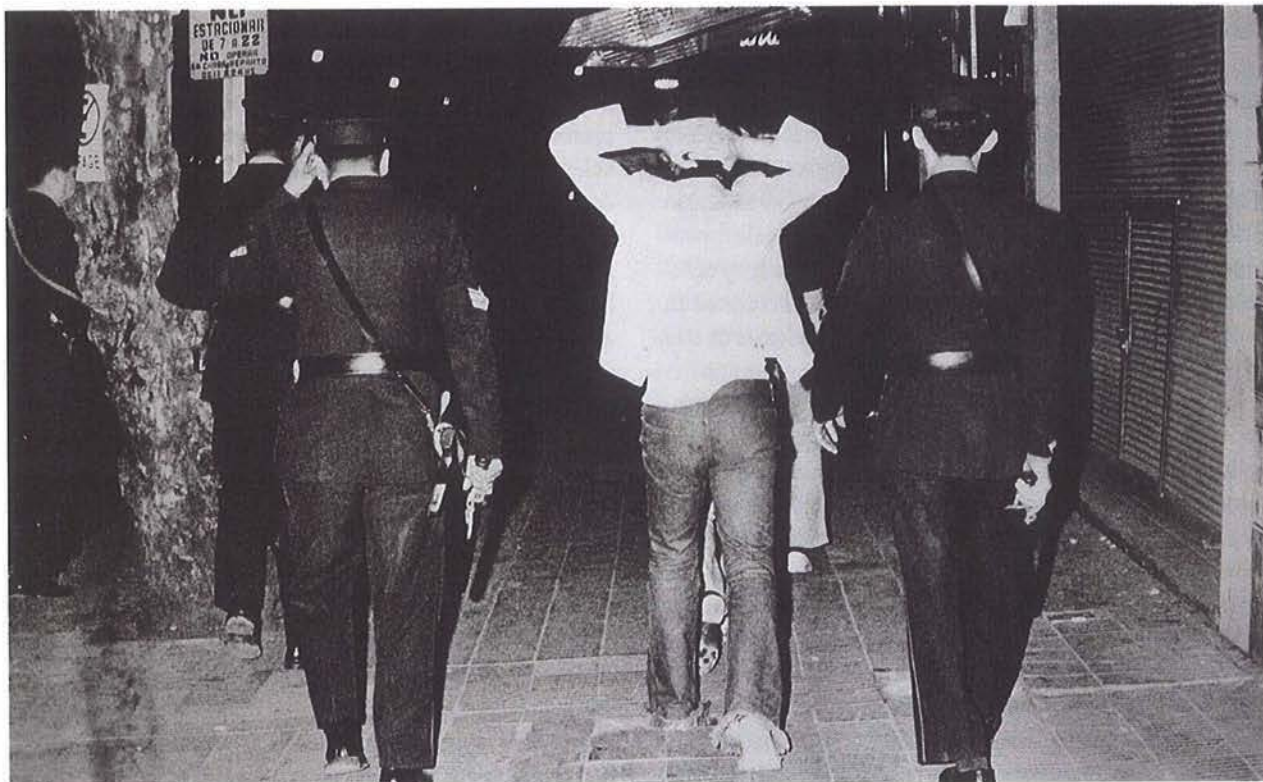
En abril de 1976, tras producirse el golpe militar, el sindicato de Luz y Fuerza fue intervenido; 260 empleados de la empresa SEGBA fueron cesanteados, entre ellos el dirigente Oscar Smith y muchos delegados sindicales; se aprobó la Ley 21.476 que derogaba todos los regímenes laborales de

excepción de los que gozaba el personal de las empresas del Estado. "Se eliminaban la bolsa de trabajo, la prioridad para el ingreso de los familiares de empleados, las tarifas preferenciales en los servicios para el personal, los permisos para los delegados, los sistemas de becas para perfeccionamiento, la participación de los representantes sindicales en promociones laborales. También cesaba la participación del personal en la fijación de dotaciones y planteles y en la discriminación de tareas. Se rebajaba del 7,5 % al 6 % el aporte de la empresa a la obra social del sindicato y, finalmente, se alteraba el régimen horario y, consecuentemente, la remuneración de los trabajadores. La semana laboral pasaba de 36 a 42 horas"⁹.

A partir del día 5 de octubre de 1976, los trabajadores del gremio de Luz y Fuerza, que comprende todas las empresas de electricidad (SEGBA, Agua y Energía, DEBA, Compañía Italo Argentina de Electricidad), privadas y estatales, iniciaron una huelga de brazos caídos en protesta por el despido de 208 compañeros, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Prescindibilidad, del incumplimiento del convenio colectivo de Trabajo, de la rebaja indiscriminada de las remuneraciones, de la falta de pago de los incrementos salariales, de la aplicación de sanciones al personal por reclamar tales derechos, de la negativa a depositar los aportes de los propios trabajadores al Fondo de Obra Social del sindicato y de la amenaza por parte de la Comisión Militar de Asesoramiento



Manifestaciones. 1976 dio paso a otras formas de resistencia.



Los colores de la represión. Detenciones, torturas y secuestros de trabajadores fueron una moneda cotidiana de la dictadura.

Legislativo de cercenar las conquistas alcanzadas y consagradas en el convenio colectivo del gremio.

Este movimiento de lucha, que se prolongará durante los meses de octubre y noviembre, estará caracterizado por paros, abandono de tareas, intentos de movilización, trabajo a desgano y gran cantidad de apagones en diversas zonas. El gobierno militar responderá con represión, amenazas de movilización militar, detenciones, torturas, secuestros⁹.

Reconstruyendo los hechos¹⁰, podemos identificar las principales características del conflicto como las siguientes. El día 5 de octubre comienzan los paros ante el despido de los 208 trabajadores; el mismo día interviene el comando Militar Zona I y son custodiados locales y maquinarias. Los días 7, 8 y 9 de octubre hubo muchas detenciones: 90 operarios en SEGBA 27 en Puerto Nuevo y 18 en Pilar. También se produjeron detenciones en Italo y en las sedes de SEGBA en Quilmes, Lanús, San Miguel, Morón y en la Central Costanera. En Agua y Energía fueron despedidos 40 trabajadores¹¹. El día 8 son secuestrados en sus domicilios tres obreros de la empresa SEGBA: Víctor Seijo, Amado Mieres y Oscar Pellizo, lo que produce el agravamiento del conflicto¹². Se destaca la solidaridad y firmeza que existe entre los trabajadores de Luz y Fuerza. Por ejemplo, a mediados de octubre un teniente pidió a los ingenieros la lista de los delegados a lo que se le respondió que "desde el 24 de marzo no hay más delegados" a lo que se le respondió que "desde el 24 de marzo no hay más delegados".

Este gesto solidario fue compartido por todo el personal desde ingenieros hasta empleados, pasando por subcapataces y contramaestres¹³. Se inicia una gigantesca ola de sabotajes con explosivos en la que son destruidas 14 cámaras transformadoras, la mayoría en la parte sur del Gran Buenos Aires, además de apagones, sobrecarga de tensión y otros trastornos¹⁴. El día 12, en las distintas seccionales de SEGBA, se realizan paros y manifestaciones que son violentamente reprimidas por personal de la policía Federal, al mando del propio jefe de la repartición, general Edmundo Ojeda. La Justicia Federal hace saber su preocupación ante la imposibilidad de asumir la investigación de la responsabilidad penal de todos los posibles imputados, por carecer de medios materiales para ello. En la Capital, el mismo día 12, resultan detenidos 100 trabajadores del gremio. En San Martín, provincia de Buenos Aires, son detenidos 42 trabajadores más. Al día siguiente, se produce el desalojo por parte de las fuerzas de seguridad del personal que se encontraba realizando su trabajo a desgano (calificado por los trabajadores como "trabajo a tristeza"). En la Central Costanera intervienen tropas de la Prefectura Naval y de la Infantería de Marina para impedir que el personal se declare en huelga. El mismo día 13, en Lomas de Zamora, tropas del Ejército ocupan la usina de SEGBA y detienen a dos obreros, otros dos son detenidos en la Central Costanera, uno en Olivos y en Rosario (provincia de Santa Fe) otros varios, entre ellos el dirigente Neifes Juncos¹⁵. Todos los establecimientos son ocu-

gregaron frente a la sede del sindicato, a cuatro cuadras de la Casa de Gobierno, y fueron dispersados por las fuerzas de seguridad²⁸.

La lucha de Luz y Fuerza no fue la única, si bien por su magnitud y duración fue una de las más documentadas. En apariencia, el observador superficial estimaría que el gremio fue derrotado, puesto que toda esta lucha, y la represión desatada, desgastó tremendamente al gremio y fueron muchísimos los trabajadores encarcelados, secuestrados y despedidos durante los cinco meses de conflicto. Después de marzo de 1977, Luz y Fuerza no protagonizará más jornadas de lucha tan frontales, aunque sí se sumará a las distintas movilizaciones en noviembre de 1977 y en 1979. Pero el régimen sufrió un desgaste apreciable y la ofensiva militar perdió un tiempo precioso. El miedo a desatar una explosión popular similar al "Cordobazo" hizo que la Junta vacilase en la aplicación del plan económico.

Lo más valioso de las luchas del movimiento obrero durante estos meses fueron las lecciones dejadas. Era posible enfrentar a la dictadura, mientras no se brindaran blancos que facilitaran la represión. La unidad, solidaridad y firmeza de los trabajadores era la clave de la resistencia. Esto sólo podía ser garantizado por la organización clandestina por la base, tal como apuntó más arriba el delegado de Luz y Fuerza. Había que evitar métodos y formas organizativas que señalen con facilidad a los dirigentes. En este sentido, distintos testimonios certifican que se recurre principalmente a la "Resistencia Peronista" (1955-1957) y que, junto con ésta, hay un grado importante de innovación. Así, en base a la experiencia y al ejemplo, se concretan a través de 1976 una serie de formas de lucha que se ajustan a una correlación de fuerzas desfavorable y a la represión salvaje: "trabajo a tristeza", trabajo a reglamento, quite de colaboración y principalmente el sabotaje.

Los resultados se hicieron sentir: a fines de 1976, Renault anunció que su producción había bajado en un 85 %; en la siderúrgica Dálmine, el 30 % de las chapas salían fisuradas; el 25 % de los automóviles que producía General Motors estaban dañados; en Peugeot se sabotaba en serie los bloques de motor; en el Frigorífico de Reconquista fueron dañados los congeladores de carne para exportación; en SOMISA los obreros oxidaron sistemáticamente las grandes planchas de acero ardiente; en la fábrica Ford se destruyeron los motores de 30 patrulleros Falcon encargados por la Policía Federal; en el Frigorífico Swift toneladas de carne destinadas a la exportación fueron inutilizadas al ser pinchadas las cámaras frigoríficas que las conservaban; en Mercedes-Benz un día desaparecieron todos los instrumentos de medición; en Dálmine de Campana, fue incendiado un cable de alimentación a los altos hornos; en Kaiser de Córdoba, la introducción de bulones en los motores de armado provocó la destrucción de unidades y la producción bajó al 10 %; en las obras hidroeléctricas de Salto Grande fue interrumpido el

"El régimen sufrió un desgaste apreciable y la ofensiva militar perdió un tiempo precioso. El miedo a desatar una explosión popular similar al Cordobazo hizo que la Junta vacilase en la aplicación del plan económico."

suministro de agua a una máquina que realiza la mezcla, provocándose el endurecimiento del cemento en su interior, por lo que se debió suspender el trabajo durante dos jornadas; en Sudamtex de Capital Federal, se hicieron cortes en bobinas de telas y hebras de hilo ocasionando grandes pérdidas a la empresa; en Ciudadela fueron cortadas en una noche treinta ligas en los rieles del Ferrocarril Sarmiento²⁹. En todo esto es notable el nivel de solidaridad y unidad desplegada por los trabajadores. Más arriba mencionamos el caso de General Motors.

Otro ejemplo ocurre en la fábrica EMA, donde la suspensión de tres obreros provocó una huelga con la intervención del Ejército que detuvo a seis trabajadores, incluyendo a los suspendidos. Inmediatamente más de mil obreros de las fábricas vecinas (Editora Abril, Refinerías de Maíz, etc.) se concentraron frente a EMA manifestando su apoyo. Las patrullas militares, que en cierto momento parecían dispuestas a abrir fuego sobre los obreros, acabaron por negociar la libertad de los presos y anularon las tres suspensiones a cambio de la normalización de las actividades³⁰.

En De Carlo, el 14 de mayo se efectuó un paro total por la detención de tres obreros. El 7 de septiembre de 1976 los trabajadores celebraron el día del metalúrgico, a pesar que el régimen abolió la fecha. En la Empresa Ladrillos Olavarría S.A., los militares no pudieron descubrir quiénes eran los autores de pintadas a la entrada de la fábrica, gracias a que no obtuvieron la colaboración de los trabajadores. En la fábrica de tractores Massey-Ferguson, de Rosario, los obreros lograron rechazar a "carneros" que había tomado la empresa para solucionar el quite de colaboración. En Rigolleau, la prensa clandestina informó que un obrero detectado como infiltrado de los servicios de seguridad en la fábrica sufrió un accidente mortal al caerse en un horno³¹.

A esto se puede agregar la inventiva de los trabajadores para lidiar con la represión. Por ejemplo, a fines de 1976, el Ejército acudió a la fábrica Peugeot que se encontraba en huelga. Al llegar fueron enfrentados por los 5.000 obreros al grito de "¡Argentina!", quienes posteriormente pasaron a cantar el himno nacional. Ante semejante demostración de patriotismo, el oficial al mando de la tropa dudó entre el reglamento y reprimir, momento en el cual los obreros aprovecharon para iniciar un diálogo exponiendo ante los soldados sus condiciones de vida y exigiendo la libertad de seis compañeros detenidos, cosa que lograron³². Para la misma época ocurrió un incidente similar en la fábrica Mer-

cedes-Benz donde también se recurrió al himno nacional para frenar la ocupación por parte del Ejército.³³

La tristeza como arma

Como resultado de los conflictos de 1976, el año siguiente, 1977, fue con escasas excepciones un período repleto de "tristezas" y sabotaje sin movimiento espectacular ni conflictos masivos. Es un período en el cual se avanza en los métodos de lucha y se desarrollan formas de organización que protejan a los activistas y delegados que reemplazan a los miles golpeados por la represión. La acumulación de fuerzas y el desarrollo en conciencia avanza pero sin brindar blancos, evitando los enfrentamientos y cuidando celosamente lo que se logra construir. Un primer índice claro de este avance se da en agosto de 1977 cuando los transportistas petroleros realizan una medida de fuerza claramente política contra las empresas Shell y Exxon, por el intento del régimen de privatizar las bocas de expendio. Todo concluye hacia el primer salto en calidad de la resistencia del movimiento obrero bajo el régimen militar³⁴.

"Hacia mediados de octubre en Córdoba, los obreros de IKA-Renault reclamaron un aumento salarial del 50 %. La empresa respondió ofreciendo un 15 %. Los trabajadores rechazaron la oferta y comenzaron la huelga de brazos caídos. Al día siguiente, el Ejército entró en la fábrica a exigir a punta de bayoneta que se comenzara a trabajar. En

una sección, un oficial arengó a los obreros explicando la necesidad de obedecer a los superiores y no reclamar aumentos [...], del mismo modo que los militares no hacen huelga para exigir mejores sueldos. La reacción fue inmediata: toda clase de proyectiles se descargaron sobre el oficial y se generalizó la batalla, en la que por supuesto los militares hicieron uso de las armas con el trágico saldo de cuatro obreros muertos. Al día siguiente, hubo un abandono masivo de tareas. Seis mil obreros, bajo una represión despiadada, se movieron masiva y unitariamente, sin ninguna organización legal"³⁵.

La huelga de IKA-Renault duró cuatro días y logró romper la muralla del silencio. La prensa comenzó a hablar de "amenaza de Cordobazo" y pusieron de manifiesto el amplio apoyo que el conflicto tuvo en los distintos gremios que comenzaban a organizarse para plegarse a la lucha³⁶. Lo esencial fue que el conflicto ganó la calle y puso a la orden del día en todo el país la necesidad de ir a la huelga para recuperar los salarios.

Poco tiempo después, se desataron la huelga ferroviaria y la de correos de La Plata. Rápidamente se sumaron Subterráneos de Buenos Aires, los pilotos y el personal técnico de líneas aéreas, el Hipódromo de Palermo, ENTEL, petroleros, marítimos, portuarios de Rosario, Luz y Fuerza, trabajadores del Estado, colectivos de Buenos Aires, Empleados de Comercio, Petroquímica Argentina, Alpargatas, bancarios, SAFRAR-Peugeot, transportes de Mendoza, frigoríficos y transportistas de nafta³⁷.

En noviembre, veintiún sectores gremiales representando a miles de trabajadores habían suspendido sus actividades laborales, reclamando sobre todo mejoras salariales³⁸.

La iniciación de la oleada de huelgas y su persistencia se produjeron al margen y a veces en contra de las direcciones sindicales, poniendo en evidencia un nivel de organización subterránea que podía abarcar gremios enteros. Se repitieron asambleas de base y de delegados, y allí la burocracia sindical se vio constantemente rebasada.

La huelga ferroviaria de octubre fue el ejemplo más claro de un movimiento de fuerza gestado y lanzado semiclandestinemente que logró realizar asambleas en los lugares de trabajo, eludiendo al aparato represivo. Fue un conflicto de alto contenido, pues cuestionó el plan de privatización de los ferrocarriles y amenazó en convertirse en una huelga general, concluyendo en forma exitosa en materia de reivindicaciones salariales satisfechas³⁹.

Al igual que en 1976, fue notable el nivel de conciencia y unidad a través de los conflictos. Por ejemplo, en subterráneos, donde al conocer la detención de algunos compañeros después de finalizado el paro, volvieron de inmediato y masivamente a la huelga para lograr su liberación⁴⁰. Las reivindicaciones pedidas fueron: 10.000.000 pesos ley de salario mínimo; restitución de las conquistas sociales; normalización del cuerpo de delegados y del sindicato; reincorporación de los cesantes y defensa de las fuentes de trabajo; y una



EDUARDO COMESANA

En dictadura. Trabajo a reglamento, sabotaje y tristeza.

más que casi no trascendió a los medios de comunicación: la renuncia de Martínez de Hoz al Ministerio de Economía⁴¹. Los resultados fueron notables. Era evidente que el terror en su más cruda acepción había quedado atrás⁴². Pero además se consiguieron aumentos salariales: en ENTEL se obtuvo el 100 %, el 83 % en Gas del Estado, y el 43 % en Ferrocarriles Argentinos⁴³. Es evidente que se debe apuntar un cambio en la correlación de fuerzas entre el movimiento obrero y el régimen militar. A diferencia del año anterior, el paro de Renault desencadenó una oleada de huelgas bien organizadas y desde la base; la represión no tuvo blancos fáciles por la magnitud de la movilización y por el tipo de organización.

El avance concretado a fines de 1977 obtiene un margen de maniobra para el movimiento obrero dando un nuevo impulso a la acumulación de fuerza del mismo. En 1978 se remarca un importante aumento en la cantidad de conflictos y medidas de fuerza, registrando la revista Mercado 1.300 de ellos en la primera mitad del año⁴⁴. A su vez, se calculan en 4.000 los conflictos a través del año⁴⁵. Los principales fueron el portuario (julio), el de Fiat (octubre) y el del Frigorífico Swift de Rosario (octubre). Se registraron movilizaciones de bancarios y transportistas. Hubo un nuevo paro ferroviario a fines de noviembre que resultó exitoso y en diciembre entraron en huelga varias empresas, entre ellas Renault y Firestone de Llavallol.

Remarcamos que la mayoría de los conflictos no trascienden a la prensa y al mismo tiempo son, en general, pequeños y de corta duración. Es por esto que todo cálculo en cuanto a número de conflictos debe necesariamente ser inexacto, aunque sirva como orientación general.

Todo confluye hacia un segundo pico cualitativo que ocurre a través de 1979. Decimos a través porque, a diferencia del primer pico en 1977, éste no tiene una sola acción concreta, una oleada de huelgas que lo muestre, sino que se nota por varios hitos cualitativos que marcan el avance en la acumulación de fuerzas del movimiento obrero. Entre estos hitos tenemos la primera toma de fábrica desde 1976 cuando, el 8 de marzo de 1979, entran en conflicto los obreros de Aceros Ohler⁴⁶. En abril, los 3.800 obreros de Alpargatas decretaban, en tumultuosa asamblea en la puerta de la fábrica, un paro por tiempo indeterminado. Tres meses más tarde ocurren tres tomas más: las metalúrgicas Cura Hnos., IME y la Cantábrica⁴⁷. El 16 de septiembre ocurre la huelga de Peugeot que muestra no sólo la coordinación a nivel de la industria automotriz de la base del SMATA, sino que asume características primordialmente políticas al cuestionar la política salarial del régimen. Los trabajadores de Peugeot pedían la equiparación salarial con la empresa líder y el convenio por industria y no por empresa⁴⁸.

Al mismo tiempo, los colectiveros de San Miguel de Tucumán realizan una movilización en demanda de aumentos. También reveladora fue la huelga de Swift, el 8 de noviembre, la que desencadenó en la toma del frigorífico por parte

de los trabajadores y la comunidad de Berisso, la cual apoyó activamente la medida de fuerza⁴⁹. Y por último, remarcamos el “paro sorpresivo” de transporte en Rosario, en diciembre de 1979, que coordinó a cinco gremios al margen de las direcciones nacionales de los sindicatos⁵⁰.

Subyacente a todo esto existe un aumento significativo en la cantidad de conflictos: los cálculos basados en las medidas de fuerza reportadas en la prensa (necesariamente muy por debajo de la realidad) dejaban un saldo de más de 500.000 días/hombre de paros durante los primeros diez meses de 1979, o sea cinco veces más grande que en 1978⁵¹. A su vez, Arturo Fernández calcula que el número de conflictos duplicó los producidos en 1977 y cuadruplicó el número de trabajadores que participaron en los mismos⁵². Finalmente, y también muy importante, se va dando toda una cooperación entre los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios que, en varios casos, llegaron a apoyar medidas de fuerza que aportasen al deterioro del régimen⁵³.

Tanto la implícita alianza con otros sectores sociales, como el hecho de que el movimiento obrero retomase en 1979 formas de lucha (tomas de fábrica, huelgas por tiempo indeterminado, movilizaciones como las de Swift y San Miguel de Tucumán) que no habían tenido éxito en 1976 —y que no se habían aplicado en 1977 y 1978—, muestra claramente un desarrollo en la acumulación de fuerza propia.

Dentro de todo esto se ubica también la Jornada Nacional de Protesta del 27 de abril de 1979. La extensión real de la misma no se ha medido con justeza.

El comité de huelga clandestino, organizado por la Comisión de los 25, estimó que el 75 % de los trabajadores habían acatado la medida. En general, se admite que esa cifra está bastante inflada y que el porcentaje se acerca más al 40 %⁵⁴. De todas maneras, si bien la huelga no logró detener al país, sí logró alterar sustancialmente la normalidad en el cinturón industrial del Gran Buenos Aires y de las principales ciudades del interior⁵⁵. La importancia de la medida no fue tanto por el número de obreros que hayan o no acatado el paro sino más bien por el hecho de que éste fue llamado por un sector de la burocracia sindical, demostrando en concreto la presión que ésta sentía para tomar medidas más combativas respecto del régimen. Decían en el llamado a la Jornada de Protesta: “...Sentimos sobre nosotros la mirada inquietante de los trabajadores que podrían sentirse abandonados a su suerte, lo que determina nuestra decisión de colocarnos a la cabeza de la protesta que se generaliza, para unificarla con la decisión de una propuesta nacional”⁵⁶.

Salario y recesión

A partir de 1979 se nota una aceleración en el proceso de acumulación de fuerzas del movimiento obrero. Ya a fines de 1980 ocurren las tomas de varias fábricas más (Deutz, la Cantábrica, Sevel, Merex); paros coordinando a la comunidad con los trabajadores (Tafí Viejo, Ingenio Nuñorco); coor-

dinadoras clandestinas a nivel nacional (Trabajadores del Estado, Transportes); movilizaciones (Deutz, la Cantábrica). A esto se agrega el "paro sorpresivo", cuyas características son: corta duración, total sorpresa y niveles de organización muy altos que permiten conseguir desde la base una gran efectividad. Ante el paro sorpresivo, la fuerza represora se siente impotente, los conflictos no le dan tiempo para actuar. Cuando se enteran del hecho, ya no hay margen de acción porque éste se ha acabado. Además, los trabajadores se mantienen en sus lugares de trabajo lo que les permite obrar con rapidez y aprovechar al máximo el factor sorpresa.

Sobre la actividad huelguística de 1980, es útil considerar algunas estadísticas basadas en la información periodística⁵⁷. Durante los primeros seis meses del año se registraron 95 medidas de fuerza de magnitud, que suman un total de 115.623 obreros parados. A partir de febrero hubo una constante en el aumento de trabajadores parados.

Los conflictos producidos en Capital Federal y Gran Buenos Aires representan el 70 % del parque industrial del país. Al mismo tiempo, debemos apuntar que los conflictos en la primera zona trascienden con mayor facilidad a la prensa; y a su vez que el sindicalismo en el interior del país fue más duramente golpeado, tanto por la represión como por la situación económica, dificultando mucho sus posibilidades de accionar.

Del total de medidas de fuerza revisadas, 24 ocurrieron en empresas de servicios y 55 de industria. Si bien el número de conflictos en la industria fue superior al de servicios, esta relación tiene otro significado en cuanto al número de trabajadores. Los conflictos en la industria movilizaron a 34.815 obreros y las empresas de servicio a 52.996, es decir al 60 % del total. Estos conflictos se dieron con un gran empuje en sectores de servicios que tuvieron un carácter dinámico en el proyecto económico del régimen, como la banca, el puerto, marítimos.

Una revisión de las causas de las medidas de fuerza establece que 35 fueron por salarios, 31 por recesión (dentro de ellas, 19 por falta de pago, 7 por despidos, 1 por cierre y 4 por suspensiones), 6 por condiciones de trabajo, 1 por organización sindical, el resto por causas varias.

Esto indica la existencia de dos ejes precisos en los conflictos de una similar importancia: salario y recesión. Los conflictos por condiciones de trabajo tuvieron una importancia gravitante ya que, en muchos casos, se hicieron contra cambios globales en el régimen de trabajo que significaban una pérdida de importantes conquistas y agredían al conjunto de los trabajadores del gremio, tornándose por lo tanto en conflictos de un alto grado de politización. Por ejemplo, tenemos la lucha contra la nueva ley de navegación, la privatización de subterráneos, el desmantelamiento de los ferrocarriles. Por otro lado, la proporción de conflictos por aumento salarial en relación a las industrias y las

"La mayoría de los conflictos no trascienden a la prensa y al mismo tiempo son, en general, pequeños y de corta duración. Es por esto que todo cálculo en cuanto a número de conflictos debe necesariamente ser inexacto, aunque sirva como orientación general."

empresas se corresponde con el papel que juegan dentro del plan económico de Martínez de Hoz.

De los conflictos por recesión, hay que verificar dos procesos en el problema de los cierres y despidos; uno es la crisis de la industria, que hace a la reducción de la producción, y otro hace a un proceso de concentración monopólica que no significa siempre una pérdida de la importancia de la industria.

Los trabajadores de Deutz fueron los primeros, desde los paros de 1977, que levantaron en forma explícita y pública el pedido de renuncia del Ministro Martínez de Hoz, equiparándose a su vez la experiencia que estaba realizando contemporáneamente "Solidaridad" en Polonia y reclamando el apoyo del Vaticano. En el conflicto del BIR ocurrieron entrevistas públicas, una misa y presencia en la Casa Rosada; en el del Hospital Provincial de Rosario se realizó una marcha en los jardines del establecimiento; en SASETRU se dio una marcha de hambre en la calle; en el Banco de Tokio los empleados llevaron a cabo una guerra de insecticidas con fuerte olor.

No existió una forma de lucha única, sino que hubo respuestas diferenciadas ante cada problema. En los conflictos por aumentos de salarios, las medidas fueron en su mayoría paros con presencia en el lugar de trabajo, que duraban horas y eran progresivos. Esto demostraría una tendencia a mantener unidos a los compañeros y evitar la dispersión ya que, al no poder utilizar el sindicato como lugar físico de reunión, ésta se hizo en la empresa. Ello estaría determinado también por la necesidad de no prolongar en el tiempo los conflictos. Se buscó en los pedidos de aumentos reaseguros que impidieran que el nuevo salario fuera tragado por la inflación; por ejemplo, la indexación del salario, tendiendo en los montos inicialmente reclamados a igualarse con las mejores empresas de cada sector.

En los conflictos por recesión también hay respuestas diferenciales, siendo notable que en los casos de despidos y cierres el enfoque es opuesto al de la situación anterior. Aquí, el esfuerzo se dirige a sacar el conflicto a la calle, extenderlo a otras empresas y lograr el apoyo de otros sectores sociales. Hay conflictos por recesión que duraron meses, como en el caso de La Bernalesa, Borgward, Deutz, BIR, Productex.

Los conflictos por condiciones de trabajo se dieron en los sectores laborales de mayor nivel organizativo y conciencia, como ferroviarios, SMATA y textil del hilado sintético. EsL

de destacar, por su importancia, el paro nacional marítimo, por su unidad, magnitud y por su alto contenido político de enfrentamiento a una ley de la dictadura que permitía la contratación del personal extranjero en los buques argentinos; cosa que no sólo haría peligrar sus fuentes de trabajo, sino también su poder de negociación como entidad gremial y —por ende— el control sobre las condiciones de trabajo. En términos de respuesta, diez de los conflictos obtuvieron expresiones de solidaridad pública, tres de éstas fueron activas y una de ellas (caso del Ingenio Azucarero Ñuñorco) sumó a otros sectores sociales.

Existe información sobre la estructura de conducción en 56 casos de los 79 analizados. Los datos disponibles indican lo siguiente: 44 conflictos fueron conducidos por organización de empresa; 10 por comisiones internas; 1 por comisión de despidos; 1 por coordinadora de agrupaciones.

De los conflictos acerca de los cuales se tiene información sobre su conducción, 44 fueron dirigidos por organismos de empresa, lo cual demuestra dónde estuvo la conducción de los conflictos, apuntando al marginamiento de las direcciones jerárquicas sindicales y resaltando la importancia de la recomposición del activismo obrero después de los durísimos golpes sufridos entre 1975 y 1977. Un fenómeno nuevo en el surgimiento de los conflictos de más de una empresa, extensión que se dio en torno a cada actividad y no sobre el territorio, o sea que la coordinación fue por rama de industria o servicio. Este fue el caso de los conflictos en pesca, Bahía Blanca, transportes de Córdoba, marítimos y los bancos de Quilmes y Popular Argentino.

Hubo también un proceso de desarrollo y concentración organizativa estable, visualizado en el desarrollo de las CUTAs zonales y en la existencia de coordinación en portuarios, ferroviarios, gremios de transporte, estatales.

Se desprende claramente de todo lo expuesto anteriormente, que la actividad obrera se concentró principalmente en la zona del Gran Buenos Aires y en menor grado en Córdoba y Rosario. A través de 1980, se notó todo un desarrollo muy importante de actividad obrera en el interior del país. En este sentido, fueron reveladores los paros azucareros de Ñuñorco y ferroviario del Tafí Viejo en Tucumán, los paros ferroviarios y de transporte en Rosario, las huelgas automotrices en Córdoba, la agitación entre los metalúrgicos de Villa Constitución y las múltiples protestas y medidas de fuerza en otras zonas del país, como por ejemplo Mendoza.

En términos de sectores fueron los ferroviarios, metalúrgicos y automotrices los que estuvieron al frente de la resistencia. En concreto, han sido Renault y Peugeot, conjuntamente con los ferroviarios, los que marcaron el paso de las movilizaciones de 1977; y fueron éstos junto con los metalúrgicos, los que estuvieron al frente en 1979 y 1980, protagonizando los afiliados del SMATA y la UOM casi todas las tomas de fábrica.

“Ante el paro sorpresivo, la fuerza represora se siente impotente, los conflictos no le dan tiempo para actuar. Cuando se enteran del hecho, ya no hay margen de acción porque éste se ha acabado. Además, los trabajadores se mantienen en sus lugares de trabajo lo que les permite obrar con rapidez y aprovechar al máximo el factor sorpresa.”

Destacamos el peso del sector servicios en la movilización de los trabajadores, particularmente después de 1978. Un sector que también se mostró muy combativo es el de textiles; pero este sector fue muy golpeado por la oleada de quiebras y el gran desempleo en la industria, que se erigieron como serios obstáculos a su organización y movilización.

En 1981, la creciente agitación evidenciada en el campo laboral causó que la situación del mismo se tornara en una de las principales preocupaciones del régimen militar, inclusive por encima del problema económico. Durante los meses de junio y julio se sucedieron oleadas de medidas de fuerza y conflictos. Hubo huelgas en Mercedes-Benz y en Perkins Argentina; los metalúrgicos se declararon en estado de alerta; el 4 de agosto los trabajadores ocuparon la metalúrgica Bellusi y el mes anterior había ocurrido lo mismo en Industrias Metalúrgicas de Rosario. Luz y Fuerza realizó una manifestación de cientos de sus afiliados en pos de aumentos salariales⁵⁸. Pero lo que más resaltó como indicador de la situación del sector obrero fueron los dos paros nacionales del SMATA y el paro general decretado por la CGT el 22 de julio.

Los paros del SMATA fueron realizados como parte de un plan de movilización del gremio en defensa de sus fuentes de trabajo. El desarrollo de los mismos planteó un desafío al régimen. Los paros del gremio mecánico fueron acatados casi totalmente en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, mientras que las seccionales del interior, lideradas por Elpidio Torres, de Córdoba, no adhirieron. En el primero de éstos, realizado el 17 de junio, el régimen respondió encarcelando a varios dirigentes y a numerosos trabajadores que intentaban realizar una manifestación en la central del gremio en Buenos Aires⁵⁹.

Por otro lado, el paro nacional convocado por la CGT suscitó mayores inquietudes. Sus objetivos fueron “recuperación del aparato productivo y de los niveles de salarios” y “plena vigencia del estado de derecho”. Los organizadores invitaron a participar a otros sectores sociales y recibieron la adhesión de todas las regionales de la CGT, de las seccionales del SMATA, la coordinadora de Taxis, y de cuatro agrupaciones gremiales que se desenvuelven en la Unión Ferroviaria, entre otros. La CGT declaró que el paro “no está



GENTILEZA HORACIO VILLALOBOS

El regreso a la Plaza. En marzo del 82, los reclamos vuelven abiertamente a su espacio público habitual.

dirigido contra nadie en particular⁶⁰; pero esa declaración conciliadora, dirigida a los sectores gremiales más colaboracionistas y al régimen en particular, no engañó a nadie. En la práctica el paro enjuiciaba todo lo actuado por los militares durante los cinco años anteriores.

El paro general del 22 de julio de 1981 tuvo características similares al de 1979, aunque las cifras de acatamiento fueron mayores. En el Gran Buenos Aires paró la vasta mayoría de los establecimientos industriales, con las notables excepciones de la metalúrgica Gurmendi y de Ford General Pacheco, y además no se logró paralizar el Ferrocarril Mitre y la respuesta fue sólo parcial en las líneas Roca y Sarmiento. La Plata tuvo 50 % de ausentismo; en Córdoba y Rosario adherieron los gráficos; en Tucumán y Mendoza, los ferroviarios; en Bahía Blanca, el 60 % de los empleados de comercio; en Entre Ríos, el SMATA, camioneros y panaderos; en San Juan, vitivinícolas, bancarios y trabajadores de la carne; en Mar del Plata, los mecánicos; y en Capital Federal, los estibadores y muchos otros. La Policía Federal informó que un millón y medio de trabajadores habían acatado el llamado de la CGT. También importante fue el hecho de que muchos pequeños y medianos empresarios y comerciantes cerraron sus puertas en apoyo al paro.⁶²

Los militares, aunque manifestaron repetidas veces que no estaban preocupados por el paro, demostraron en la práctica lo contrario. Surgieron las acostumbradas amenazas de aplicar los distintos decretos antilaborales instituidos desde el golpe militar. A nivel abiertamente represivo, las fuerzas

de seguridad se movieron a través de distintas ciudades "peinando" bares y lugares públicos, deteniendo "para averiguación de antecedentes" a todos los sindicalistas que encontraban, liberándolos horas más tarde. Los dirigentes que integraban el secretariado nacional de la CGT fueron arrestados el día del paro.

Se evidenciaba que la situación del obrero seguía empeorando notablemente. Entre enero y julio de 1981, Clarín informó que se habían registrado 1.296 juicios por quebranto, o sea un aumento del 129 % en valor real sobre 383 juicios registrados en 1980. Asimismo, informaba que la industria metalúrgica básica exhibía una capacidad ociosa del 64 %; papel y cartón del 59,9 %; cemento del 44,6 %; productos químicos industriales del 26,2 %; destilerías petroleras del 26,4 %; y fábricas automotores del 37,8 %. La situación era tan seria que el Obispado de Quilmes organizó una concentración pública que denominó "Marcha de hambre". Los organizadores exhortaron a pedir "pan y trabajo" y solicitaban a los manifestantes a que llevaran "ropa y alimentos para los necesitados".⁶³

La Argentina desconocida se volvió a manifestar abiertamente el 7 de noviembre en la marcha por "Paz, Pan y Trabajo" a San Cayetano, marcando, además, que la resistencia obrera ya obligaba a otros sectores a pasar a la oposición en forma más activa. La marcha fue organizada por la CGT y contó con el apoyo activo de la Iglesia católica y de algunos partidos políticos. Ésta convocó a más de 50.000 personas y fue correctamente descrita por un cronista como "marcha L"

de la bronca".⁶⁴

Los manifestantes marcharon desde el estadio de fútbol de Vélez Sarsfield hasta la Iglesia de San Cayetano, patrono del trabajo, coreando consignas contra el régimen y reclamando por los desaparecidos. Se vieron expresiones de furia popular al finalizar la demostración, cuando algunos de los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas represivas, arrojando salivazos y monedas a los agentes de policía, o entonando cánticos de neto corte político y hasta partidario. Esta actitud es notable dado el vasto operativo represivo que desplegó el régimen, que incluyó a miles de efectivos y hasta el uso de helicópteros.⁶⁵

En otros puntos del país hubo manifestaciones similares. En la ciudad de La Plata, en Berisso y Ensenada se organizó una concentración para marchar a la Iglesia de San Cayetano que fue impedida por el despliegue de policías uniformados y de civil. También en Rosario, los trabajadores acudieron al llamado en medio de un severo dispositivo de seguridad.

Es importante consignar la importancia de esta manifestación, porque su desarrollo tomó por sorpresa a los organizadores y al régimen por igual. Tanto las consignas reclamando por los desaparecidos como las de "asesinos, asesinos" o "el pueblo unido jamás será vencido" iban bastante más allá de lo planificado. Esto se evidenció cuando recién después de la Marcha, y cediendo ante la evidente presión popular, los cinco partidos políticos nucleados en la Multipartidaria (PJ, UCR, PI, PDC, Confederación Socialista) asumieron el tema de los desaparecidos. Y días más tarde, el vicepresidente primero del Justicialismo, Deolindo Bittel, expresó su preocupación por "la indiferencia de los argentinos" ante los políticos "que ya no creen en Dios, ni en la patria ni en sí mismos". Las cosas se les estaban escapando de las manos.⁶⁶

Esto último se vio reflejado en varios incidentes a principios de 1982. El primero ocurrió cuando el titular de la CNT, Jorge Triacca, se apersonó en la seccional del gremio plástico de la zona norte del Gran Buenos Aires, y allí fue expulsado a puñetazos por los obreros entre gritos de "traidor" y "colaboracionista".

La prensa informó, también, que se había formado un movimiento de base en la Unión Ferroviaria, integrado por varias seccionales de ese gremio en Buenos Aires, en rechazo a la dirección del gremio. A su vez, en una misa celebrada por la CGT en La Matanza para orar por los desocupados, en defensa de las fuentes de trabajo y por la libertad de los presos políticos y gremiales sin proceso, se dio una confrontación entre los dirigentes y un amplio sector de la base concurrente. Este ocurrió cuando grupos de participantes empezaron a corear consignas de corte combativo. Los dirigentes calificaron de "infiltrados comunistas" a los que coreaban los estribillos. La reunión terminó en una gresca en la cual la policía intervino para proteger a los dirigentes gremiales.⁶⁷

El avance en todo este proceso hizo síntesis durante el mes de marzo de 1982, cuando miles de personas expresaron su descontento frente a la desesperante situación económica. Más de dos mil personas se movilizaron el día 5 frente a la Casa de Gobierno para reclamar por los desaparecidos. Los estatales se movilizaron el 9 en Buenos Aires en contra de las privatizaciones. El 17 durante un homenaje a Carlos Andrés Pérez, ex presidente de Venezuela, el público comenzó a corear: "¡La sangre derramada no será negociada!", en oposición a la propuesta de establecer un acuerdo entre civiles y militares. El 18, los trabajadores portuarios de Buenos Aires reclamaron ante el Comando en Jefe de la Armada por sus fuentes de trabajo y mejoras salariales; mientras jubilados y pensionados demandaban aumento de haberes en Plaza de Mayo. En la iglesia de San Francisco, a una cuadra de la Plaza de Mayo, más de mil trabajadores estatales arrojaron volantes de repudio al gobierno al concluir una misa en que se rogó por los salarios.⁶⁸

El 19 de marzo, la CGT lanzó el llamado a todos los sectores del país para que converjan en la Plaza de Mayo el día 30. La movilización fue llamada con el fin de "decir basta a este proceso que ha logrado hambrear al pueblo sumiendo a miles de trabajadores en la indignancia y la desesperación".⁶⁹

La tarde del 30 de marzo, la Plaza de Mayo estaba virtualmente cercada por una concentración de patrulleros, carros de asalto, camiones hidrantes, helicópteros y policías a caballo. Los manifestantes no pudieron acceder a la misma, pero fueron sumando a numerosos espectadores indignados por la brutalidad del accionar policial. Los manifestantes dieron vuelta al área de la plaza por varias horas desafiando a las fuerzas represivas. A las 16, la policía interceptó en el puente Pueyrredón a una gruesa columna de obreros que pretendía cruzar el Riachuelo. También fue reprimida una manifestación en Tribunales y otra de estibadores en el puerto. Frente a la CGT se formó una columna que se pudo en marcha hacia la Plaza.⁷⁰ Al caer la noche, todo el centro de la ciudad de Buenos Aires era un pandemonio. La policía castigaba a los manifestantes con salvajismo, con disparos hacia los balcones desde los cuales la gente gritaba contra la represión. El pueblo hacía frente a las fuerzas de seguridad y desde los edificios y las esquinas llovían todo tipo de proyectiles. Hubo entre mil y tres mil detenidos, dependiendo de la fuente utilizada.

En casi todas las ciudades del interior se hicieron actos paralelos. En Mendoza, una manifestación similar a la de Buenos Aires fue duramente reprimida, quedando entre los muertos el dirigente de los trabajadores del cemento José Ortiz con una bala en el pecho. En Rosario, dos mil personas recorrieron las calles del centro, a pesar de la fuerte presencia policial. En Tucumán hubo más de 200 detenidos. En Córdoba, la ciudad fue ocupada por el III Cuerpo de Ejército que patrullaba las calles con columnas de hasta siete vehí-

culos militares. En Mar del Plata, los enfrentamientos con la represión resultaron en numerosos heridos¹. Al día siguiente, haciendo un balance de la jornada, la CGT afirmaba que el proceso militar “está en desintegración y en desbande y reclama un gobierno de transición cívico-militar hacia la democracia”. Dijo: “Ayer ha terminado el miedo, el pueblo dijo *basta* a una dictadura que ha sumido al país en la más tremenda crisis de todos los tiempos”.

El plan de lucha desarrollado por la CGT, que culminó en la movilización del 30 de marzo de 1982 frente a la Casa de Gobierno en la Capital Federal, marcó claramente que el movimiento obrero había herido al “Proceso”. La importancia de esta movilización es que dejó claros varios aspectos. Primero, que el terror y la represión no alcanzaron para detener la lucha popular. Segundo, y se desprende de lo anterior, que los trabajadores habían acumulado suficiente fuerza, tanto objetiva como subjetivamente, para retomar la calle una vez más y disputársela a las fuerzas represivas. Tercero, la movilización ejemplificó cómo el movimiento obrero se constituyó en el motor de la resistencia antidictatorial impulsando a otros sectores sociales, tanto a la lucha callejera como a medidas de fuerza conjuntas.

Unos días más tarde comienza la tristemente célebre Guerra de las Malvinas. Es indudable que la Guerra aceleró la tendencia hacia la apertura. Pero también es indudable que el proceso de resistencia obrera desarrollado a partir de marzo de 1976 —y que culminó con la movilización de marzo de 1982— representa la base material de la conquista de la democracia y la derrota de la dictadura. La resistencia obrera fue una de las causas del deterioro de la dictadura, puesto que impidió la libertad que requería Martínez de Hoz, tanto para la aplicación de su plan económico como para poder corregir los “errores” del mismo. A su vez, la “intranquilidad” laboral sirvió de elemento agudizador para las discrepancias tácticas internas en el Proceso.

En este sentido, la Guerra de las Malvinas fue el último intento por lograr un consenso para su modelo de país. Su fracaso en la guerra fue el más visible de todos, puesto que evidenció las carencias de los militares en su función específica. “Los actores de su limitado consenso quedaron al aire y la crisis de hegemonía de los sectores dominantes se agudizó. Es así que se completó el cuadro de quiebra de las representaciones”. ■

Pablo A. Pozzi es Profesor de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

1 J. Villarreal: “Los hilos sociales del poder”, in: *Crisis de la dictadura argentina*, E. Jozamiet al., Buenos Aires 1985, p. 214

2 Véase O. James: “Racionalización y respuesta de la clase obrera: contexto y limitaciones de la actividad gremial en la Argentina”, *Desarrollo Económico*, n° 83, octubre-diciembre 1981, pp. 320-349.

3. *Ibidem* p. 332.

“El avance en todo este proceso hizo síntesis durante el mes de marzo de 1982, cuando miles de personas expresaron su descontento frente a la desesperante situación económica. Más de dos mil personas se movilizaron frente a la Casa de gobierno para reclamar por los desaparecidos”.

4. *Ibidem*, p. 331. Citando al secretario general de la CGT, Eduardo Vuletich, en 1995.

5. *Ibidem*, p. 333.

6. *Denuncia*, agosto, octubre y noviembre 1976.

7. A. Abós: *Las organizaciones sindicales y el poder militar 1976-1986*, Buenos Aires 1984, p. 23.

8. Agencia de Noticias Clandestinas (ANCLA), 23 X 1976. Citado en H. Verbitsky: *Rodolfo Walsh y la prensa clandestina*, Buenos Aires 1985, p. 69.

9. Para el conflicto de Luz y Fuerza seguimos principalmente el informe que se encuentra en S.R.A. de la Federación Gráfica Bonaerense, “Situación sindical en la República Argentina”, Mimeo, 24 III 1978.

10 A. Abós: op. Cit., p. 24.

11 Situación...

12 *Denuncia*, noviembre 1976.

13 A. Sirkis: op. Cit., p. 196

14 Situación...

15 *La Opinión*, 3 XI 1976.

16 A. Sirkis: op. cit., p. 197

17 *ibidem*, p. 198.

18 *Clarín* y *La Opinión* del 29 X 1976.

19 *La Opinión*, 3 XI 1976.

20 Situación...

21 A. Abós: op. cit., p. 24.

22 *La opinión*, 27 I 1977.

23 A. Abós: op. cit., p. 25.

24 *Ibidem*, p. 26

25 S. Senén González: *Diez años de sindicalismo argentino*, Buenos Aires 1984, p. 72.

26 Cables de UPI y AP del 14 II 1977. *El Día*(México) 15 y 17 II 1977; *La Opinión* 13 II 1977; *Excelsior* (México), 12 III 1977.

27 *Denuncia*, agosto, octubre y noviembre de 1976, marzo y abril de 1977; Situación..., p. 35; A. Sirkis, op. cit., pp. 178-179; Boletín Internacional de solidaridad Argentina contra Represión y la Tortura (Archivo de Editorial *Denuncia*, julio de 1976

28 A. Sirkis: *A guerra da Argentina*, Río de Janeiro 1982, pp. 178-179.

29 *Denuncia*, agosto, octubre y noviembre 1976.

30 A. Sirkis: op. cit., p. 204.

31 *Denuncia*, abril 1977.

32 *Denuncia* septiembre de 1977

33 D. Marcelo: “Desafío obrero a la dictadura militar”, *Perspectiva Mundial* (Nueva York), 21 XI 1977.

34 *Clarín* 27, 28, 29, 30 X 1977.

35 *Denuncia*, diciembre 1977; *Clarín*, 17 X al 3 XI 1977; *La Prensa*, 27 X al 23 XI 1977; *La opinión*, 31 X al 9 XI 1977; *La Nación*, 11 XI 1977; *Excelsior*



EDUARDO COMESANA

Instantánea. La Plaza de Mayo, en 1982, fue la crónica de un fin anunciado.

(México), 16 X al 15 XI 1977; Associated Presse y Agence France Presse, cables noviembre de 1977; Liga por los Derechos del Hombre (Argentina), Carta, noviembre 1977.

35 A. Fernández: *Las prácticas sociales del sindicalismo (1976-1982)*, Buenos Aires, pp. 91-92.

36 Loc. cit.

37 Denuncia, 1977.

38 Véase supra 34.

39 A. Abós: op. cit., p. 36.

40 Ibidem, p. 36; véase supra 34; J. Perrone: *La patria reciente*, Buenos Aires 1983, p. 129.

41 Mercado, octubre 1978. Evidentemente en este caso el término conflicto debe significar cualquier tipo de diferencias entre la patronal y los trabajadores abarcando desde huelgas hasta la mera información de malestar fabril.

42 L. Bieber: "El movimiento obrero argentino a partir de 1976. Observaciones al trabajo de Francisco Delich", in: *El poder militar en la Argentina, 1976 - 1981*, comp. P. Waldmann, E. Garzón Valdés, Buenos Aires 1983, p. 117.

43 Denuncia, abril 1979.

44 Bloque Sindical del MPM. "Crónica de la resistencia sindical argentina", Mimeo, s/p; 1979.

45 Clarín 16, 17, y 18 IX 1979.

46 Clarín, 9 y 10 XI 1979.

47 Crónica, enero 1980.

48 Cálculo basado en Clarín y otras publicaciones entre enero y octubre de 1979. Véase también G. Chávez: *Las luchas sindicales con el proceso*, Buenos Aires 1983.

49 A. Fernández: op. cit., p. 93.

50 P. Pozzi: "Apuntes sobre la situación del movimiento obrero argentino", Denuncia, agosto 1981; *Latinamerica Political Report*, 4 V 1979, p. 132.

51 Loc. cit.

52 A. Abós: op. cit., p. 55.

53 Ibidem, P. 49.

54 Publicaciones varias y G. Chávez: "Movimiento obrero: los conflictos sindicales en 1980". Mimeo s/p.

55 Denuncia, agosto-septiembre de 1981; "Clarín", 3 VI al 5 VIII 1981.

56 Clarín, 18 VI 1981.

57 Clarín, 15 al 21 VI 1981.

58 Clarín, Uno más uno (México), 23 VIII 1981.

59 A. Dabat, L. Lorenzano: *Argentina: The Malvinas and the End of Military Rule*, London 1984, p. 74.

60 Denuncia, octubre de 1981.

61 Clarín, 8 XI 1981.

62 Denuncia, diciembre de 1981 y entrevista reproducida en el apéndice III.

63 Denuncia, diciembre de 1981.

64 Denuncia, marzo de 1982.

65 Clarín 6 al 20 III 1982.

66 Clarín, 27, 28, 29 y 30 III y 1, 2 y 3 IV 1982; véase también A. Abós: op. cit., p. 85.

67 Idem: loc. cit.

68 Clarín, 1 IV 1982.

69 A. Abós: op. cit., p. 87.

70 Denuncia, abril-mayo de 1982.

71 J. Villarreal: op. cit., p. 211.

Las denuncias presentadas por la CTA frente al juez Baltazar Garzón

La empresa de la complicidad

La Central de Trabajadores de la Argentina denunció ante el juez español a una serie de empresas que apoyaron activamente la dictadura y su accionar represivo. También el plan sistemático para desactivar el poder de la clase obrera: no es casual que el 68 por ciento de los 30.000 desaparecidos fueran trabajadores, aseguran.

En marzo de 1998, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) realizó una presentación ante el Juez Baltazar Garzón. Firmado por Víctor de Gennaro, Marta Maffei, Víctor Mendibil, Alberto Piccinini, Juan Carlos Camaño, Alberto Morlachetti, el escrito denuncia ante Juzgado Central de Instrucción Nº 5, audiencia Nacional de Madrid, la existencia de “un plan concertado por los grandes grupos económicos y las fuerzas armadas para implementar el terrorismo de estado y el genocidio, con el objetivo de disciplinar socialmente a la clase trabajadora para obtener una más alta tasa de ganancia y concentración económica. Estos hechos configuran la violación sistemática y continuada de los derechos humanos, calificados en el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad, habiendo sido víctimas de terrorismo de estado y genocidio centenares de ciudadanos españoles y de ascendencia española, así como miles de argentinos y de otras nacionalidades, en lo que constituye uno de los hechos más atroces padecidos por la humanidad a lo largo de su historia”.

Además de la violación sistemática de derechos humanos (derecho a la vida, integridad personal, libertad, garantías judiciales, propiedad), la CTA centró su denuncia en las violaciones a la clase trabajadora y aportó pruebas concretas que la señalaban como un claro objetivo de la represión. Asimismo, denunció la existencia de una “imbricación entre el poder económico y el militar y su continuidad durante la transición democrática, destacada en importantes estudios económicos y políticos basados en pruebas materiales” que también se adjuntaron.

El escrito presentado al Juez Garzón señalaba que el correlato en el plano jurídico de las normas represivas fueron las “leyes” de “prescindibilidad” (21.260 y 21.274). Mediante ellas, se expulsaba a los trabajadores del Estado acusados de ser elementos subversivos, factores reales o potenciales de perturbación, o de tener antecedentes desfavorables de los organismos de seguridad, así como la clausura de sindicatos y de la propia CGT, y organizaciones obreras en general.

Por otra parte, en base a las pruebas aportadas, se apuntó a esclarecer la intervención de los grupos privados que se beneficiaron con el proceso de concentración económica, ganancias industriales y financieras, que demostró una verdadera connivencia de intereses con el gobierno militar y que, con el objetivo de aumentar su tasa de beneficio, instigaron, financiaron, colaboraron, delataron y apoyaron por diversas formas el genocidio y el terror como método de gobierno.

El escrito sostiene que el principal objetivo del terror fue el de “tratar de desarticular a la clase trabajadora, rompiendo todas sus formas de organización sindical y solidaria, secuestrando y matando a los mejores hijos de esa clase, haciendo imperar el terror en sus familias, secuestrando a los hijos de los trabajadores para entregarlos, luego de su robo y borrando su identidad. Esos hechos eran dirigidos –en muchos casos– desde las mismas empresas en cuyo seno actuaban, financiados por los empresarios, los ‘grupos de tareas’ que luego secuestraban y mataban; torturaban dentro de las fábricas, en lugares especialmente preparados para ello; confeccionaban las listas de los trabajadores lucha- ➔

dores, para que se los secuestrase; ponían a disposición de los asesinos hasta vehículos de las empresas en los cuales se secuestraban a los trabajadores.”

El caso Ford

Es interesante detenerse en las pruebas que señalan la existencia de este plan concertado entre los grandes grupos económicos y el terrorismo de estado. “Existen casos pilotos, que con el escrito se acompañan, que demuestran la existencia de campos de concentración dentro de las propias empresas, desde los cuales se secuestraba, torturaba y asesinaba a quienes se oponían a ese objetivo económico. Es el caso del Ingenio Ledesma, del Hospital Posadas, de la Fábrica Ford, de los Astilleros de Zona Norte y Sur del Gran Buenos Aires, del cordón industrial de La Plata y todo el Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, Villa Constitución y Córdoba”, señalaba el escrito.

Como ejemplo se incluía el caso de Juan Carlos Conti, un obrero de la fábrica Ford, de General Pacheco, delegado de personal del sindicato de mecánicos SMATA, que fue secuestrado en el interior de la fábrica y llevado a un centro de detención instalado también dentro de la planta y, finalmente, fue retirado de allí por personal del Ejército. Todo sucedió con conocimiento y evidente complicidad de la empresa. “El operativo fue realizado por un grupo de tareas perteneciente al Ejército Argentino que, desde tiempo atrás, estaba instalado en el interior de la planta, disponía de instalaciones de la empresa y era por todos conocido”, se cita en el expediente judicial “Conti, Juan Carlos c/Ford Motor Argentina S.A., Expediente 26.091. Cámara del Trabajo Sala VI, Capital”.

Conti trabajaba en Ford desde 1965. El 14 de abril de 1976 (20 días después del Golpe), lo detienen mientras estaba tra-



EDUARDO COMESAÑA

La CTA denuncia el matrimonio entre empresas y dictadura.

“Existen casos pilotos, que con el escrito se acompañan, que demuestran la existencia de campos de concentración dentro de las propias empresas, desde los cuales se secuestraba, torturaba y asesinaba a quienes se oponían a ese objetivo económico.”

bajando. “Fue llevado a un quincho, perteneciente al predio de Ford. Fue retirado del establecimiento, a plena luz del día, y se lo traslada en una camioneta perteneciente a la empresa. Le atan las manos con alambres, con pleno conocimiento de los supervisores. Después de ser secuestrado, la empresa intima a Conti, mediante telegrama, a ir a trabajar, acusándolo de “abandono de tareas”. Su esposa contesta explicando lo ocurrido, algo que era evidentemente conocido por la empresa, que igualmente lo despide.

La Comisión Nacional de Desaparición de Personas, recibió la denuncia del caso del obrero Adolfo Omar Sánchez, quien testifica: “El día 25 de marzo de 1976 los delegados gremiales fueron convocados a una reunión donde por la parte patronal estaban presentes Galarraga, gerente de relaciones laborales; Marco, gerente de planta estampado y Luis Pérez, representante laboral. En esa reunión, Galarraga les comunicó que la empresa ya no les reconocía representatividad como delegados obreros. Al terminar la reunión, el mismo gerente les manifestó burlonamente: ‘Ustedes le van a mandar saludos a un amigo mío, Camps’, refiriéndose evidentemente al genocida reconocido como responsable de los campos de concentración de la provincia de Buenos Aires”.

Tres días más tarde, Sánchez es secuestrado y llevado a un centro de detención, donde se encontraban otros delegados y obreros de fábricas de la zona como Terrabusi, Astarsa y el Astillero Sánchez.

La presentación de la CTA ante Garzón prueba que, a partir del 25 de marzo de 1976, comienzan a producirse detenciones de obreros dentro de la planta de Ford. Los testigos señalan que el gerente de planta les dijo que “estaban dispuestos a llevarse a quien fuera”. Según la prueba colectada, en la misma planta se produjeron entre dos o tres secuestros por día y allí mismo funcionaba un centro de detención e interrogatorios.

El caso Ingenio Ledesma

Ubicado en la provincia argentina de Jujuy, el Ingenio Ledesma también tiene en su haber varios sucesos de este tipo. Numerosos trabajadores, entre los que se contaban el propio médico del sindicato, Luis Aredes, fueron llevados en camionetas de la empresa, desde el interior del barrio de trabajadores de la empresa. La metodología de secuestros fue implementada en forma masiva en lo que dio en llamarse “La noche del apagón”. Sucedió en horas de la madrugada

del día 24 de junio de 1976, cuando se cortó adrede la energía eléctrica de todo el barrio y personal uniformado del Ejército argentino, de Gendarmería Nacional, junto a la policía privada de la empresa —en vehículos con identificación del Ingenio— procedieron a secuestrar ante la vista de sus familias a centenares de trabajadores. Treinta de ellos, todos con reconocida actividad gremial en el establecimiento, nunca más volvieron. Otros tantos pasaron largos años de cárcel sin acusación ni juicio alguno.

Luego de estos hechos, la empresa quedó sin representación gremial alguna, ni discusión salarial o de otro tipo, hasta el restablecimiento del gobierno constitucional.

El caso del Hospital Posadas

En la madrugada del 28 de marzo de 1976, en el Hospital Posadas se realiza un enorme operativo militar a cargo del Ejército, dirigido por el general Reinaldo Bignone; se ocupa el establecimiento con un gran despliegue de hombres fuertemente armados, vehículos militares y helicópteros. Con la colaboración de la jefatura de Personal, los militares a cargo de la operación comienzan a identificar a los trabajadores y durante varios días, los mismos son detenidos dentro del establecimiento. Mientras esto sucedía, se impedía al personal asomarse a las ventanas, incluso efectuando disparos.

La ocupación militar del hospital se mantuvo durante meses y la política de llevarse detenidos todos los días continuó. Entre noviembre de 1976 y primera mitad de 1977, se produce una escalada ininterrumpida de secuestros de trabajadores del hospital. Los secuestros se producían en los domicilios o en el hospital mismo, frecuentemente en días viernes. Los secuestrados fueron mantenidos en centros clandestinos de detención en el ámbito del mismo lugar del trabajo —que incluyen una construcción cercana a la casa del director del hospital—, donde los trabajadores eran torturados y sometidos a interrogatorios.

Con esta metodología fueron secuestrados 52 empleados, enfermeros, médicos, jefes y directores de los servicios del hospital.

Caso Astilleros Astarsa y Mestrina

El 25 de marzo de 1976, fuerzas del Ejército Argentino ocupan los astilleros Astarsa y Mestrina en el Gran Buenos Aires, con tanques de guerra, carros de asalto y helicópteros. El operativo estaba a cargo de los mayores Molinari y Ricardí, perteneciente a la Escuela de Ingeniería de Campo de Mayo.

Los directivos de la empresa asisten al operativo individualizando a los trabajadores y un gran número de ellos son llevados a la comisaría del partido de Tigre, donde son torturados. Algunos de ellos son liberados, pero nueve aún figuran como desaparecidos. Otros siete trabajadores del astillero fueron secuestrados con posterioridad.

Casos Acindar - Villa Constitución

En la empresa Acindar, en la provincia de Santa Fe, con anterioridad al golpe de 1976, la Policía Federal instaló un cuartel dentro de la fábrica, en el que había 60 efectivos a cargo del oficial principal Mujica. Simultáneamente, grupos parapoliciales recorrían todas las noches en un automóvil Peugeot 504 los barrios obreros, secuestrando trabajadores. El automóvil era guardado dentro del cuartel de Acindar. Otro automóvil utilizado para secuestrar trabajadores, un Ford Falcon sin patente, pertenecía a la empresa Acindar.

Se constató también que el cuartel instalado dentro de Acindar era utilizado como centro de detención y ámbito para interrogatorios.

También se comprobó que en una finca, propiedad de Armando Ferrari, ubicada en ruta 177 y el empalme Villa Constitución, se reunían todas las noches directivos de Acindar con los policías que actuaban en el cuartel de la empresa. El principal responsable de realizar las listas de los trabajadores que debían ser secuestrados es un policía llamado Raúl Antonio Ranure.

La mayoría de los quince asesinatos que se produjeron antes del golpe de 1976, fueron reivindicados por la Triple A. En ese período fueron despedidos 500 trabajadores, a los cuales se los intimó a abandonar la ciudad.

En 1976, luego del golpe de Estado, Acindar y otras empresas menores de la zona, despidieron 500 trabajadores más y unos 200 fueron encarcelados. Al finalizar la dictadura, 30 fueron asesinados o desaparecidos, y más de 1.000 perdieron sus puestos de trabajo.

De acuerdo a las cifras oficiales, en el cordón industrial del Gran Rosario y Villa Constitución, 1800 trabajadores fueron detenidos y desaparecidos, y aproximadamente 2.000 trabajadores fueron detenidos sin ser sometidos a juicio o proceso legal alguno.

La Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, señaló la existencia de un accionar coordinado entre las empresas y las Fuerzas Armadas para proceder a secuestrar y detener obreros, en particular, delegados de personal y representantes de los trabajadores. Entre la innumerable cantidad de casos citados es de destacar por su gravedad, los de los sindicatos de Mecánicos (SMATA) y Luz y Fuerza.

Es de destacar que las pruebas señalan que este proceso de terrorismo de estado y en complicidad con los grupos económicos se inició con anterioridad al Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con el accionar de la triple A. Desde entonces, gozaban de total impunidad y ensayaban lo que luego sería el terror en gran escala y el genocidio sistematizado sobre la clase trabajadora.

En ambos casos, tanto antes como después del golpe militar, diversas empresas habían montado diversos centros de detención y tortura en su interior. ■

La educación en la última dictadura

Cuando la dictadura entró en la escuela

por Adriana Puiggrós

ilustraciones Claudia Contreras

La dictadura militar vio a la escuela como un sitio donde se transmitían las ideologías que subvertían el orden. Como resultado, se estableció una política represiva para acabar con el sistema educativo concebido hasta ese momento.

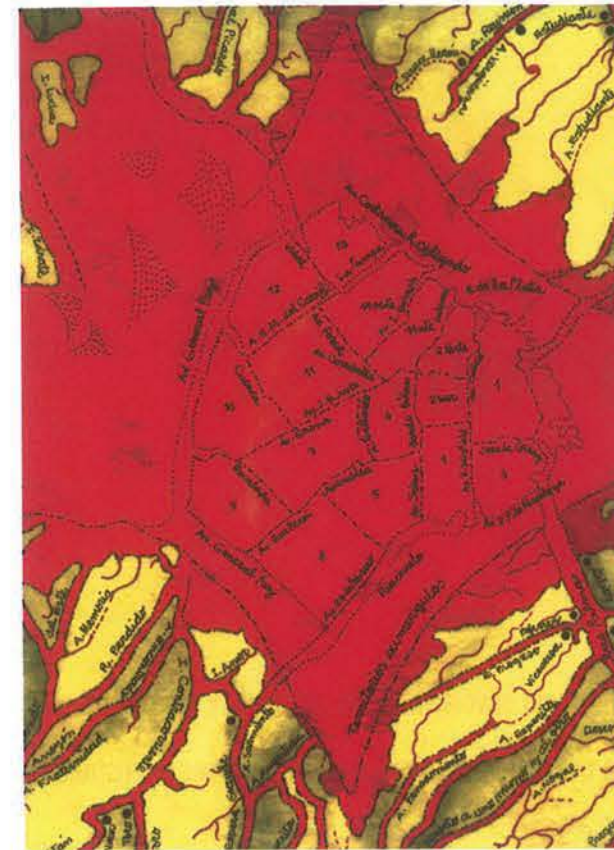
Como se analiza habitualmente, el proceso autoritario que vivió la Argentina durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, fue el más cruento de la historia argentina. Esa dictadura fue un punto de inflexión en muchas dimensiones de lo social: el terrorismo de estado adquirió su máxima expresión, luego de diversas experiencias en las que se había instalado el uso ilegítimo de la fuerza estatal; se habilitó la expresión extrema de la violencia política y la clausura de una enorme cantidad de movimientos, fenómenos y expresiones sociales de diversa índole. Esta caracterización como punto de inflexión es también muy clara en el ámbito educacional. En ese sentido, se observó la instauración del dispositivo autoritario a través de las instituciones educativas durante la intervención dictatorial.

De esta forma, es posible analizar la dictadura como un proceso de dislocación que permite, a través de su análisis, entender los procesos sociales previos a la intervención autoritaria; así como también algunas de las características del proceso post-dictatorial o de transición democrática. La dictadura de 1976 significó educacionalmente el desmantelamiento de la principal ideología pedagógica que, con revisiones y reformas en diversos momentos, cumplía casi un siglo de vida. El sistema educacional argentino había alcanzado su máxima expansión al promediar el siglo XX y comenzó a presentar crisis hacia los años 60-70. Luego de este período de crisis el "Proceso de Reorganización Nacional" (PRN) modificó

los principales ejes estructurantes del sistema educativo y transformó profundamente los sentidos de educar. Estos ejes pueden ser identificados como:

—El desarme del andamiaje del Estado Docente. El proceso de construcción del Estado-Nación en Argentina tomó como uno de sus pilares fundamentales el establecimiento de un sistema de instrucción pública. Durante el PRN, se modificaron profundamente los sentidos de aquella concepción fundante: la educación dejó de ser una razón de Estado para pasar a ser una razón individual. Esta modificación conceptual redundó en infinidad de actos normativos generales y específicos, así como disposiciones institucionales de diverso contenido y orden. En esta situación comenzó a afianzarse una tendencia de privatización de los procesos educacionales, en sentido amplio. Es decir, no en términos de privatización de instituciones (que sería más bien una consecuencia), sino de entregar al ámbito privado la responsabilidad sobre lo que antes era un problema colectivo. Este proceso tuvo, por supuesto, un correlato con fenómenos globales de modificación de modelos estatales en la región y en el mundo.

—En las naciones jóvenes como la Argentina, y con procesos identitarios tan complejos, el acceso a los sistemas de educación sistematizada, había sido un elemento muy importante del imaginario social. La expansión educacional y la posibilidad de movilidad social de las clases desfavorecidas a



Acuarelas del río. Dibujos de Claudia Contreras, 1997-2001.



través de la escolarización, fue un componente importante del "pacto democrático" en Latinoamérica. Así, algunos estudios han concluido en que el patrón de distribución educacional en la región fue más democrático que el patrón de distribución de la riqueza. Dicho pacto, si bien venía presentando dificultades, alcanzó su momento de desarme durante el PRN, lo que estuvo emparentado con la crisis de los sistemas de producción, el fin del paradigma desarrollista y la clausura del imaginario populista. Esta situación dejó en estado de indefensión a buena parte de la población, fundamentalmente aquella para la cual la escolarización era la única (o la principal) manera de acceso sistemático al conocimiento socialmente validado y, por su intermedio, a los circuitos del trabajo y del consumo. En el mismo sentido, los circuitos de educación que ya estaban diferenciados en cuanto a la calidad de servicio que ofrecían, se profundizaron y comenzó a acentuarse la fragmentación social.

—Si bien durante la dictadura de 1976 no fue la primera vez que la represión afectó al sistema educacional, antes se había dado fundamentalmente en las universidades. En el PRN hubo un intento expreso de reprimir en la educación básica, desde una lógica de terrorismo estatal. Para quienes encabezaban el proyecto dictatorial, la escuela era una agencia de inculcación ideológica que transmitía las ideologías que subvertían el orden. Por ello, era necesario intervenir desde la

"Esta situación dejó en estado de indefensión a buena parte de la población, fundamentalmente aquella para la cual la escolarización era la única (o la principal) manera de acceso sistemático al conocimiento socialmente validado y, por su intermedio, a los circuitos del trabajo y del consumo".

más temprana edad para modificar esa situación. De este modo se instauró un proceso de control de los actos más cotidianos, cuya orientación estaba centrada en la idea del orden. Así comenzó el despliegue de un dispositivo según la lógica de una sociedad que "se patrullara a sí misma". Sin embargo, todos estos elementos que permearon todos los órdenes institucionales del sistema educativo no han sido casi estudiados y es escasísima la bibliografía que ha analizado específicamente este período. De este modo, este período continúa siendo muy oscuro ya que no ha habido casi oportunidad de penetrar en la trama cotidiana, sobre todo en un ámbito que se compone —en buena medida— de ritualizaciones cotidianas, como es el escolar. ■

La Dra. Adriana Puiggrós, es Secretaria para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva, del gobierno nacional. Con Myriam Southwell, asesora de Adriana Puiggrós en educación.

Cómo se desmanteló el sistema educativo durante la dictadura

La educación en la mira

por Noemí Ciollaro

ilustraciones Claudia Contreras

La realidad de cómo actuó la última dictadura militar sobre el sistema educativo configura aún hoy, veinticinco años después del Golpe de Estado, un espacio oscuro de la memoria que, sin duda, sigue pendiente de ser reconstruido.

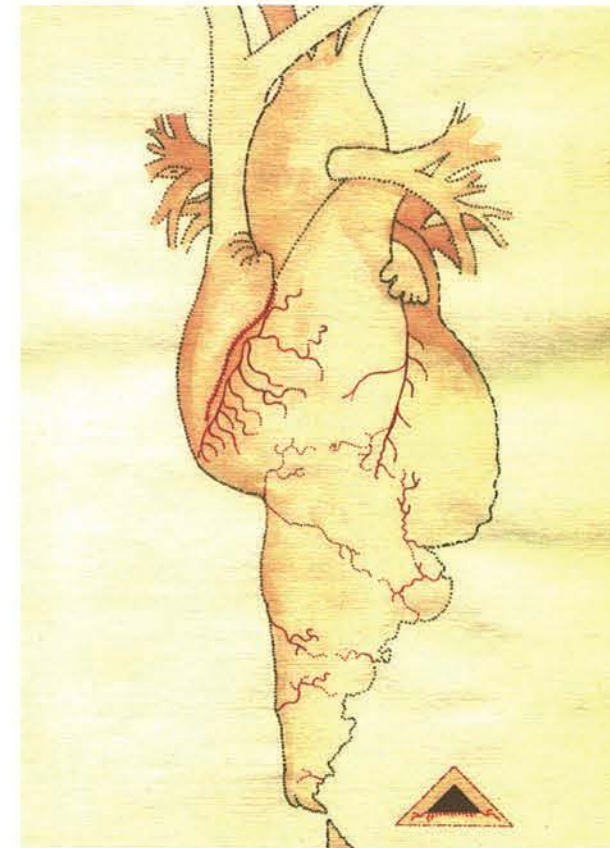
Los entrevistados de esta nota han sido protagonistas activos en el ámbito educativo antes, durante y después de la dictadura militar. Tanto desde lo militante como desde lo pedagógico. Sin embargo, advierten con asombro que existe una deuda con la memoria colectiva y lo atribuyen a “los tiempos históricos” y “al dolor que aún provoca” evocar lo sucedido a partir del 24 de marzo de 1976.

Jorge Cardelli, actual director de la escuela “Marina Vilte” creada por CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) para la investigación y la formación docente, sostiene que “la represión a la comunidad educativa y a la cultura se empieza a prefigurar con el gobierno de Isabel Perón, cuando el doctor Taiana es obligado a renunciar en el Ministerio de Educación y se lo reemplaza por Oscar Ivanisevich, en 1974, inmediatamente después de la muerte de Juan Perón. Así se modifica de forma definitiva la orientación iniciada en mayo del '73. Con el desplazamiento de Taiana se concreta la aspiración de los sectores de derecha del Movimiento Peronista, de la iglesia católica y de buena parte de las Fuerzas Armadas y policiales. Ahí es cuando se ponen en marcha un conjunto de propuestas inspiradas en la pedagogía de la liberación de Pablo Freire y en las corrientes del nacionalismo popular que se había desarrollado en la década de los sesenta, con el aporte de intelectuales populares que la academia había rechazado, de experiencias pedagógicas en el seno mismo del movimiento popular y también al interior de

las Universidades, cuando la relación de fuerzas lo permitía. Estas propuestas están atravesadas por la idea de que la cultura es o bien un instrumento de dominación social y política o bien una herramienta de liberación.

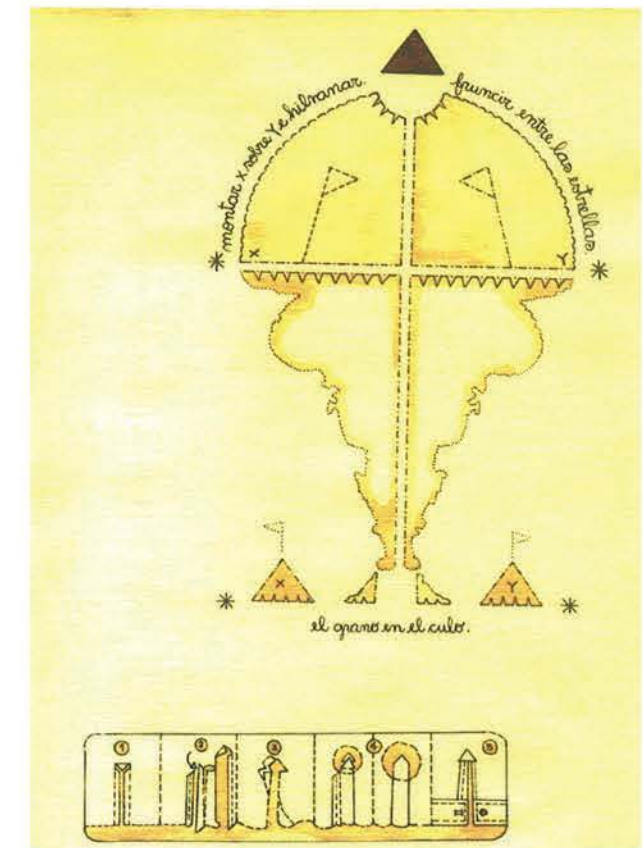
Otra de las preocupaciones centrales de la ‘Misión Ivanisevich’ fue el desarrollo creciente de la CTERA, fundada en septiembre del '73. Los docentes después de varios intentos, alcanzan su unificación en el marco de un acuerdo que incluye un programa reivindicativo, el compromiso con la defensa y promoción de la educación pública con contenidos democráticos y populares y la convergencia con los objetivos reivindicativos y políticos de la clase trabajadora. Estos hechos constituirán para Ivanisevich, y para los posteriores ministros de Educación de la dictadura militar, un logro de la ‘agresión marxista internacional’ que necesitaba ser desmantelado. Así se comienzan a sentar las bases para una acción represiva decidida en el gobierno militar.”

El sistema educativo en todos sus estamentos fue considerado por los dictadores como un ámbito generador de ideas subversivas al que había que destruir. La subversión estaba en los contenidos y en las metodologías pedagógicas, en los métodos participativos y en el co-gobierno universitario, en las nuevas formas de enseñanza y en el sindicalismo docente. El mensaje fue claro: todo ello debía ser aniquilado porque sólo así sería posible “recuperar el orden”. Prueba de ello es la Resolución N° 538, dictada el 27 de octu-



Historias clínicas. Dibujos de Claudia Contreras.

bre de 1977 por el entonces Ministro de Cultura y Educación, Juan José Catalán, editada en forma de libro, distribuido en todas las escuelas del país y titulado Subversión en el ámbito educativo (Conozcamos a nuestro enemigo): Tras aclarar en su Considerando que “es materia fundamental del Propósito y los Objetivos Básicos para el Proceso de Reorganización Nacional la erradicación de la subversión en todas sus formas”, en 80 páginas realiza un extenso análisis del “enemigo” y bajo la denominación de “bandas de delincuentes subversivos marxistas” agrupa desde las organizaciones armadas existentes en la época (ERP, Montoneros, FAR), hasta los centros de estudiantes secundarios y universitarios, la Federación Universitaria Argentina, los gremios docentes y no docentes y cualquier otra agrupación que pudiera hacer un análisis crítico de algún aspecto de la realidad educativa. “En el país —se afirma en el documento— hemos de hablar de guerra, de enemigo, de subversión, de infiltración, términos estos poco acostumbrados en la historia argentina contemporánea y sobre todo en ámbitos como el de la educación y la cultura; pero esa es la cruda realidad y como tal se debe asumir y enfrentar: con crudeza y valentía”. En otro de sus párrafos el texto subraya que “a los educadores” les cabe el calificativo de custodios de nuestra soberanía ideológica”. “Los ministros de Educación de la dictadura —subraya Cardelli— plantearon un período de monopolio ideológico y político del Estado para llevar adelante las tareas de limpieza



de las ideas marxistas y peronistas y de restauración del orden. En consecuencia con esto, la represión en la comunidad educativa acompañó todo el proceso militar, buscando restaurar los valores occidentales y cristianos y erradicar toda concepción crítica, cualquiera fuera su origen ideológico”. Ese marco fue, además, funcional a la política económica que inauguró Martínez de Hoz con la subsidiariedad del Estado, la privatización de la educación y la transferencia de los servicios educativos a las provincias y los municipios. Que la educación sería un blanco primordial en el ataque militar a la sociedad civil estuvo claro el mismo 24 de marzo de 1976. Ese día fue asesinado Isauro Arancibia en Tucumán, en la sede de su sindicato de base. Poco después fue el turno de Marina Vilte, de Jujuy, y de Eduardo Requena, de Córdoba. Los tres eran miembros de la Junta Ejecutiva Nacional de CTERA. Junto a ellos hay más de 600 docentes desaparecidos. En poco tiempo, la conducción del gremio docente fue desmantelada. Decenas de ellos fueron llevados con vida desde el interior de las escuelas y universidades, siendo torturados, muertos o desaparecidos. Tal el caso del profesor Alfredo Bravo, secretario general de CTERA, quien fue secuestrado mientras estaba dictando clases, el 8 de setiembre de 1977. Bravo permaneció 13 días como desaparecido y fue torturado brutalmente. Lo mismo sucedió con Marcos Garzzetti, maestro y gremialista de Mendoza. Con todas estas acciones, las semillas del horror habían sido sembradas. ■

Testimonio de Cecilia Martínez, maestra jardinera, secretaria de prensa y difusión del SUTEDA.

“Era enloquecedor sentirse así”

“En 1976 yo trabajaba como maestra de preescolar en el Jardín de Infantes 902 de Morón. En ese momento yo era militante sindical en lo que era el sindicato de base de CTERA en Morón, quizá por eso mi mirada no coincidió con la de la mayoría de los docentes. Sé que durante esos años, en mi propio caso funcionaban mecanismos de autorrepresión, de no saber hasta qué punto podías hablar con tus compañeros. Todo esto estaba muy vinculado a lo que sucedió en los últimos tiempos del gobierno de Isabel Perón y esa visión de que era necesario imponer un orden, que era la visión que mayoritariamente tenían los sectores medios. Lo mismo sucedía con los padres de los alumnos con los que yo tenía una buena relación, sabían de mi militancia y mi pertenencia a la CTERA. Había situaciones en las que una, a pesar del riesgo, se jugaba más. A mí me pasó cuando llegaron a mi escuela las listas en las que te preguntaban si determinados chicos concurrían al colegio. Esas listas eran para ubicar a sus padres y eran dirigidas a las directoras de las escuelas. Era una época en la que los padres se mudaban de un lugar a otro, generalmente huyendo de la represión y anotaban a sus hijos en la escuela de la zona a la que se trasladaban. De manera que era una forma muy expeditiva de ubicarlos. Este era un tema con el que confrontamos mucho con las directoras y también con las maestras. Pero tenía que ver con esa mentalidad que tienen los maestros de la vía jerárquica, de que lo que viene como pedido de información debe ser inmediatamente cumplimentado; sin pensar para qué te lo están pidiendo o para qué pueden llegar a utilizarlo. Y esto era continuo, porque las listas pidiendo informes llegaban semanalmente a las escuelas, sobre todo en los primeros años de la dictadura. Ahí no nos callábamos, decíamos para qué iba a ser usado y que no podíamos ser cómplices de poner en riesgo a los padres y a los propios chicos.

A partir del Golpe, los militares hacían reuniones con inspectores, directores y maestros para dar instrucciones directas sobre cómo se debía “colaborar” en temas de este tipo. En el ámbito educativo se reproducían las mismas posiciones morales que funcionaban a nivel social; mientras muchos docentes se quejaban de que los estaban usando,

a otros les parecía correcto y participaban abiertamente. En esa época, los militares apadrinaban escuelas buscando otra forma de control. En Morón, donde todo está rodeado de bases militares, esto se veía claramente. Venían a las escuelas con discursos virulentos en actos donde entregaban banderas de ceremonia, con bandas militares tocando música marcial y donde los coroneles les explicaban a los chicos qué era el “sucio trapo rojo”. Recuerdo que para el 17 de agosto del '78, llegó una directiva de que todos los chicos tenían que dibujar granaderos para conmemorar la fecha. Yo tenía la sala de jardín de tres años, los más chiquitos de todos. Un nene de tres años no dibuja todavía la figura humana, así que mal podían dibujar un granadero.

Que nosotras siguiéramos militando, no significaba que no tuviéramos miedo, el miedo, a veces el terror, lo sentías igual. Yo estaba en lo sindical desde el '70, pero en esa época una contaba además con una fuerte ligazón con los padres de los alumnos, sobre todo en los barrios más populares. Al momento del Golpe y con el surgimiento del terror, se genera una desconfianza absoluta que hacía que nos sintiéramos muy mal. A mí, en el '77, me allanaron mi casa y al otro día no pude contarle en la escuela; fui a trabajar con un nivel de angustia impresionante. Era muy enloquecedor sentirse así.

Yo militaba en lo sindical desde el '70, y en la CTERA desde su fundación, en el '73. Mi hija, Marina, nació el 1° de mayo; así que yo el 24 de marzo ya estaba con licencia por maternidad. Pero el mismo día hicimos una reunión en una plaza de San Justo, nos juntamos media docena de compañeros de Morón y Matanza para ver qué hacíamos: si los compañeros iban o no a las escuelas al otro día, qué hacíamos con los sindicatos. En ese momento la discusión central era que teníamos dos opciones: o clandestinizarnos o continuar con el sindicato y militando. Clandestinarse era imposible; éramos militantes sindicales, militantes sociales, teníamos que seguir trabajando porque vivíamos de nuestro salario. Sabíamos que ya estábamos en la mira y si cerrábamos el sindicato nos convertíamos en blancos mucho más fijos de la represión. Decidimos continuar moviéndonos con el sindicato abierto, pero sin reuniones, ni asambleas, ni delegados. ■

Estela Maldonado, docente y asistente social, secretaria de Derechos Humanos del SUTEDA.

“El miedo era tan fuerte que anestesiaba”

“Yo comencé a trabajar en DINEA (Dirección Nacional de Educación para Adultos) en 1974, en un centro de adultos en Béccar, con los trabajadores de las cuadrillas. Era la época de esplendor de la DINEA, el lugar donde más avanzado estaba en el sistema educativo el desarrollo de las ideas de Paulo Freire, de trabajar con la cultura, de un programa que se llamaba CREAR, y había una gran disposición por parte de la conducción del organismo de que se hicieran experiencias de este nuevo tipo con los adultos y que era política. Usábamos como instrumento para aprender a leer los convenios colectivos de trabajo y materiales vinculados con su propia actividad.

Mi compañero y yo militábamos en la JTP (Juventud Trabajadora Peronista) y a fines del '74 comenzaron los problemas de persecución, mudanzas a distintos lugares, hasta que en 1975 a mi compañero, Mauricio Teplisky, lo secuestran y lo matan. Creemos que fueron parapoliciales, pero nunca pudimos saber nada más preciso. Hasta fines del '75 estuve sin trabajar y después, al comenzar el año '76, recuperé mi cargo de DINEA y fui a trabajar a un Centro de Adultos del Sindicato de la Carne de Berisso. Mis alumnos eran adultos también, trabajadores del frigorífico y familiares de ellos. Con mis compañeros de trabajo hicimos muy buena relación. Todos los días había noticias de alguien, de un familiar, de un primo, de un pariente o amigo de alguno de los compañeros del Centro que había desaparecido. En Berisso, Ensenada, La Plata, las comisiones internas de las siderúrgicas, los astilleros... toda esa zona fue diezmada, y nos llegaban las noticias de las familias buscando a sus hijos. Se decía poco, pero sí estaba claro que era el Ejército el que se estaba llevando a los compañeros. Se veían los tanques y las tropas; a pesar de que las operaciones eran nocturnas, todo el barrio veía lo que pasaba.

A fines del '77 yo había formado una nueva pareja y esperábamos irnos a vivir a Carapachay cuando terminarían las clases; pero pocos días antes me llamó la directora del Centro, me citó afuera de allí y me dijo: “Te tenés que ir ya, no me cuentas nada nena, pero andate ya mismo porque te vinieron a buscar, dijeron que sos la mujer de un guerrillero que mataron. Así que andate ya”.

Al año siguiente, empecé a trabajar en la municipalidad de

Vicente López, como asistente social. Allí también encontré un grupo de trabajadores con un nivel de compromiso muy fuerte y con una ética muy importante. Trabajábamos hasta el límite de lo posible en la defensa de los derechos de los niños y de los ancianos, con los chicos de la villa Las Flores; dentro de lo terrible de la situación era como un refugio, donde siempre algo podíamos hacer.

Después de tener a mi segunda hija, en el '81 volví a trabajar en una escuela, en el límite entre General Sarmiento y Tigre, a cinco cuadras de Campo de Mayo, en la que era la escuela N° 27; tuve primer grado. Ahí viví un clima de mucho miedo, se trabajaba mucho y no se hablaba de nada que no fuera trabajo. Todos nos cuidábamos mucho porque nadie tenía seguridad sobre con quién estaba hablando. Era un lugar muy difícil porque había muchas docentes que eran esposas de militares, oficiales o suboficiales que estaban destinados en Campo de Mayo. Nadie opinaba, por las dudas. En Matemática se prohibió la Teoría de los conjuntos porque se la consideraba subversiva. A ese currículum que rigió a toda la provincia de Buenos Aires se lo llamaba “el conductero”, y era un listado enorme y demencial de las conductas que los chicos tenían que adquirir en cada grado, desde a atarse los cordones de las zapatillas hasta disparates inimaginables.

Todavía estamos luchando contra los resabios que la dictadura dejó en los docentes, en toda la sociedad. Todavía hay mucho miedo y, en algunos sentidos, no tiene que ver con la realidad. Los docentes expresan el miedo a los sumarios. Te podés quedar sin trabajo porque te van a hacer un sumario, dicen. El sumario es un procedimiento administrativo para sancionar a alguien que cometió una falta y la pena máxima es la exoneración. En la práctica, desde el '83 para acá, casi no existen casos de exoneración, y los que hay son casos gravísimos, cuestiones penales. La obediencia debida es el otro tema: la jerarquía piramidal que baja órdenes en escala, y el soldado, que es el maestro, tiene que cumplir, no puede decir que no a nada. Porque si no uno puede tener un lío con su superior jerárquico y así para arriba, y uno nunca sabe en qué puede terminar.... Para todos ha sido muy difícil hablar de lo que nos sucedió. ¿Cómo era ese miedo? Era tan fuerte que anestesiaba. Y nos lleva la vida poder ir desbloqueando y narrar”. ■

Monseñor Emilio Grasselli, Pio Laghi y la Iglesia de la complicidad

Bajo la mirada de Dios

por Horacio Verbitsky

Horacio Verbitsky escribió una serie de artículos esclarecedores sobre la actuación de la jerarquía eclesiástica en la última dictadura militar. Puentes reproduce a continuación dos de ellos, publicados en 1995. Una buena oportunidad para volver sobre los pasos de la particular relación que tuvo la Iglesia con los represores durante esos años.

El silencio

El grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada montó un campo de concentración transitorio en una isla del Tigre, al que llevó medio centenar de secuestrados para que no los descubriera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1979. Esa isla, que pertenecía a la curia de Buenos Aires, y donde comía sus asados dominicanos el cardenal Juan Carlos Aramburu, fue vendida por el monseñor Emilio Grasselli al grupo de tareas de la ESMA, que utilizó en la operación los documentos de un detenido-desaparecido, cuya firma fue falsificada en la escritura. Esta historia asombrosa y poco conocida, ejemplifica las relaciones peligrosas entre la jerarquía católica y los marinos de la guerra sucia, reactualizados por la confesión del capitán de corbeta Adolfo Scilingo. Explica también la conmoción que sus revelaciones causaron en el Episcopado. La isla se llamaba "El Silencio".

"Vos sos el Cristo"

—Si él no se hubiera enfermado, estas cosas no ocurrirían— dijo el hombre que disimulaba la calvicie cubriendo su cráneo con cabellos que hacía remontar desde las sienes. La mujer no sabía qué contestar. Deseaba concluir rápido el trámite.

—¿Querés verlo?— insistió el hombre.

—Parecía importarle que ella lo viera. La mujer lo siguió en

silencio. El hombre abrió la puerta de una habitación a oscuras y penetró unos pocos pasos. La mujer se asomó. Sólo oyó un gemido junto con la fricción de las sábanas. El anciano moribundo había sido una persona importante. Sus fotos se habían publicado en todos los periódicos diez años antes. De negro, con una faja morada en la cintura, al lado de un general con uniforme de gala que le ofrecía una lapicera. Inclinado sobre un gran libro de escribanía firmando un acta.

—Te puedo conseguir la visa para Venezuela, pero necesito el pasaporte y el pasaje de ida y vuelta— explicó el hombre con el pelo de las sienes sobre el cráneo.

—Pero tiene que ser pronto. Me quiero ir en el avión del viernes— dijo la mujer.

—Está bien, vení a verme el jueves a la Curia.

No habría problemas. Del pasaporte y el pasaje se encargaría el hombre joven que esperaba a la mujer en un auto en una de las dos cuadras de la breve calle San Martín de Tours. Cuando la mujer llegó el jueves al viejo edificio de la calle Suipacha, traspasó el portón de hierro negro y buscó la puerta lateral bajo una galería con columnas. Pero antes de encontrarla la llamaron desde un auto detenido bajo las altas palmeras del jardín, extrañas en el centro de Buenos Aires. El hombre calvo la invitó a subir al vehículo y allí hablaron. Le dijo que estaba al tanto de lo que pasaba en el lugar de donde ella venía, y que había ayudado a mucha



Imagen más que elocuente. En su visita de 1982, el Papa Juan Pablo II bendice a los representantes de la Junta Militar.

gente a salir del país.

—Yo sé muchas cosas— insistió.

—¿Por qué no las denuncia?— se animó a preguntar la mujer.

—Si yo hablara me tendría que ir del país y no podría conseguirle la visa.

El sacerdote le recibió la confesión adentro del auto y luego le entregó una cruz.

—El Cristo sos vos— le dijo.

Antes de despedirse repitió por tercera vez una pregunta que lo obsesionaba:

—¿Allí violan a las mujeres? ¿A vos te violaron?

Al día siguiente, 20 de abril de 1979, la mujer, Graciela Beatriz Daleo, secuestrada 18 meses antes por un pelotón de la Escuela de Mecánica de la Armada, salió del país con un pasaje debitado de una cuenta de la Armada que le entregó el capitán de corbeta Jorge Perren, (a) Puma, Octavio o Morris, ex jefe de operaciones del GT 3,3/2, el hombre que la esperaba el lunes anterior, cuando subió al sanatorio de la Pequeña Compañía de María para pedir que le tramitara la visa al hombre calvo que se prestaba pelo de las sienes, Monseñor Emilio Teodoro Grasselli, secretario familiar del ex Arzobispo de Buenos Aires, ex vicario castrense y ex primado de la Argentina, profesor doctor Antonio, Cardenal Caggiano, el hombre que agonizaba en la oscuridad.

Por lo menos media docena de secuestrados salieron del país con la ayuda de Grasselli, a quien siempre visitaba en

compañía de los marinos. El presbítero Grasselli siguió siendo secretario del vicariato castrense cuando Caggiano murió y fue sustituido por monseñor Adolfo Servando Tortolo.

"Dijiste la verdad"

—Dijiste la verdad, Emilio— dijo el hombre joven.

—¿Y cómo podías pensar que yo no iba a decir la verdad?

—le respondió el hombre mayor.

Los dos lloraron abrazados más de un minuto, a fines de mayo de 1985, en un pasillo de tribunales, donde Grasselli, seis años más calvo y entrado en carnes, acababa de testimoniar en el juicio a los ex Comandantes. El hombre joven era Alfredo Forti, en ese momento de 24 años, y apenas un adolescente en 1977, cuando su madre Azucena Sosa fue secuestrada de un avión a punto de decolar en la pista del aeropuerto internacional de Ezeiza. Forti y sus cuatro hermanos menores pasaron cinco días en un campo de concentración, hasta que Grasselli se hizo cargo de los trámites burocráticos para sacarlos del país. El religioso sollozó en la sala cuando leyó las cartas de agradecimiento del padre y la abuela de los niños. Su testimonio desplegó ante el tribunal un universo fascinante y contradictorio, de connubio con los verdugos y amor por sus víctimas, y expresó en forma insuperable la ambigüedad esencial de la Iglesia durante la guerra sucia. La madre nunca reapareció.

En su libro *Iglesia y dictadura*, Emilio Fermín Mignone, ↪

“En 1979, comenzaron las actividades para despejar los campos de concentración antes del arribo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Algunos de los prisioneros en la Escuela de Mecánica de la Armada fueron ejecutados; otros, puestos en libertad fuera del país”.

presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, afirma que “dado el conocimiento que Grasselli llegó a tener de los hechos, merced a su contacto diario con centenares de testigos, sólo puede pensarse que cumplió, bajo las directivas del vicario, una función cómplice dentro del engranaje siniestro de la acción genocida”. Algunos datos de esta historia asombrosa provienen del expediente judicial, rescatado del olvido por la doctora Alicia Olivera.

Hojas y troncos

En 1979, comenzaron las actividades para despejar los campos de concentración antes del arribo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Algunos de los prisioneros en la Escuela de Mecánica de la Armada fueron ejecutados; otros puestos en libertad fuera del país. Entre ellos, Marcelo Camilo Hernández. Pero antes le hicieron prestar un involuntario servicio. Con su documento nacional de identidad N° 8.558.796, los marinos del grupo de tareas adquirieron el 29 de enero de 1979 la Isla El Silencio, sobre el arroyo Tuyú Paré, a 500 metros del río Paraná Miní y a pocos metros de la boca del Chaná Miní, donde hay un enorme destacamento de Prefectura. El 3 de enero, Hernández pidió la renovación de pasaporte a la Policía Federal para salir del país. Su firma en el formulario policial y en la escritura de compra no coincide. A esa isla trasladaron a un tercer grupo de prisioneros, a quienes por sus habilidades técnicas mantenían con vida realizando tareas logísticas.

Algunos sobrevivientes contaron a la justicia su traslado a “El Silencio”, que no era una isla cualquiera. Enrique Fockman dijo que los llevaron sin capucha y en un micro hasta un aspostadero en San Fernando, donde abordaron una lancha que los llevó hasta la isla, próxima a un destacamento de Prefectura Naval. “Vivíamos en una casa comunicada por radio con la ESMA. Trabajábamos cargando los troncos de una plantación de álamos que los guardias cortaban y vendían, y en la recolección de hojas de una planta filosa con la que se hacía hilo y en limpiar el terreno para nuevas plantaciones”, narró el 22 de junio de 1985 ante la Cámara Federal. (...)

La experiencia de Víctor Melchor Basterra es la de los engrillados y encapuchados que dormían entre los pilotes de la casa cerrados con cemento. “Nos llevaron en una lancha descubierta, con una lona encima. Nos golpearon

con palos, nos pusieron en una habitación húmeda, el agua era mala y todos nos enfermamos. Era un lugar cerrado, sin ventilación y por el calor hubo varios desmayados. Abrimos la puerta y hubo una corrida terrible porque pasó un vecino y nos vio.”

Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se retiró del país, los secuestrados volvieron al campo de concentración original en la ESMA.

El testaferro

Al concluir la dictadura, el diputado provincial por la UCR Alberto Néstor Firpo denunció a la justicia que en “El Silencio” había funcionado un campo de concentración. Primero un juez penal y luego el juez federal de San Isidro se hicieron cargo de la investigación.

Jorge Alfredo Rejenjo, uno de los moradores más antiguos de la zona, reveló al juez que la isla “El Silencio” pertenecía a la Curia de Buenos Aires, cuyo encargado en el lugar era el señor Haberlaig. Urbano Ruano, dueño de lanchas de transporte, agregó que una de ellas solía ser contratada por Antonio Haberlaig para trasladar a la isla al sucesor de Caggiano en el Arzobispado de Buenos Aires, monseñor Juan Carlos Aramburu y su comitiva. El cardenal iba por la mañana, comía un asado en “El Silencio” y regresaba a la Capital. Agregó que Haberlaig la había vendido a una sociedad en 1975. Uno de los cuatro miembros de la sociedad era monseñor Emilio Teodoro Grasselli.

Otro de los socios, el comerciante de automóviles Rodolfo Fialla, dijo que Grasselli fue quien ubicó la quinta. Añadió que había conocido a Grasselli porque “desempeñaba sus tareas al lado de su domicilio, en una propiedad del Arzobispado argentino, y residencia del actual cardenal Aramburu”. Añadió que Haberlaig legó al morir su patrimonio a la Curia, de modo que los socios pagaron un adelanto a Haberlaig y el resto a la Curia. Grasselli, Fialla, Homero Luna y Alfredo Berghella revendieron la isla en 1979 al grupo de tareas de la ESMA, que la compró con los documentos del detenido Hernández, al que le falsificaron la firma. Cuando el juez quiso saber cómo había llegado a su conocimiento la existencia de la isla, Grasselli dijo que por medio de Haberlaig, a quien identificó como administrador de la Curia. Su declaración ante la justicia es muy breve. Lo que más insiste en destacar es que nunca conoció personalmente a Hernández. No hay razones para dudar de su palabra. Le bastaba con que lo conocieran los marinos de la ESMA.

Vox Dei

“El Nuncio Apostólico Pio Laghi conocía todo lo que pasaba en la Escuela de Mecánica, podía averiguar los nombres de quienes estaban secuestrados allí y el comandante en jefe de la Armada, Armando Lambruschini le consultó si debía dejar con vida a un grupo de 40 detenidos-desaparecidos que recibió de Massera al asumir el cargo”, dijo María Igna-

cia Cercos de Delgado, la esposa del periodista Julián Delgado, desaparecido en junio de 1978. Entre setiembre y octubre de 1980, María Ignacia tuvo tres audiencias con el ex representante de la Argentina de los Papas Paulo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. La semana pasada, María Ignacia había narrado a este diario que el ex almirante Emilio Massera conservaba en su computadora información sobre los detenidos-desaparecidos; pero recién ahora se decide a revelar las entrevistas secretas que mantuvo con el embajador del Vaticano, quien luego de la dictadura militar pasó a cumplir las mismas funciones en Estados Unidos. "Durante muchos años estuve agradecida a Laghi por las gestiones que hizo para tratar de ubicar a mi esposo. Pero ahora me siento un monstruo por haber escuchado esas cosas sin reaccionar. Leí la nota de Juan Gelman sobre la Iglesia y la ética y me conmovió. La vida me ha dado esta segunda oportunidad de decir las cosas y no la quiero perder. Sé que son útiles para otra gente y para el conjunto de la sociedad y por eso no me puedo callar", agregó.

"Buenos sentimientos"

María Ignacia Cercos es bautizada, pero no practicante. A partir del secuestro de su esposo tomo contacto con diversas personalidades laicas vinculadas con la Iglesia. Una de ellas combinó la primera audiencia con Pío Laghi, quien la atendió en la sede de la Nunciatura, en la Avenida Alvear. "Me recibió cordialmente, fue la persona más abierta con la que hablé. Yo lo había conocido años atrás en una cena a la que asistí con mi marido y me sorprendió comprobar que me recordaba", evoca ahora. Laghi le dijo que al cambiar de mano la Armada, en setiembre de 1978, Massera había entregado a Lambruschini un grupo de 40 prisioneros con vida. Agregó que el nuevo Comandante en Jefe era un hombre de buenos sentimientos, que lo había consultado acerca de qué hacer con ellos.

Según María Ignacia, Laghi le dijo que Lambruschini no se decidía a condenar a esos detenidos-desaparecidos a la muerte que habían sufrido todos los demás que pasaron por la ESMA; pero tampoco a dejarlos en libertad, por temor a que se reprodujera un episodio ocurrido por un primer grupo de liberados. "Me contó que habían actuado en forma muy desprolija. Los dejaron salir del país bajo amenaza de que le harían algo a la familia si hablaban; pero alguien rompió el silencio. Creo que una mujer mostró en España el pasaje con que salió, de Aerolíneas Argentinas. Dado el antecedente que Laghi describía como una torpeza, Lambruschini consultó a la Iglesia qué hacer con esas personas", prosiguió María Ignacia.

Aunque Laghi no lo dijo, se sobreentendía que su consejo fue que se preservaran las vidas.

"Los irrecuperables"

La mujer que desató esta historia en España fue Graciela

Beatriz Daleo, secuestrada en 1977, quien logró salir del país el 20 de abril de 1979 con su pasaje hacia Venezuela, debitado por Aerolíneas Argentinas de una cuenta corriente de la Armada. Al llegar a España, Graciela Daleo denunció el caso. Una situación similar vivió el prisionero Andrés Castillo. En ambos casos, las visas para salir de la Argentina fueron tramitadas por el monseñor Emilio Teodoro Grasselli, asistente del vicario general castrense Adolfo Servando Tortolo, quien al producirse el golpe de 1976 era además presidente de la Conferencia Episcopal. Durante el juicio a Videla, Massera y Cía., en 1985, Castillo narró a los jueces que el ahora capitán de fragata Juan Carlos Rolón, lo condujo desde la ESMA hasta la sede de la Curia de Buenos Aires, en Sui-pacha entre Charcas y Santa Fe.

"Rolón se presentó ante Grasselli con su nombre y grado y le explicó que yo era una de las personas que la Armada iba a dejar en libertad, para lo cual le pedía que me tramitara la visa". Rolón también lo llevó en auto hasta el Aeropuerto de Ezeiza, donde lo acompañó hasta que abordó el avión. "Ahí me dijo que el pasaje tenía el número de la cuenta corriente de la Armada". De acuerdo con el testimonio de Castillo, Rolón agregó: "Guardalo, te va a servir para volver al país, porque es la prueba de que la Armada no tiene nada contra tuyo". Daleo y Castillo entregaron sus pasajes a la Cámara Federal que condenó a prisión perpetua a los ex Jorge Videla y Emilio Massera. La pena para Lambruschini fue de 8 años. Todos fueron indultados en 1990 por el presidente Carlos Menem.

Citado a declarar en el juicio a los ex comandantes, Grasselli admitió que había conocido más de media docena de secuestrados en la ESMA para quienes tramitó visas en la embajada de Venezuela. Explicó que el Nuncio Laghi le había facilitado para ello un contacto con el embajador venezolano Santander. Los desaparecidos llegaban a la casa del monseñor custodiados por sus secuestradores y luego de cada reunión eran devueltos al campo de concentración. La Fiscalía le presentó una carta enviada a un sacerdote venezolano en la que le recomendaba a los desaparecidos ya "reeducados" en la ESMA, y Grasselli la reconoció como propia.

Otra carta escrita por Grasselli el 14 de mayo de 1979, en vísperas de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, mientras ocurría entre los militares un debate similar al actual acerca de la conveniencia de dar explicaciones sobre los desaparecidos, también fue incorporada a un expediente judicial.

Grasselli sostenía en esa carta que los familiares que reclamaban noticias sobre los desaparecidos "no pueden convencerse de que se han hecho cosas irreversibles y lo lamentable es que nadie da la última palabra para que finalice esta peregrinación." Dos semanas más tarde, el jefe del Ejército, Roberto Viola, se refirió a los desaparecidos como ausentes para siempre y recomendó que "no se busquen explica- ➤



El collage de León Ferrari refleja el rol de la Iglesia.

ciones donde no las hay.”

Al declarar como imputado en la causa judicial por la desaparición del abogado Víctor Noé y el estudiante Eduardo Serrano, Grasselli dijo que el vicario Tortolo le había encomendado confeccionar un fichero con los nombres de las personas desaparecidas, y enviar listas al gobierno y las Fuerzas Armadas para recabar información. En el *Nunca Más* se reproducen fragmentos del legajo 1560. El familiar de uno de los desaparecidos que recurrió a ese fichero en busca de noticias afirmó que Grasselli le informó que los desaparecidos estaban en casas de rehabilitación y que a los que llamó *irrecuperables* “es posible que alguien piadoso les de una inyección y el irrecuperable se duerma para siempre”. Todo esto sugiere que a través del Nuncio Laghi, el Vaticano manejó en forma directa la relación con el vicariato castrense, donde el monseñor Grasselli desempeñó las tareas de inteligencias y que conocía con detalle lo que estaba sucediendo.

En su confesión, el ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo dijo que la decisión de que los detenidos-desaparecidos fueran arrojados con vida desde aviones navales fue comunicada a una multitudinaria reunión de oficiales de la Armada en la base naval de Puerto Belgrano por el ex Comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Luis María Mendía. Según Scilingo, Mendía dijo que se había consultado con las autoridades eclesiásticas, que aprobaron el método como “una forma cristiana de muerte”. (...)

“Probablemente no fueron culpables”

En la primera audiencia que consiguió María Ignacia con Laghi, el Nuncio Apostólico le dijo que mientras la esperaba había tratado de hacer memoria sobre el grupo de 40 prisioneros que el ex almirante Massera había entregado con vida a su sucesor. “Creía que Julián podía ser uno de ellos. Me explicó que muchos de ese grupo eran profesionales, que probablemente no fueron culpables y cuya detención se podría haber debido a errores”, dice la mujer. Laghi no pudo recordar si Delgado formaba parte de ese lote pero le prometió averiguar y le propuso un nuevo encuentro para cuando tuviera información. (...)

“Cuando volví a verlo, Laghi me dijo que lamentablemente Julián no estaba en esa lista y me pidió disculpas por haberme hecho abrigar una esperanza”, dice María Ignacia. “Quiere decir que tenía pleno acceso a la información”. Sin embargo, le recomendó que no desesperara y le ofreció ponerla en contacto con el entonces teniente general Roberto Viola, quien ya había sido designado presidente de la Junta Militar, pero aún no había asumido en reemplazo de Videla. “Voy a una cena en la que va a estar el general, y le voy a plantear su situación”, la confortó. En un tercer encuentro, Laghi le transmitió la cita con Viola.

Merced al contacto hecho con Laghi, Viola recibió dos veces a la esposa del periodista desaparecido, en un departamento de la calle Uruguay al 1200, casi esquina Arenales, frente a la antigua confitería Bambi. Dice María Ignacia: “En la calle había tres Falcon y en el palier interno una persona armada. Le dije que quería saber, que no me guiaba la venganza sino la desesperación. Viola me escuchó en silencio y dijo que iba a averiguar. No habló mucho. La segunda vez me dijo que podía asegurarme que no habían sido ni el Ejército ni Seguridad Federal. Queda la Marina, Pero ni yo tengo acceso; son compartimentos estancos”, concluyó. Su testimonio coincide con el de Mariano Grondona, quien recuerda una entrevista con Viola de un grupo de editores políticos simpatizantes con la línea interna que el jefe golpista integraba junto a Jorge Videla: “Si ustedes nos apoyan, no lo digan en sus revistas, poque no podemos garantizarles seguridad”. También Delia García Rueda, la esposa del desaparecido embajador de Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, recuerda haber sido confortada por Laghi, quien visitaba la casa de la familia en compañía de un sacerdote. Según el testimonio de la mujer ante la Cámara Federal, Laghi interpretó que Hidalgo Solá había sido víctima de pugnas entre facciones opuestas del poder militar. También le contó que había conseguido “sacar de la ESMA” a dos sacerdotes que luego salieron del país (se trataba de los jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalies, secuestrados en mayo de 1976. En la ESMA les preguntaron por su amiga, la ex religiosa Mónica Quintero, cuñada del actual Jefe de Estado Mayor almirante Enrique Molina Pico, quien desapareció con pocos días de diferencia). Laghi no ejerció la denuncia profética sino la religiosa ges-

tión de buenos oficios, ceñida a casos específicos: sacerdotes como Yorio y Julies, periodistas como Delgado que compartían la línea económica del gobierno militar o sus propios embajadores, como Hidalgo Solá. Su posición variaba cuando se trataba de alguien ligado a las organizaciones guerrilleras.

Tres meses después del golpe militar, el 27 de junio de 1976, bendijo a las tropas del Ejército. “El país tiene una ideología tradicional y cuando alguien pretende imponer otro ideario diferente y extraño, la Nación reacciona como un organismo, con anticuerpos ante los gérmenes, generándose así la violencia. Los soldados cumplen con el deber prioritario de amar a Dios y a la Patria que está en peligro. No sólo puede hablarse de invasión de extranjeros, sino que hay también invasión de ideas que ponen en peligro los valores fundamentales. Esto provoca una situación de emergencia, y en esas circunstancias es aplicable el pensamiento de Santo Tomás Aquino, que enseña que en esos casos el amor a la Patria se equipara con el amor a Dios”, dijo Laghi ante una información castrense. Para encontrar otra adhesión eclesíástica tan acrítica respecto de la cruzada castrense hay que remontarse al 23 de setiembre de 1975. Ese día el provicario general, Victorio Bonamín, predicó ante el jefe de la conspiración en marcha, Roberto Viola, que “cuando hay derramamiento de sangre hay redención. Nuestra religión es terrible: se nutre de la sangre de Cristo y se sigue alimentando de nuestra sangre”. En referencia directa a los militares golpistas sostuvo que los veía “purificados en el Jordán de la sangre para poder ponerse al frente de todo el país”.

“Durante muchos años creí que debía estar agradecida a Pío Laghi, por haberme atendido en forma tan abierta y haber realizado todas esas gestiones, ante la Armada y con Viola. Pero ahora sé que no puedo perdonarle su silencio cómplice y esa frase acerca de que tal vez fueran culpables. Yo nunca acepté que me dijeran que Julián no estaba en nada. No importa en qué anduviera nadie, porque nadie se merecía desaparecer. ¿Culpables de qué?, me pregunto ahora. Esa frase implica que alguien decidió que otros sí eran culpables. Eso no lo puedo admitir”, dice María Ignacia Cercos de Delgado.

La Biblia

En noviembre de 1984, el nombre de Laghi fue incluido en una denominada “nómina de represores”, confeccionada por la Conadep. En el apasionado debate que siguió a su difusión se conoció el testimonio del electricista Juan Martín, un sobreviviente del campo de concentración que estuvo instalado en el ingenio Nueva Baviera de Tucumán. Dijo que él y otros presos fueron conducidos por el Mussolini de Tucumán, general Domingo Antonio Bussi, ante el Nuncio Laghi y otros sacerdotes: “Bussi invitó a Laghi a que me preguntara a mí —que llevaba cinco meses secuestrado, que había sido salvajemente torturado y que estaba a sólo 60

metros del lugar de reclusión— si era verdad eso de la picana eléctrica, eso de las violaciones a los derechos humanos que tanto le interesa a usted. Laghi dio unos pasos delante del grupo, como para separarse, aun cuando a la distancia que estábamos cuanto dijéramos sería perfectamente oído por Bussi. Me preguntó mi nombre y si mis padres tenían conocimiento de mi detención. Bussi acertó distancias acompañado del Jefe de Policía; mientras yo contestaba identificándome, al tiempo que le indicaba a Laghi el lapso que llevaba detenido y que mi familia desconocía dónde estaba arrestado. Por toda respuesta, monseñor Laghi me abrazó, me obsequió con un ejemplar de la Biblia, me exhortó a tener fe y esperanza, y de inmediato partimos ambos: él hacia el helicóptero, yo para reingresar al campo de concentración”. Los organismos de derechos humanos no compartieron la calificación de Laghi como represor. El propio testimonio del sobreviviente abogaba a su favor. Laghi llegó al campo de concentración para indagar sobre el respeto a los derechos humanos y hasta es posible que le haya salvado la vida al entregarle la Biblia. Pero también es cierto que nunca dio aviso a la familia del secuestrado, ni hizo público su conocimiento acerca de la existencia del campo de concentración. Durante el juicio de 1985, el periodista norteamericano Robert Cox, ex director del diario *Buenos Aires Herald*, dijo que Laghi no tenía dudas acerca de que habían sido las fuerzas del gobierno militar argentino las responsables del homicidio de los cinco sacerdotes palotinos en la Basílica de San Patricio, en 1976. Según Cox, Laghi estaba apesadumbrado por haber colocado la hostia en la boca del entonces Comandante del Cuerpo del Ejército, con sede en Buenos Aires, el ex general Carlos Suárez Mason. “Tuve deseo de estrellar mi puño en su rostro”, confesó Laghi a Cox en una habitación en penumbras de la Nunciatura. El periodista norteamericano añadió que Laghi era una persona preocupada por las violaciones a los derechos humanos y que había estrechado relaciones con funcionarios del gobierno militar a fines de obtener información.

El almirante Horacio Zaratiegui, ex secretario general de la Armada, confirmó en otra audiencia del juicio que Laghi mantenía una estrecha relación de amistad con Massera. “Casó a sus hijos, bautizó a sus nietos, desayunaban juntos y jugaban tenis a menudo”, dijo. Pero agregó que no creía que en esos encuentros amistosos el religioso hubiera planteado la cuestión de las personas desaparecidas. Laghi tampoco habló jamás en público acerca de la participación de las fuerzas de seguridad en el homicidio de los sacerdotes palotinos ni del grupo de los 40 por cuya suerte lo consultó Lambruschini. Del mismo modo, el Episcopado nunca fue explícito acerca del asesinato del obispo Enrique Angelelli, cometido por orden de la dictadura militar. ■

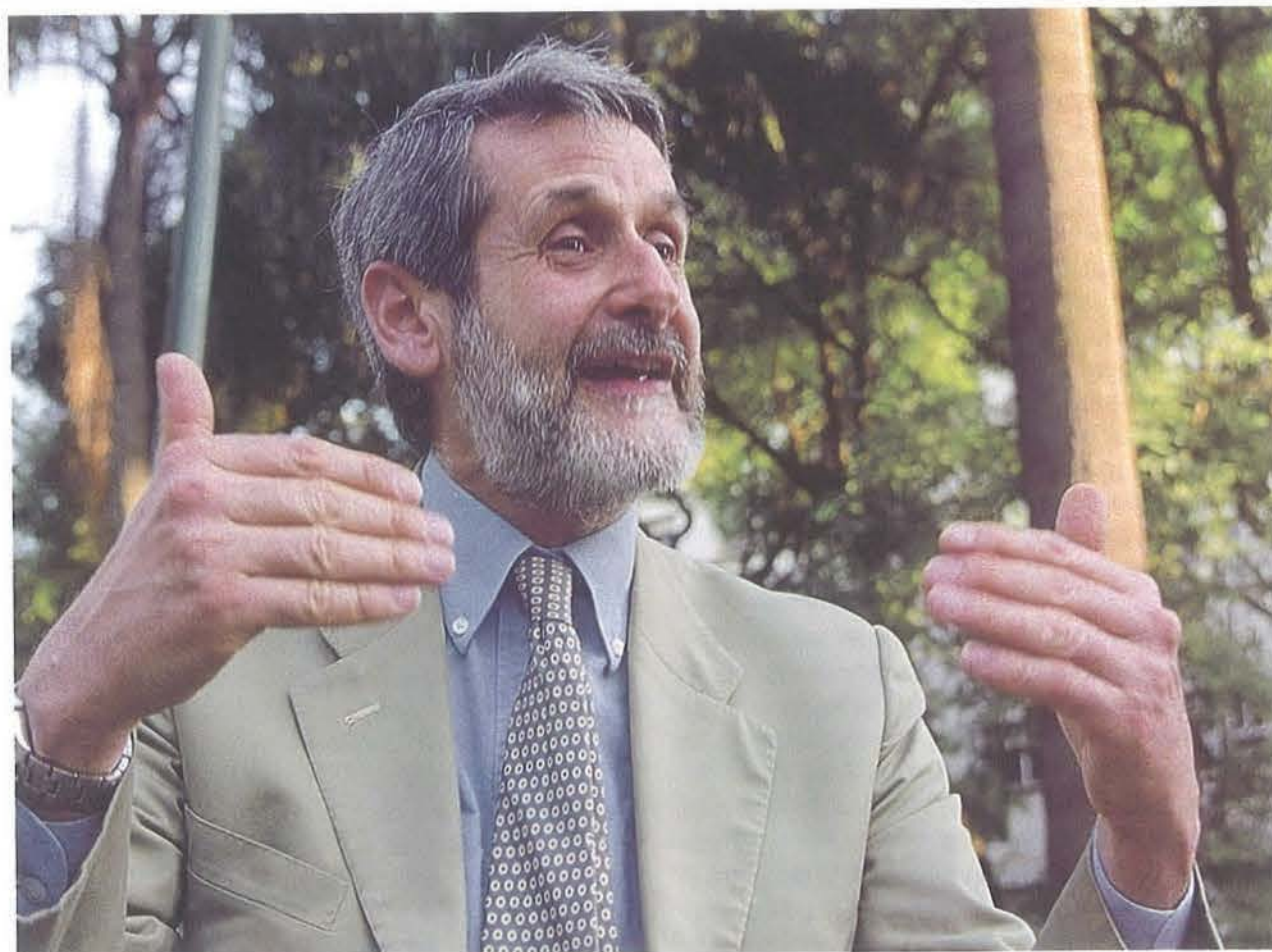
Estos artículos fueron publicados el 12 de marzo y el 9 de abril de 1995, respectivamente, en el diario *Página 12*.

Enrico Calamai, el cónsul italiano que durante la dictadura optó por el compromiso

Pasaporte a la vida

por Cristian Alarcón
fotos Pablo Piovano

Buscando ser fiel a su responsabilidad como diplomático, Enrico Calamai encontró el salvoconducto para sacar del país a mucha gente que se acercó hasta el Consulado Italiano pidiendo asistencia y asilo político. Su heroísmo surgió del caos, de la "suspensión de toda realidad" –según él mismo explica– y es por eso que no puede recordar ni cuántas personas fueron, ni sus nombres. Tampoco puede evitar, aún hoy, revivir el dolor y la angustia de ese tiempo.



De paso por Buenos Aires. El ex cónsul italiano tuvo un rol heroico en los primeros meses de la dictadura.

Cuando el joven cónsul Enrico Calamai partió hacia su primer destino –el Buenos Aires que le asignaron como horizonte–, sólo imaginaba las marquesinas de Corrientes anunciando obras de teatro, las salas de cine francés que repetían Hiroshima Mon Amour, la exposición de arte del Instituto Di Tella y las veladas más o menos paquetas en las que participaría como representante del Estado de Italia. No sospechaba que la vida entera le cambiaría al mismo ritmo que avanzaban la tortura, el asesinato y la desaparición de personas en Latinoamérica. Un siniestro florecimiento que tarde o temprano caería sobre la Argentina. Era octubre de 1972 y cierta alegría masiva caldeaba los ánimos, aunque él –aun en su inocencia de extranjero sin demasiados intereses en la lucha ideológica de la época– percibía las oscuridades en que terminaría sumergido: "Me de acuerdo que cuando ganó Cámpora fui a Plaza de Mayo por la noche, hubo una especie de gran fiesta, una explosión muy inquietante; porque la alegría era verdadera, pero al mismo tiempo era como un presagio de algo, como si esa alegría fuera una proyección del deseo del pueblo argentino, pero al mismo tiempo como si no fuera posible. La gente creía que había llegado la democracia y la libertad; pero era demasiado bonito para ser verdadero, la antecala de una gran desilusión".

Si hay una palabra que a Calamai en su perfecto español le resulta imprescindible para definir lo que se encontró en el Río de La Plata, es "caos". Es ese estado de cosas el que intenta reconstruir con los relatos que forman su libro *Faremo l'America*, en el que tras los cuatro años y medio que pasó en Buenos Aires derramó con una prosa inquietante sus historias, las de un viaje iniciático de un diplomático que se sienta, en un derruido y kafkiano edificio consular, a escuchar a esos hombres a quienes la muerte, a través de un Estado terrorista, persigue como el aliento de un animal sobre el cuello. Claro que eso fue lo que ocurrió ya en 1976, con los militares en el poder. Antes, cuando en 1972 ocupó su cargo de cónsul, eran millares de jubilados italianos pobres los que atestaban las oficinas de la calle Marcelo T. de Alvear, los abuelos o bisabuelos de esos mismos jóvenes que hoy forman filas tortuosas para dejar el país expulsados por la crisis económica. "En aquel entonces había una pensión para los sobrevivientes de una batalla de la Primera Guerra Mundial que fue decisiva. El gobierno pensó que se habían muerto todos con lo cual fue un desastre porque esta gente reclamó y era trágico porque había que encontrar la manera de engañarlos".

Aun así, la velocidad de las cosas no se detuvo en esos trámites de inmigrantes; los golpes de Estado se iban gatillando como una ráfaga lenta, pero planificada.

La embajada de los refugiados

El destino de Enrico Calamai empezó a jugarse en septiembre de 1973, cuando las bombas del ejército de Augusto Pino-

"Si hay una palabra que a Calamai en su perfecto español le resulta imprescindible para definir lo que se encontró en el Río de La Plata, es caos. Es ese estado de cosas el que intenta reconstruir con los relatos que forman su libro *Faremo l'America*, en el que tras los cuatro años y medio que pasó en Buenos Aires derramó con una prosa inquietante sus historias."

chet Ugarte volaron sobre la Moneda, en el centro de Santiago. Salvador Allende murió con el fusil de Fidel Castro en la mano y Chile ingresó en la etapa más violenta de su historia después del genocidio aborígen.

Casi enseguida el mundo supo que en el único país que había construido una vía democrática hacia el socialismo, las violaciones a los derechos humanos eran cotidianas y sus detalles eran pesadillas del subdesarrollo: los festivales por el Chile rojo se multiplicaron desde San Francisco hasta Roma. Las embajadas de Santiago no pudieron dejar afuera de sus recintos a los miles y miles de refugiados que cruzaban esa frontera interna huyendo de sus asesinos. Durante el primer año de dictadura la de Italia fue una de las más activas en su tarea de refugiar asilados; aunque desde el mismo no tuvo embajador. El diplomático de mayor rango era el cónsul. Al principio los perseguidos fueron saliendo del país; pero al año continuaba entrando gente, familias enteras y la violencia política aumentaba.

Después de la primera marcha contra la dictadura, las huestes de Pinochet enviaron un mensaje al cónsul italiano de Santiago: una madrugada de septiembre, a través de la cerca del edificio, arrojaron el cadáver de una mujer. Corría el toque de queda, desde la medianoche nadie podía caminar por las calles, sólo las cruzaban las "cucas", esas camionetas verdes que aunque eran de lata parecían blindadas: no había demasiadas alternativas para intuir un culpable. Aun así, el cónsul se presentó ante los carabineros y denunció que una mujer había sido asesinada y su cuerpo tirado sobre territorio italiano, justamente sobre los crisantemos del embajador. Al día siguiente el ministerio de Relaciones Exteriores lo declaró persona non grata. Tuvo que dejar el país de las tristes melodías de Violeta Parra y la embajada saturada de asilados que silbaban esas canciones, aguardando como una señal milagrosa el visto bueno de un visado y un pasaje a Roma.

Fue entonces cuando Calamai supo por teléfono que debía dejar Buenos Aires y trasladarse a Chile. Los siguientes tres meses el cónsul debutante, quien entonces tenía treinta años, aprendió qué significaba vivir bajo una dictadura militar latinoamericana.

La embajada italiana en Santiago era una enorme casa de principios de siglo que ocupaba toda una cuadra, la mitad

de una manzana, rodeada de jardines y con una valla que no era lo suficientemente alta como para despejar el pánico de los 450 refugiados con que se encontró Enrico al llegar. Al miedo y la estrechez del lugar, pensado para una familia burguesa y su servidumbre y no para una multitud desesperada, se lo combatía con un alto grado de organización. Habían armado diferentes comisiones integradas por representantes de todos los partidos desde el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) hasta el PC o el propio PS, y siempre en proporción con la cantidad de miembros del grupo escondidos en el edificio. Así, tenían un comité para la cocina, uno para la seguridad, uno para las actividades culturales y hasta uno para la educación de los cuarenta niños que esperaban allí el exilio. “Era todo muy dramático, pero funcionaba. Cada mañana me entrevistaba con el comité general y analizábamos la situación. Lo más grave era la violencia alrededor de la embajada”, recuerda Calamai. No olvidará jamás el raro calor de ese septiembre, las ventanas de su habitación abiertas, y los tiros que sonaron en el medio de la noche y dejaron sus marcas en la pared y en el ánimo de los refugiados. La tensión de aquellos días era la del sonido de los disparos amenazantes. La difícil convivencia en un lugar sin agua caliente ni calefacción, lleno de colchonetas tiradas en los pisos de los halls, del living, del salón de reuniones, a pesar del estoicismo militante estaba llena de imprevistos. Aquel hombre desquiciado al que todos conocían como El Pollo, era un ex guardaespaldas de un importante dirigente y a quien la policía secreta le había pegado de tal forma que las secuelas habían hecho de él un ser más violento que un custodio cualquiera. “De vez en cuando se le hinchaba algo aquí —señala Calamai—, en el cuello, y se ponía loco. Entonces saltaba, pegaba a la gente, y una vez intentó suicidarse consiguiendo de esa manera que lo odiaran más todavía porque eso obligaba a llevarlo fuera de la embajada porque allí adentro no teníamos médico”. Enrico ya había tenido que acompañar a una mujer en una ambulancia porque debía ser operada en el quirófano del hospital militar. Llevaba un salvoconducto del Ministerio de Relaciones Exteriores en la mano y juraba que era italiana, esperando que los médicos terminaran su tarea y le salvaran la vida antes de que la DINA y sus esbirros se la quitaran o la llevaran a una isla del sur a cumplir con el confinamiento al que sometían a los detenidos. Calamai pasó en total tres meses en Santiago, después volvió a la Argentina.

Un hombre golpea las puertas del Consulado

El 24 de marzo de 1976, Calamai vio el golpe militar en Buenos Aires. Esperaba un caos como el que se había desatado el 11 de septiembre tras la cordillera. Vio con sorpresa que no pasaba nada de eso.

“Era un día tranquilísimo... Bueno, el Consulado está en Plaza Libertad, Marcelo T de Alvear entre Libertad y 9 de

julio, y ahí no había ningún problema, simplemente todo parecía tranquilo, el tráfico normal, la vida era normal. La impresión era que no estaba ocurriendo nada porque no había tiros, bombardeo de la Casa Rosada; no había nada pero empezaban a venir a mi oficina a pedir ayuda, entonces pude comprender que era lo mismo que en Chile, aunque aquí no parecía”.

El primer perseguido llegó antes del golpe. Pero días después del 24 de marzo entraron a las oficinas cinco ciudadanos chilenos, uno de ellos de origen italiano. Habían estado viviendo en un lugar cedido por Naciones Unidas, pero los había ubicado la inteligencia de Augusto Pinochet en el exterior, que ya estaba integrada al Plan Cóndor. Calamai recuerda: “Estaban aterrados. Conseguimos que pudieran entrar en la embajada. Allí estuvieron tres meses encerrados en una habitación. Fueron los únicos que pudieron refugiarse en la embajada italiana, fue absolutamente excepcional”.

La ferocidad de los represores chilenos y lo que el escritor italiano Massimo Carlotto describe como una “desprolijidad que luego alertó al resto de las dictaduras del cono sur sobre la aplicación del método de las desapariciones”, produjo una reacción mundial contra la dictadura de Pinochet. Cuando las sombras del golpe se acercaban a la Argentina, cuando el golpe se produjo finalmente y cuando echó a rodar el plan de desaparición como un método mucho más aceitado que el chileno, la política de ocultamiento del gobierno de Rafael Videla dio excelentes resultados: no sólo el nudo de la desaparición física —como manera de negar los crímenes ante la “inexistencia de cuerpos del delito”—, sino la complicidad de las embajadas extranjeras en Buenos Aires, posibilitaron que durante la primera mitad del gobierno de la Junta Militar la comunidad internacional no escuchara las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país.

—¿Por qué fueron sólo esos cinco exiliados chilenos los que recibieron asilo en la Embajada de Italia?

—Ése fue el verdadero problema y lo comprendí inmediatamente: no era una situación regular. Por eso es que no trabajábamos por los canales diplomáticos e intentaba hacer llegar las noticias a Italia por otras vías.

—¿Diplomáticamente, cómo se transmitieron esas decisiones?

—Hubo una reunión pocos días antes del Golpe y yo estuve en la embajada hablando con funcionarios jóvenes para ver qué sabía cada uno. En esa ocasión, dijeron que los militares le habían comunicado al embajador que no debía aceptar refugiados en la Embajada, lo cual era un absurdo porque los asesinatos que se sucedían con los recambios de gobiernos dictatoriales ya eran parte de la tradición latinoamericana. El hecho de que los militares lo impidieran, no quería decir que la Embajada debía estar de acuerdo. Los militares explicaron: ‘Estos no son perseguidos políticos, son criminales comunes. Esta es una operación de policía; por

“Mi objetivo de contestar una entrevista es precisamente éste: que la gente comprenda la gravedad de la complicidad de los Estados. Que el gobierno local haya dado una versión según la cual los perseguidos políticos eran delincuentes que buscaba la policía, no quiere decir que las embajadas tuvieran que aceptarlo. Eso es un negociado.”

lo tanto, no tienen derecho al asilo’. Y los diplomáticos respondieron: ‘Sepan ustedes que no aceptaremos asilados en las embajadas’. En ese sentido, lo que yo veo es que hay un error: lo importante no es el hecho folclórico de una persona que ha hecho algo en medio de la situación que se vivía, lo verdaderamente relevante es la actitud de los Estados, que decidieron no hacer nada.

—¿Cómo juzga usted esa reacción del Estado italiano?

—El Estado italiano no fue peor que el Estado francés, o el Estado alemán, o el Estado inglés. La diferencia, el hecho que hace emblemático el caso, es que Italia tenía una colectividad italiana muy importante y a pesar de eso aceptó lo que impusieron los militares.

—¿Por qué se aplicó esa política?

—Cuando la opinión pública no sabe, el gobierno puede seguir con sus relaciones comerciales. Y esto no es solo dinero, es trabajo, es bienestar entre países, es consenso político... Entonces hay algo perverso en todo esto que ocurrió y que la gente no comprende. Mi objetivo de contestar una entrevista es precisamente éste: que la gente comprenda la gravedad de la complicidad de los Estados. Que el gobierno local haya dado una versión según la cual los perseguidos políticos eran delincuentes que buscaba la policía, no quiere decir que las embajadas tuvieran que aceptarlo. Eso es un negociado. Cada uno dice lo que quiere que la otra parte haga, pero no se lo puede imponer. O sea: si una embajada, o dos, o muchas, hubieran tenido refugiados, la opinión pública mundial hubiese sabido qué pasaba en la Argentina y eso hubiera cambiado el rumbo de las cosas. Lo grave fue que todas, podemos decir prácticamente todas, callaron. Lo hicieron de tal manera para que el mundo no se enterara de la masacre.

La lista de Calamai

Quienes al comienzo tocaron la puerta de Enrico Calamai fueron los italianos cuyos hijos habían sido secuestrados. “Empezaron a llegar familiares, pero todavía no sabían qué era lo que en realidad estaba pasando. Habían ido grupos de tareas a allanar sus casas y a llevarse al hijo o la hija y robárselo todo, y luego decirles: ‘Está en la comisaría de Quilmes’. Y allí en Quilmes, cuando preguntaban, les decían: ‘No, señora, aquí no hay nadie. Sus hijos se deben haber ido de vacaciones a Europa’. Y entonces ellos esperaban que estuvieran detenidos y que si no hacían demasiado escán-

dalo los liberarían. Cuando se dieron cuenta de que no era así, llegaron al Consulado porque querían hacer el habeas corpus y nadie se lo hacía. No conseguían a ningún abogado que lo presentara, porque tenían miedo. Nosotros mismos no conseguimos un abogado. Hasta que por fin llegó el Dr. Vibranti, quien aceptó hacerlo. Claro que tardaban en contestarlos y, finalmente, asumimos que ése no era el camino. Hubo un caso en que, por ejemplo, la familia venía corriendo a decir: ‘Está en la comisaría de tal lugar’. Entonces, yo iba como representante del Estado italiano a decirles: ‘Ustedes tienen el deber, en base al convenio, de permitir que el detenido italiano se comuniqué con su cónsul’. Ellos decían: ‘Aquí no hay nadie’. De todas maneras, por lo menos en un caso, la persona volvió a aparecer”.

La tarea central de Calamai fue organizar la salida de los condenados a muerte de la dictadura, algo que había comenzado antes de que el gobierno de Isabel Perón fuera derrocado. “Un hombre apareció un día en el consulado, tenía una barba de varios días, los ojos de persona que no ha dormido, desesperado, vivía en la provincia de Buenos Aires”. Sentado en su oficina, el hombre le contó que había salido de su trabajo para volver a su casa cuando le avisaron que un grupo lo esperaba en la parada del colectivo. Escapó con lo que llevaba puesto, estuvo tres días dando vueltas, escondido en casas de sus conocidos, donde la seguridad era precaria hasta que se quedó sin un centavo. “Me impresionó mucho precisamente porque era el primero, porque tenía mi edad y porque ésa podría haber sido mi historia; eso que le estaba ocurriendo a esta persona hubiera podido pasarme a mí”.

Si los tres meses de su experiencia en el Chile de Pinochet le habían significado una abrupta toma de conciencia del terror que podía imponer el aparato represivo, la visión de ese hombre pidiéndole ayuda a un diplomático de su generación, funcionario de un Estado que se negaba a brindar asilo, le hizo comprender que su tarea esta vez estaría marcada por la clandestinidad. Por el trabajo individual de alguien que usaría los mínimos medios que le quedaban para salvar las vidas de unos pocos.

Resolver ese caso puntual fue “bastante fácil”, recuerda hoy Calamai. Discutió con este hombre la posibilidad de que viajara a Italia esa misma tarde. Se suponía que no tendría problemas en el aeropuerto de Ezeiza porque entonces la Triple A todavía no tenía el control de los documentos que se presentaban para salir del país. Fue la primera vez también que Calamai acompañó a un asilado hasta el avión que lo llevaría a Roma. “Fui con él hasta que pasó migraciones, pensando que si lo detenían estaba delante del cónsul de Italia, con lo cual no podía desaparecer porque las autoridades argentinas se habrían hecho. Pero fue bien, y salió”. Esa escena se repetiría tantas veces que Calamai no recuerda a cuántos acompañó hacia el exilio político. “No fue algo masivo como en Chile, pero eran entre tres y ↵

cinco casi todos los días. Todos eran casos distintos. Debíamos analizar qué problemas de documentación había, si tenían la cédula de identidad, si había razones suficientes para pensar que lo detuvieran en Ezeiza. Por lo pronto, la cosa más inmediata era determinar si eran refugiados italianos, darles un pasaporte y conseguirles un billete de avión para que se fueran si ellos pensaban que no había peligro. Por lo general, sabían si en Ezeiza los estaban esperando o no. La primera cosa era ésa, encontrar la manera de que se fueran inmediatamente. Muchos viajaron vía Uruguay. Nosotros les dábamos un pasaporte, iban a Aeroparque con su cédula de identidad para ir a Montevideo y en Montevideo la Embajada les daba un billete. Pero eso empezó a volverse peligroso enseguida. Al poco tiempo, ellos mismos nos decían que era peligroso porque había militares argentinos en Uruguay”.

Haciendo memoria, Calamai rescata casos puntuales, como el de un hombre que llegó al Consulado a los pocos días del golpe con sus dos hijos. Habían secuestrado a su mujer y habían tirado su cadáver a un descampado. Lo perseguían y ya no había manera de que sobreviviera escondido en un rincón de la ciudad. Pero el Consulado en Buenos Aires no era la Embajada chilena, donde Calamai, ante la ausencia del embajador, era la garantía de que los militares no ingresarían al edificio. Este Consulado era una oficina sobre la que no regía la inmunidad diplomática y, por lo tanto, si el gobierno argentino quería entrar a buscar a alguien podía hacerlo. Esa noche, Calamai se los llevó a su casa. Al día siguiente hubo que organizar la huida. “Conseguimos que unos curas italianos se los llevaran a un convento cerca del puerto y empezamos a tramitar la red de documentos. Pero, como eran tres, la cosa se alargaba, no se resolvía y al superior del convento le entró miedo y nos dijo que teníamos que echarlos. Aunque yo no me acuerdo de cómo logramos sacarlo del país, me encontré con este hombre en Roma hace poco y él me dijo que fui yo quien los acompañó hasta la escalera del avión... No me acuerdo de esos momentos...”

El carpintero y el periodista

Así como cada caso era diferente al anterior y los problemas eran mayores, así Calamai también encontró a dos hombres en los que pudo confiar para violar el muro de la dictadura. Desde el comienzo contó con uno de sus hermanos, periodista de una revista del PC italiano. Si un refugiado entraba en el Consulado en Buenos Aires y la reacción era expulsarlo, Calamai hablaba con su hermano para que como periodista se comunicara con el Ministerio de Relaciones Exteriores en Roma. “La idea era decirles: ‘sabemos que Fulano está en el Consulado y que lo quieren echar, si eso sucede avisamos a la prensa y será un escándalo’. Daba resultado, sin discusiones respondían: ‘Bueno, ya está, no lo echen’. Como pronto tui-

mos clara la situación, especulaba con que en realidad la dictadura prefería que salieran en silencio a que estallara un escándalo internacional por interferir”.

El otro Calamai hacía los llamados de advertencia a Roma, pero pronto esto fue una trampa. Entonces apareció Benedetto, un aliado incondicional. Calamai le transmitía a él las informaciones que debían llegar a Italia y él, un hombre que había venido a la Argentina siendo ya un militante comunista, carpintero y de San Justo, las transmitía. “Era un hombre muy sencillo, carpintero, muy honrado, muy inteligente, que sin condiciones y arriesgándolo todo me ayudó. Entonces un poco lo hacía yo, un poco lo hacía él y otro tanto lo hizo un corresponsal italiano, Gian Giacomo Foà. Se creó una relación sin necesidad de decir grandes cosas, porque cada uno sabía que podía fiarse del otro y que si era necesario el otro le podía pedir ayuda. Gian Giacomo publicó varios artículos sobre los secuestros y las desapariciones. Yo lo que quería era crear una pequeña estructura para que, cuando yo me fuera, siguiera funcionando. Mi cargo vencía en octubre del 76. Aunque no querían, conseguí a través del partido comunista italiano que me dejaran seis meses más. Lo que pasó entonces es que a Gian Giacomo lo amenazaron de muerte frente a su casa, le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron: ‘Te vas en veinticuatro horas o te matamos’. Tuvo que irse y esta pequeñísima estructura empezó a flaquear; se acercaba el momento en que yo ya tenía que irme”.

Calamai especulaba con la necesidad de silencio de la dictadura, con lo inconveniente que hubiera sido para el gobierno irrumpir en las oficinas italianas o secuestrar a un ciudadano por el que otro Estado podría pedir explicaciones. Pero esos cálculos cada vez eran más improbables. Llegó el momento en que salir con un pasaporte italiano era, para los represores argentinos, sospechoso. Y también esperaban en Uruguay. El atajo cambió de rumbo: ahora debían hacerlos llegar a Río de Janeiro como si ése fuera el destino, pero guardando un pasaje en el bolsillo con el tramo Río - Roma.

¿Iban con un billete a Río pero no se bajaban del avión? Comprábamos dos billetes. Uno que enseñaban aquí que era el de Río. Y otro para que continuaran. La situación llegó a tal extremo que una vez fui a hablar con el gerente de Alitalia y le expliqué que se trataba de dos personas que llevaban tres meses en el Consulado encerrados en un cuarto y que se estaban volviendo locos. Había una habitación pequeña, debajo de mi oficina y allí estaban; pero era un

“La tarea central de Calamai fue organizar la salida de los condenados a muerte de la dictadura, algo que había comenzado aun antes de que el gobierno de Isabel Perón fuera derrocado.”



Con los ojos abiertos. Calamai eligió correr riesgos, buscando una lógica en medio del caos.

peligro, porque el consulado no es extraterritorial y la policía hubiera podido entrar a las patadas. Tuve que ir y decirle: 'Bueno, son dos italianos, son dos seres humanos, ya sé que esto no es regular, pero se puede hacer'. Fue en vano porque no aceptó. Entonces probé con el representante de Varig que sí lo entendió".

En esa pequeña habitación del Consulado de Marcelo T. De Alvear, en la que sólo había un sofá, Calamai le dio refugio a un número de hombres y mujeres que no sabe precisar. Nunca eran más de tres o cuatro por vez, simplemente porque no entraban. No estaba en aquella Embajada en Chile donde las balas se incrustaban en la pared de su cuarto, pero nada aseguraba que no entraran los militares sin avisar. Cada movimiento era una complicación. En las oficinas no podían cocinar, así que tenían que justificar o disimular la entrada de comida. Lo hacía el portero, como si se tratara del almuerzo de los funcionarios. Los empleados atendían al público con sonrisas de hierro sabiendo que allí atrás se escondían los perseguidos. El propio Calamai cree que el barrio ya sabía lo que pasaba y, sin embargo, no hubo quien los delatase. Cuando terminaba la jornada, apagaban la luz y en la oscuridad quedaban

encerrados los asilados esperando que una visa y un pasaje los rescataran y pusieran fin a la situación.

—Calamai, ¿usted no tenía miedo?

—Sí, bueno... mucho miedo. Pero siempre hubo por mi parte el cálculo de hasta dónde empujar, hasta qué límite llevar nuestras posibilidades.

—¿Y calculaba día a día?

—Día a día y caso a caso.

—Y eso es lo que quiso reflejar en su libro.

—En el libro, el cónsul se sienta, cuenta su historia y, en realidad, es el estilo que va cambiando. Empieza como muy anónimo y se va volviendo cada vez más lírico y hasta delirante. Delirante porque es un asomarse a la vida como quizás era en ese momento. En la humanidad, en la vida, ese tipo de situaciones existen, son situaciones en que lo real es demasiado. La tragedia, el escape de la tragedia, son un caos y en el caos es donde a veces se consiguen salidas y estrategias antes impensadas. La realidad que a algunos se aparece como muy ordenada, repetitiva y tranquila; en verdad es muy caótica y ese caos puede, de repente, salir a flote. Eso es un poco lo que yo he querido hacer. Es lo que he sentido. ■

“La terrible verdad emerge ante nosotros”

por Zygmunt Bauman

Ilustraciones Malou Cerutti

Definido alguna vez como “profeta del posmodernismo”, el polaco Zygmunt Bauman es uno de los sociólogos más destacados y polémicos de la actualidad. En este artículo denuncia la existencia de un pacto de silencio entre los gobiernos del planeta para defender la soberanía de sus decisiones, aun las que afectan el bienestar de los individuos. Es por eso, concluye, que muchos se niegan a apoyar la creación del tribunal internacional para crímenes cometidos en contra de los derechos humanos.

El gobierno turco niega hasta el día de hoy que la masacre de los armenios haya ocurrido. Pese al cambio radical del credo ideológico y los colores políticos, el gobierno ruso sigue silenciando la muerte por hambre de diez millones de campesinos ucranianos. Los sucesivos gobiernos chinos continúan negando que alrededor de veinte millones de compatriotas fueron asesinados durante el “gran salto hacia adelante” de los años 60...

Son estos los hechos que Ryszard Kapuscinski —infatigable investigador y fiscal de los males e inhumanidades del mundo— y yo recordamos, pero la lista puede extenderse. Y en el mundo en que vivimos parece improbable que llegue a cerrarse.

No escuchamos nada de la mayoría de los asesinatos en masa cometidos en nombre de la ley y el orden bajo la égida de los Estados. No queremos escuchar nada relacionado con ellos, y cuando estamos obligados a escuchar, nos negamos a oír. A menos que nos afecten directamente, o que afecten a las personas más cercanas o queridas. Después de todo, siempre ocurren muy lejos. No nos conciernen, demandaría demasiado esfuerzo comprender su lógica, y aun cuando hiciéramos el esfuerzo poco podríamos hacer para detener los crímenes y mucho menos para castigarlos. Quienes pueden detener las masacres y a sus perpetradores, las autoridades de los Estados poderosos que tienen a su disposición la fuerza —el más fuerte y persuasivo de los argumentos— apenas se dignan a veces a mover un dedo.

↳



En mi búsqueda: camino sola. Óleo sobre papel, Malou Cerutti.

“El primer efecto es la facilidad con la cual los dictadores de hoy y mañana pueden recurrir al terror como arma contra sus individuos. Saben que la probabilidad de pagar el precio de los actos es inversamente proporcional a su decisión y a la falta de escrúpulos.”

Es cierto, las lenguas se mueven, pero poco se hace finalmente. Nüremberg fue una excepción; no la aplicación de una regla ni tampoco un acto que estableciera una regla. Pero, incluso en Nüremberg, sólo una mínima parte de los crímenes del Estado se ventiló públicamente, y los juicios se detuvieron mucho antes de que los jueces pusieran el poder tiránico del Estado sobre los individuos —esa fuente última del asesinato administrado por el Estado— en el banquillo de los acusados.

En todos los otros casos de asesinatos iniciados y administrados por el Estado las reacciones fueron, por lo menos, frías. Más al servicio de eslogans nobles que a una voluntad genuina de comprometerse en la defensa de las víctimas y el castigo de los agresores, y afrontar los riesgos que eso supone.

Lenta pero inexorable, la terrible verdad emerge ante nosotros, los testigos: hay un pacto de silencio entre los gobiernos del planeta... Los gobiernos de todos los países se unen en la defensa de la soberanía de cada uno sobre sus individuos. Cualquier cosa que un gobierno le haga a sus sujetos constituye un "asunto interno" del país, y el resto de los gobiernos obran con la presunción de que defender con uñas y dientes el "principio de no-intervención" es algo en interés de todos (como si no hubiera ya suficiente evidencia para confirmar esta verdad, el gobierno de Estados Unidos, el único poder mundial genuino, se negó a apoyar con su firma el tribunal internacional para crímenes cometidos en contra de los derechos humanos. Una vez que se pone en funcionamiento un procedimiento de esa naturaleza, nadie puede asegurar contra quién se volverá... ¡Firmar el acuerdo habría sido como hipotecar el futuro!).

Empieza a sospecharse que existe en el globo una solidaridad de los que hacen las reglas de un país contra la resistencia solidaria de los que reciben las reglas cualquiera sea el país de que se trate.

Cuando los efectos de esa solidaridad de gobernantes soberanos son observados por televisión más allá de las oficinas gubernamentales por billones de personas, la lección que penetra en los hogares es absolutamente opuesta a un llamado a la solidaridad de los seres humanos. Es una lección que aterriza por su inhumanidad, pero cuando se suscita un problema real, nosotros, igual que todos en este

mundo rebanado en parcelas privadas, estamos solos y no podemos esperar rescate ni ayuda de ningún vecino sino de nosotros mismos.

Y hay también otra lección, no menos siniestra: los grandes criminales tienen mayores posibilidades de salir impunes de sus crímenes que los pequeños delincuentes. Cuanto más abajo se esté en la jerarquía del poder, cuantas más personas haya arriba dando órdenes y dirigiendo las acciones criminales, tanto mayores serán las probabilidades de ser culpado por la atrocidad cometida. Cuantas más vidas humanas se lleven a la muerte, más intocable se será. No conviene entonces hacer las cosas a medias; se debe llegar hasta el fondo, asegurarse de no dejar ningún blanco sin exterminar que pueda servir como inculpación. Y al hacerlo se contará siempre con la lealtad de los colaboradores de menor rango. Ellos son cómplices del crimen. Pero, al mismo tiempo, son también los más expuestos entre los cómplices, aquellos que no pueden esperar piedad alguna, aquellos que (si usted pierde el poder de protegerlos y la autoridad para negar —oficialmente— que el crimen fue un crimen) se pudrirán en la cárcel mientras usted disfruta de un retiro o pensión y vende sus memorias al mejor postor. Puede confiarle a los perpetradores de los crímenes que usted ha ordenado la custodia del cementerio de sus (¡las suyas!) víctimas.

Cualquiera sean las razones, eximir a los soberanos del Estado de la responsabilidad por los crímenes que cometieron tiene dos efectos. Ambos devastan los patrones éticos de nuestra vida y, más aún, socavan las leyes de moralidad, compasión y solidaridad humana en nuestras ocupaciones cotidianas.

El primer efecto es la facilidad con la cual los dictadores de hoy y mañana pueden recurrir al terror como arma contra sus individuos. Saben que la probabilidad de pagar el precio de los actos es inversamente proporcional a su decisión y falta de escrúpulos. Es improbable que se pueda eludir el asesinato de poca gente, pero a medida que crece la pila de cuerpos se desvanece la posibilidad de ser castigado. Es el débil quien paga el crimen del fuerte. El gobierno es un refugio confiable y una garantía de impunidad. El poder protege, y cuanto mayor sea el poder mayor será también la protección. En otras palabras, este efecto es una invitación al asesinato.

Otro efecto es el aval de nuestra —es decir, de nosotros, los testigos— indiferencia e inacción. La incomodidad y apuro que sentimos cuando contemplamos el sufrimiento humano sin hacer nada para ayudar al que sufre se designa en psicología con el nombre de "disonancia cognitiva". Según afirman los psicólogos, es intolerablemente doloroso ser consciente de dos fragmentos de conocimiento tan flagrantemente contradictorios; por eso las víctimas de la disonancia cognitiva despliegan y extreman su inventiva



Mar sin fin. Óleo sobre cartón-lienzo. Malou Cerutti.

para eludir la contradicción mediante recursos no pocas veces ingeniosos. En este caso, para apaciguar su conciencia culpable pueden argüir: sí, no hice nada, pero nada podía hacerse y en cualquier caso los criminales saldrán impunes. Mis protestas seguirán siendo ridículamente ineficaces en función del resultado final, y entonces puedo también tomar un atajo y ahorrar un tiempo y energía que estaría desperdiciado de todos modos. O: sí, esa "gente común" sufre, ¿pero no es el sufrimiento humano un aspecto constante e inextirpable del mundo en que vivimos? ¿Quién soy yo para pretender mejorar la creación divina y corregir el mundo? Siempre habrá fuertes y débiles, luchas por el poder, y víctimas. Aunque se trata de algo lamentable, mi moral no tiene nada que ver con eso. No solamente no me siento responsable de ese crimen, sino que además la responsabilidad que pueda asumir por el mismo no modificará la forma de los asuntos humanos. O bien: esa gente provoca sufrimiento a otros, yo no hago nada y entonces no se hace justicia, ¿pero existe la justicia? La justicia exige que todo criminal sea medido con la misma vara, pero claramente no es lo que ocurre. Si —como Tzvetan Todorov ha observado recientemente— no existe justicia sin igualdad de normas: puedo decirme a mí mismo que me estoy reprochando en vano y, por cierto, injustamente...

Es por este motivo que los crímenes del Estado deben

ser castigados, y cuanto más alta es la autoridad de quienes estaban al frente del Estado, más severo debería ser el castigo. El objetivo de tal castigo es la defensa (o, mejor dicho, el rescate de la devastación) de las normas éticas de nuestra comunidad y de las normas morales de cada uno de nosotros, los seres humanos que integramos esa comunidad.

Es necesario insistir en que el castigo no tiene que ver con la venganza. La venganza no cura nunca las heridas de los crímenes. Al contrario, posee una lógica propia y atroz que pone en funcionamiento lo que el gran antropólogo Gregory Bateson llamó "cadena cismogénica", una suerte de competencia por obrar mal. La venganza posee la siniestra tendencia a transformar a las víctimas de ayer en los victimarios de hoy, mientras despeja el terreno para las víctimas de mañana. El castigo bajo la forma de la venganza es la mejor victoria póstuma que los criminales pueden soñar.

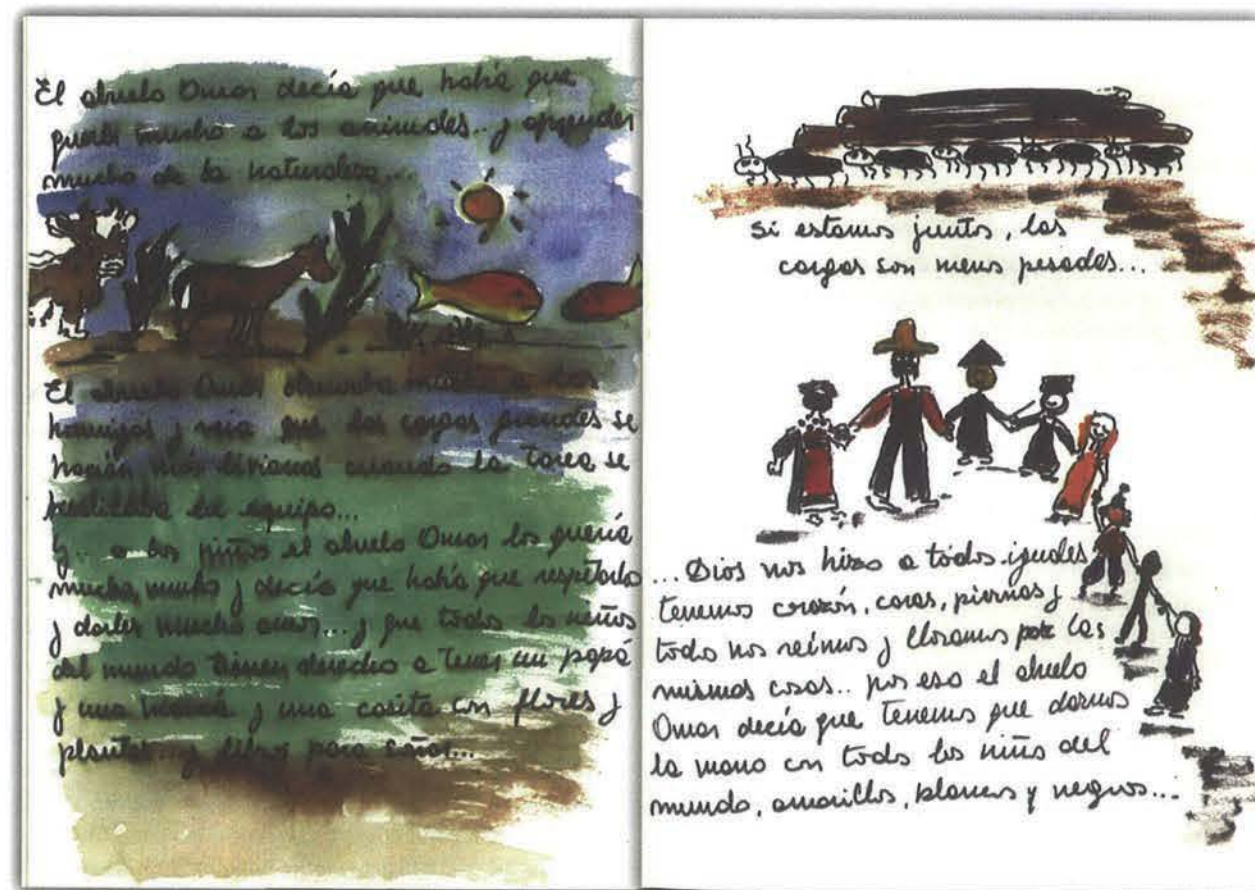
El objetivo del castigo es cortar el círculo vicioso de la violencia y defender el principio de la sacralidad de la vida humana. Únicamente el castigo a los responsables de un Estado criminal servirá a la causa moral (es decir, humana y humanitaria) si el resto de nosotros, víctimas y testigos, emergemos moralmente ennoblecidos, y el mundo que compartimos, éticamente armado. ■

La historia de María Beatriz Cerutti

Colores que iluminan la noche

por Alejandra Correa

La dictadura militar secuestró a su marido y a su padre, pero además se quedó con todas las propiedades de la familia. Esta es la historia de una mujer que debió reconstruir su vida y eligió hacerlo con palabras y colores.



El abuelo Omar. El cuento que escribió e ilustró Malou en memoria de su marido y su padre.



malou cerutti

"Pero una noche, muy oscura, sin luna, entraron unos hombres con botas enormes, rompieron las ventanas, pisaron las flores... y se llevaron al abuelo Omar... muy lejos... Y todo fue muy triste entonces..." Así relata María Beatriz Malou— Cerutti desde El libro del abuelo Omar, la desaparición de Victorio Cerutti, su padre. Lo hace retomando el hilo de la frescura infantil, porque se trata de un cuento para niños que ella misma escribió e ilustró —aún inédito en nuestro país— y con el que ganó un concurso nacional de literatura en España.

El cuento se basa en una historia que comienza el 12 de enero de 1977, a las tres de la mañana, cuando una veintena de hombres encapuchados entraron a su domicilio en la localidad mendocina de Chacras de Coria y, en medio de una completa violencia secuestraron a su marido, Omar Masera Pincolini. A la misma hora, otro grupo de hombres ingresó en la vivienda de su padre, Victorio Cerutti, a quinientos metros de su casa, y también se lo llevaron.

Desde entonces, ambos se encuentran desaparecidos. Según supo mucho tiempo después, ambos hombres fueron asesinados en el centro de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La historia completa de Malou es una auténtica pesadilla. Después de los secuestros, los militares crearon un denso entramado de falsedades para quedarse con todos los bienes de la familia (tierras, viviendas, empresas) que pasa-

ron a manos del ex almirante Emilio Eduardo Massera, o mejor dicho, a manos de sus testaferros: su hijo Eduardo, su hermano Carlos y Pedro Añón.

En 1978, junto a sus tres hijos pequeños, Malou debió abandonar el país con rumbo a México "en la más completa orfandad e indigencia", como ella misma señala.

Allí se desempeñó como directora comercial de la Academia Nacional de Medicina. Entre 1986 y 1990 realizó para Naciones Unidas un programa de intercambio tecnológico para países en vías de desarrollo. Como artista plástica indagó en el arte mexicano y africano y expuso sus trabajos en Madrid y México.

Próximamente, las obras se verán en Buenos Aires en una exposición que realizará en el Centro Cultural Recoleta bajo el título "La mirada en la memoria (en recuerdo de mi esposo Omar Masera Pincolini y 30.000 desaparecidos)". En estas obras Malou pinta con los dedos, sin ayuda de pinceles; técnica que aprendió en Kenya (África), en un viaje que realizó en 1991. Dos de esos cuadros ilustran la nota de las páginas anteriores.

En setiembre del 2000, Malou declaró ante el juez Baltazar Garzón, por la causa que lleva la Audiencia de Madrid contra los militares argentinos que participaron en la represión. Ella dice: "A pesar de todo sigo luchando por la vida y la memoria, para que todos los genocidas paguen sus horrores". Y están sus obras para afirmarlo. ■

Los Derechos Humanos y la construcción democrática

La política de la memoria

por Elizabeth Jelin

ilustraciones Claudia Contreras

Hasta mediados de los ochenta, el movimiento de derechos humanos se centró en la difusión de las violaciones masivas y sistemáticas durante la dictadura militar y en la urgencia por esclarecer lo sucedido. Denuncia, verdad y justicia fueron sus principales banderas. A partir de la transición, la memoria y la proyección futura de los derechos humanos se incorporaron a la agenda de demandas por justicia. Elizabeth Jelin se detiene en la relación entre el movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina. Analiza cómo estas instituciones presionan sobre el sistema político y al mismo tiempo apuntan a transformar la naturaleza de las relaciones en la sociedad civil.



En el contexto de la violencia política reinante en la Argentina a mediados de los años 70, que culminó con el golpe de Estado de 1976 y la violación masiva y sistemática de derechos humanos, se fue conformando un movimiento social de denuncia y reclamo, que fue ocupando un lugar significativo en el espacio público en la Argentina. El lugar político y la función social del movimiento de derechos humanos fue transformándose a lo largo de la dictadura y en la transición.

Los organismos de Derechos Humanos en la dictadura

Las violaciones a los derechos humanos y las organizaciones solidarias dedicadas a defender y proteger a las víctimas no son un fenómeno nuevo en la Argentina, ya que hubo organizaciones de denuncia de persecuciones políticas y discriminación racial y étnica. Entre las más importantes, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre se había fundado en 1937, y el Servicio de Paz y Justicia existente desde hacía décadas, se reorganizó en 1974.

A partir de la violencia política de mediados de los setenta y la instauración del régimen dictatorial en 1976, la denuncia y demanda por violaciones de derechos humanos se expanden y universalizan, centrándose en la demanda por la vida misma. Abarca a todo tipo de víctimas, sin hacer diferencias en el tipo o grado de militancia política o en su identidad étnica. Los organismos preexistentes cambian su blanco de acción; nuevas organizaciones son creadas.

A fines de 1975, año en el cual la violencia y la inestabilidad política, los secuestros y los asesinatos, se habían intensificado, se crea la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). La Asamblea nucleaba fundamentalmente a políticos e intelectuales que participaron en la denuncia y defensa de derechos, algunos de ellos víctimas directas o familiares. Su composición fue planificadamente heterogénea: "...en ella se combinaron hombres consustanciados en una misma idea, aunque con diferencias ideológicas, políticas y religiosas. Podemos decir con gran orgullo que en la misma mesa se sentaban católicos, protestantes y judíos; en el campo político participaba el socialismo a través de Alicia Moreau de Justo, el radicalismo con Raúl Alfonsín y el Partido Intransigente con Oscar Alende. Tuvimos gente muy valiosa que quizás, en ese entonces, no soñaba con el Premio Nobel de la Paz, como Adolfo Pérez Esquivel, o Raúl Aragón, Eugenio Manzanelli, Eduardo Pimentel, el pastor Pablo Etchegoyen y podría nombrar un montón más. Pero ojo que no alcanzábamos a un centenar de personas." (Adolfo Bravo en Nueva Presencia, 28/9/84).

Salvo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fundado en 1980, los organismos defensores de los derechos humanos de "no afectados" habían sido creados antes del golpe de Estado de 1976, con demandas que se configuraban y articulaban alrededor de la violencia política y de las violaciones de derechos humanos, antes de que la desaparición

masiva de personas se convirtiera en la modalidad dominante de la represión en el período inicial de la dictadura.

En ese mismo período, la preocupación por las violaciones también comenzó a hacerse sentir en grupos vinculados con las iglesias: "...los representantes de nuestras iglesias relacionadas con el Consejo Mundial de Iglesias —en un diálogo que tuvimos con las máximas autoridades de la Iglesia Católica— les propusimos la creación de una Vicaría de la Solidaridad al estilo de la Iglesia chilena..., pero se nos informó que la Iglesia argentina no estaba dispuesta a esa misma experiencia y que todo el trabajo con derechos humanos estaría encomendado a Caritas... Lo cual para nosotros significaba dejar ese trabajo en punto muerto. Y eso fue lo que originó precisamente la presencia de nuestro Movimiento Ecuuménico por los Derechos Humanos..." (Federico Pagura en Revista Humor, enero 1984).

Luego, ante la intensidad de la represión y desde el interior del horror, emergen los organismos de los "afectados". Estas organizaciones fueron surgiendo a partir del encuentro cotidiano de los directamente afectados y sus familias: las Madres de Plaza de Mayo, luego las Abuelas, los Familiares de desaparecidos y presos por razones políticas.

En sus primeras actividades, algunos dirigentes circularon indistintamente por los diversos organismos, perteneciendo y colaborando con varios al mismo tiempo. La solidaridad entre organismos era alta, ayudándose y conteniéndose mutuamente. Sin embargo, a lo largo de todo el período de la dictadura (hasta la transición en 1983), coexistieron dentro del movimiento varias lógicas y estrategias, a veces pacíficamente, a menudo en conflicto y desacuerdo. El movimiento nació y fue siempre heterogéneo, conformado por dos tipos de organismos: a) los de "afectados" directamente por la represión (Madres, Abuelas, Familiares, después Ex Detenidos-Desaparecidos y en los noventa Hijos) y b) los de "no afectados", aunque algunos de sus dirigentes más prominentes fueron también víctimas directas o familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos (CELS, APDH, Liga, SERPAJ, MEDH y MJDH).

Otra fuente de heterogeneidad era política: dada la vinculación de la Liga con la política del Partido Comunista (que, a diferencia de Chile, había apoyado al régimen militar), hubo una tensión y un conflicto casi permanente entre los organismos que proponían una oposición frontal al régimen y los que pedían moderación y cautela.¹

Dentro de esta heterogeneidad de participantes y organismos, los ejes fundamentales de la acción del movimiento durante la dictadura fueron dos: por un lado, la difusión y denuncia pública de las violaciones, incluyendo la acción en el plano internacional para conseguir solidaridad y apoyo en la lucha contra el régimen dictatorial; por el otro, la solidaridad y el apoyo a las víctimas y sus familiares. Esta diferenciación de las organizaciones y de las motivaciones para la actuación de los primeros militantes será importante para

“Las diferencias entre organismos se manifestaban en la elección de la estrategia a seguir: ¿cuánta prudencia en la denuncia y la difusión?, ¿qué demandar o reclamar?, ¿con quiénes hablar?, ¿qué tipo de alianzas y solidaridades internacionales buscar?”

comprender los debates, las rupturas y los conflictos en el momento de la transición, en 1983, así como sus alineamientos y estrategias en el período posterior.

A primera vista, el grupo de organismos de “afectados” parece más homogéneo: sus integrantes son todos familiares de víctimas; el motivo central por el cual se movilizaron inicialmente fue la recuperación de un familiar desaparecido o detenido. El sentido de sus reivindicaciones iniciales se orientaba por estos rasgos. Sin embargo, también había razones y raíces para la divergencia y la heterogeneidad, que explican la existencia de diferentes organizaciones, así como la dinámica de la relación entre ellas. En primer lugar, había diferencias de orientaciones políticas (desde aquellos que se autodefinían como “apolíticos”, hasta los ligados al Partido Comunista y a otras agrupaciones de izquierda). En segundo lugar, diferencias en las tareas específicas asumidas y en las demandas que se planteaban (especialmente notorias en el caso de Abuelas, organismo que se dedicó a ubicar y recuperar hijos de desaparecidos). Por último, diferencias de personalidad y estilo de liderazgo (dentro de Madres, por ejemplo).

Dentro de sus orígenes, el grupo de organismos de solidaridad de “no afectados” combinó en su interior la presencia de miembros motivados por su cercanía a víctimas (sean directamente afectados o familiares), algunos políticos con clara identificación partidaria (generalmente, no de las cúpulas de los partidos sino de líneas internas opositoras o participando a título personal), religiosos de diferentes iglesias (por lo general, marginales a las jerarquías eclesiásticas), profesionales e intelectuales independientes. Su actividad pública fue relativamente menor al comienzo, víctima del impacto de la represión a través de la “política del silencio” del régimen militar.²

Las diferencias entre organismos se manifestaban en la elección de la estrategia a seguir: ¿cuánta prudencia en la denuncia y la difusión?, ¿qué demandar o reclamar?, ¿con quiénes hablar?, ¿qué tipo de alianzas y solidaridades internacionales buscar?

Algunos organismos decidieron seguir una estrategia “legalista”, con una lógica anclada en la formalidad de la ley (APDH, CELS después). En el décimo aniversario de la fundación de la APDH, es ilustrativo el testimonio de uno de sus líderes: “Todo nuestro accionar se desarrolló en la más rigurosa legalidad, sin jamás pisar el palito de las acciones clandestinas... Y esto fue posible gracias a un preciso marco de

coincidencias mínimas: los treinta artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin otras exigencias religiosas, políticas, ideológicas o de otra índole... Si a todo lo dicho añadimos la constante búsqueda del consenso (no la derrota o la expulsión del otro) está completo el estilo que hizo de la APDH un referente ético en la Argentina de hoy”. (Enzo Giustozzi, “¿Qué es la Asamblea?”, *Derechos Humanos*, revista de la APDH, febrero de 1987.)

El estilo de la APDH se manifiesta con claridad en el tono de sus prestaciones y demandas. Por ejemplo, en agosto de 1977, su carta al Presidente de la Nación, General Videla, se iniciaba así: “La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y los ciudadanos que en forma individual e independiente de aquella suscriben esta presentación, se dirigen a V.E. en ejercicio del derecho de petición que la Constitución y las leyes establecen, y con motivo de la situación de personas desaparecidas respecto de las cuales no han dado resultado los recursos de hábeas corpus interpuestos en su favor ante los Tribunales de distinto fuero y jurisdicción...” (documento reproducido en *Leis*, 1989, p. 80 y ss.).

Otras organizaciones y líderes siguieron las estrategias desarrolladas en los partidos políticos a los cuales estaban vinculados. Este es especialmente el caso de las organizaciones ligadas al Partido Comunista, que estaban constreñidas por la posición oficial de la Unión Soviética en relación con el gobierno argentino. Al respecto, hubo debates significativos dentro de la APDH, y entre la Liga y otras organizaciones, por la actitud a tomar frente a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1979 (Mignone, 1991, p. 111). Como señala Fernández Meijide, “esa fue una pulseada... El hecho de que hubiera padres de desaparecidos producía en un determinado sector un empuje hacia adelante” (Fernández Meijide, entrevista CEDES).

Estas posiciones estaban más acordes con la orientación de los organismos de afectados, donde el miedo y las consideraciones estratégicas jugaban un papel mucho menor, volcados más al



Elizabeth Jelin

Es profesora de posgrado en la Facultad de Derecho (UBA), investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), directora del programa de investigación comparativa y formación de investigadores jóvenes sobre “Memoria colectiva y represión”, bajo el auspicio del Social Science Research Council y miembro del Comité Científico Independiente a cargo del Informe Mundial de Cultura de la UNESCO.

un rol expresivo, a la denuncia insistente frente a todo tipo de actores, a publicitar y hacer visibles las violaciones, a “maximizar el grito”, a menudo corriendo riesgos personales considerables.

A lo largo de los años de la dictadura, estas diferencias dan cuenta de los alineamientos y de las disputas dentro y entre organismos, aún dentro de la causa común que los convocaba. Dentro de esa diversidad, la esperanza de recuperar a las personas detenidas-desaparecidas se mantuvo como prioridad de la acción. Al comienzo, esta esperanza expresaba la urgencia de verdad, de saber qué había ocurrido, y el deseo de reaparición de la víctima (o de su cuerpo). “Vivos o muertos” es una de las consignas que agitan en los primeros años las Madres de Plaza de Mayo. Es decir, sencillamente “Aparición” y no todavía “Aparición con vida”, consigna que surge por primera vez en 1980, cuando el grupo llevaba ya más de tres años de actividad. Todas las acciones se llevaban adelante procurando favorecer, o al menos no obstaculizar, el alcance de esta meta.

En este marco, los organismos se diferencian en términos de sus estrategias: algunos están más dispuestos a la confrontación; otros tienen más cuidado y se autolimitan en sus expresiones. En particular, hubo divergencias y conflictos por el uso de determinadas palabras y por la elección de consignas. La caracterización del “detenido-desaparecido”, las consignas “Aparición con vida” y “Castigo a los culpables” (que analizaremos más abajo) fueron objetos de debate y lucha. En relación con la expresión “detenido-desaparecido”, según relata Mignone, la creación del CELS estuvo ligada en parte a una disputa acerca de la adopción pública de la tesis de la detención-desaparición como política oficial de la dictadura (Mignone, 1991). En efecto, cuando la APDH estaba confeccionando la nómina de desapariciones (que iría a constituirse en documentación clave para la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en setiembre de 1979), la opción de utilizar la denominación “detenido-desaparecido” o “aprehendido” fue objeto de arduo debate, ya que para algunos la primera expresión resultaba demasiado comprometedora. Al sentir que la estrategia de la APDH limitaba su rango de acción (inclusive en cuanto a la posibilidad de patrocinar denuncias individuales y no solamente colectivas), algunos militantes optaron por crear el CELS. El estar dirigido por personas “con alguna experiencia política y que a la vez fueron afectados por la represión, [le permitió tener] un rol unitario y coordinador dentro del movimiento de derechos humanos” (Conte, en Humor, N° 109, julio 1983).

La contención: víctimas y afectados

Uno de los espacios de actuación de los organismos durante los años de mayor represión fue un espacio íntimo y cotidiano. Poco se ha escrito sobre el papel del movimiento en la contención y apoyo a afectados directos de la repre-

sión, las víctimas, sus familiares, sus entornos. Como es bien sabido, la dictadura argentina basó su acción en el terrorismo de Estado que, como señala un documento del CELS, incluye “el uso indiscriminado de la tortura, el ocultamiento de la información, la creación de un clima de miedo, la marginación del poder judicial, la incertidumbre de las familias y la confusión deliberada de la opinión pública”.

En estas condiciones, ser testigo, víctima o afectado de un operativo crea confusión y parálisis: ¿qué hacer?, ¿dónde ir a denunciar o a pedir ayuda? Muchos familiares callaron, algunos por muchos años, quizá para siempre. Otros tomaron la determinación inmediata de actuar abiertamente.³ Por canales informales, era posible averiguar cómo presentar un hábeas corpus, o saber en qué lugares se recibían denuncias: la Embajada de los Estados Unidos, los organismos de derechos humanos (para acercarse, había que vencer la barrera del terror y el miedo), alguna que otra iglesia.⁴

La problemática afectiva, la contención del dolor y la desesperación, estaban incorporadas a las tareas de orientación y asesoramiento a los familiares. Cuando las violaciones afectaban a personas con una práctica anterior en el espacio público y con conexiones políticas (esto ocurría más a menudo en sectores medios), se podían activar contactos y redes para pedir apoyo o ayuda. Cuando las gestiones con “el conocido” no resolvían nada, se volvía a caer en la desorientación y la desesperación.⁵ Estaban los organismos de derechos humanos, pero para acercarse había que vencer el miedo. La propia formación de algunos organismos (especialmente los de afectados) respondió a la necesidad de encontrar ámbitos de contención mutua de familiares y víctimas, desorientados y confundidos frente a los acontecimientos, sin saber cómo actuar. Lo que parece claro es que la actitud tomada por los familiares en el momento de la violación es determinante de la conducta posterior. “El afectado que no se quedó militando en la época de la dictadura, nunca más” (Fernández Meijide, entrevista CEDES). Las diferencias entre los organismos eran notorias, no sólo en los servicios que podían ofrecer sino también en la manera de tratar a los afectados que se acercaban. Que alguien se sintiera más contenido en uno que en otro dependía, obviamente, de las experiencias anteriores de los afectados. En contra de lo que el sentido común podría hacer pensar, en momentos de incertidumbre, imprevisibilidad y caos, alguna gente se siente más contenida en lugares donde la coti-

“Vivos o muertos, es una de las consignas que agitan en los primeros años las Madres de Plaza de Mayo. Es decir, sencillamente Aparición, y no todavía Aparición con vida, consigna que surge por primera vez en 1980, cuando el grupo llevaba ya más de tres años de actividad. “



Cita envenenada. Fotografía, Claudia Contreras, 2000.

deanidad está marcada por algún grado de orden (inclusive burocrático, llenando formularios con datos) que en ámbitos donde se comparte principalmente la emoción y el llanto. La “necesidad de orden”, para usar una expresión de Lechner en otro contexto (Lechner, 1986), no es uniforme sino que varía según las circunstancias y condiciones sociales de las personas.

Los organismos de derechos humanos basaban su acción en la acumulación de información sobre casos individuales, con una fuerte presencia y participación de los familiares de las víctimas. Su espacio de acción era público —la Plaza de Mayo, los centros de poder nacionales e internacionales.

Otras reacciones a las violaciones ocurrían en las organizaciones locales, en los espacios barriales y en la vida comunitaria de los lugares donde habían ocurrido las violaciones. Las comunidades barriales y las redes sociales (sindicales, políticas, religiosas) también funcionaron como ámbitos de contención, con modalidades diferentes en la expresión de la solidaridad y la denuncia: manifestaciones y protestas barriales o de fábricas, petitorios con centenares de firmas, misas, marchas y demostraciones callejeras, que se dieron generalmente en ámbitos donde existía una actividad grupal u organización anterior, cualquiera haya sido su objetivo. Muchas veces, había poco contacto y comunicación entre estos espacios locales y los organismos (Jelin, 1995)

Este tipo de protestas más informales y a menudo localizadas en barrios populares ha quedado en el silencio o en el recuerdo de aquellos que las vivieron, sin haber entrado a ser parte de la “historia oficial” de la resistencia a la dictadura, centrada en la labor de los organismos de derechos humanos. La tarea de incorporar estas formas de acción en el registro de la resistencia, así como la labor más académica de indagar los encuentros y desencuentros en la relación entre estas manifestaciones y los organismos de derechos humanos, que obviamente seguían lógicas diferentes, queda todavía por hacer.

La denuncia: aparición con vida

La denuncia pública y pertinaz de las violaciones era la otra cara de la labor del movimiento de derechos humanos. Era aquí donde se construía el sentido de la lucha, en medio de —valga el juego de palabras— una lucha por el sentido. ¿Qué pedir? ¿Qué reclamar? ¿Cómo presentar lo que se sabía? Ninguna consigna iguala a la de “Aparición con vida” en su carga emotiva, en su significado político, en su valor estratégico.

1980 fue un año lleno de acontecimientos en la historia del movimiento de derechos humanos. A principio de año, el régimen militar inicia el “diálogo político” con las dirigencias partidarias, con la finalidad de lograr el aval civil a



Autorretrato indeleble. Fotografía, díptico, Claudia Contreras, 2000.

lo actuado por las fuerzas armadas en la represión (Acuña y Smulovitz, 1995; González Bombal, 1990). Comenzados los contactos con los partidos políticos, Ricardo Balbín, líder del Partido Radical, realiza en abril declaraciones que tendrán importantes consecuencias políticas: "Creo que no hay desaparecidos, creo que están todos muertos... Aunque no he visto el certificado de defunción de ninguno... No tiene remedio. Fue así. Alguna vez se escribirá el capítulo de las responsabilidades... No hay desaparecidos sino muertos..." (Clarín, 24/4/80).

Estas declaraciones, realizadas a los medios de prensa en España, coincidieron con la publicación internacional del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las violaciones a los derechos humanos en la Argentina se convertían en un tema cuya repercusión en el exterior era cada vez más grande.

En octubre de ese año, Adolfo Pérez Esquivel recibe el Premio Nobel de la Paz, acontecimiento cuyas repercusiones fueron difíciles de controlar por parte del régimen militar. El líder del SERPAJ, en declaraciones públicas, hizo extensivo el Premio Nobel a otros organismos de derechos humanos: "Será un estímulo para otros movimientos. No es un premio a una persona. Lo es a una organización, como también lo es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecueménico, las Madres de Plaza de Mayo, y los campesinos que luchan por sus tierras" (Cla-

rín, 14/10/80).

Pérez Esquivel ponía en el escenario público a los organismos de derechos humanos y destacaba como legítima la lucha de las Madres de Plaza de Mayo: "El problema de las madres es un problema humano. Son madres que buscan a sus hijos y esperan una respuesta que no les llega. Nuestro mensaje es de fe y está dirigido a todo el mundo. No puede silenciarse esta cuestión" (Clarín, 14/10/80). El contraste entre el "no tiene remedio... fue así" con el que Balbín pretendía cerrar la cuestión y el llamado a no silenciar la cuestión de Pérez Esquivel no podía ser mayor.

En ese clima, que oscilaba entre dar por cerrado el tema o reclamar respuesta, se produce el nacimiento público de la consigna "Aparición con vida", en un comunicado que elaboraron en Suecia las madres que habían acompañado a Pérez Esquivel a recibir el Premio Nobel.

Los líderes del movimiento de derechos humanos que hicieron ese viaje no habían elaborado previamente una estrategia colectiva unificada en cuanto al tipo de declaraciones que irían a hacer a la prensa internacional sobre los desaparecidos y los muertos. Muchos dirigentes habían acumulado datos ciertos sobre el destino final de muchos desaparecidos (inclusive de sus propios hijos o familiares), y les resultaba imposible ocultar la información que tenían acerca de esas muertes. De ahí que, como señala Mignone, "cuando venía el señor de Le Monde, o los periodistas de Suecia, y

me preguntaban qué era lo que yo creía, si los desaparecidos estaban vivos o muertos. Yo no puedo ser deshonesto, yo sabía que algunos estaban muertos" (Mignone, entrevista CEDES, 22/5/91).

Este reconocimiento, sin embargo, lejos estaba de coincidir con las afirmaciones de Balbín. Por otra parte, también se sabía que había desaparecidos con vida: durante todo el período de la represión, recuperaban su libertad personas que habían estado desaparecidas —inclusive chicos—, indicación fuerte de que no todos estaban muertos. Además, si bien había quienes al ser liberados guardaban silencio, otros se ocupaban de hacer saber y de informar sobre las condiciones de los campos de detención clandestinos.

Es en este clima de certidumbres dentro de un clima de incertidumbre —certidumbre de que hay vivos; también de que muchos están muertos— que las Madres plantean la demanda de "Aparición con vida", consigna que en términos literales niega la muerte, y que se irá a convertir en una de las banderas de la transición. Al plantear esta consigna sin concesiones, las Madres se ubican en un extremo del espectro de reivindicaciones, y desde entonces los demás organismos se irán moviendo a su alrededor, acercándose o alejándose de la consigna.⁶

Después del Premio Nobel, que se constituyó en el respaldo internacional más explícito de la lucha por la defensa de los derechos humanos, comienza a darse una apertura al tema en la sociedad argentina más amplia. En abril de 1981, en ocasión del cuarto aniversario del surgimiento de las Madres, hay 2.000 personas en la Plaza, a pesar de la prohibición policial del acto. La consigna "Aparición con vida" está en la calle y en los diarios.

A partir de la manifestación del 15 de octubre —primera que es convocada por el conjunto de los organismos de derechos humanos— la movilización se extiende al espacio nacional e incorpora a sectores muy amplios del espectro político. Y en diciembre de ese año se realiza la primera Marcha de la Resistencia de las Madres, con la adhesión de todos los organismos.

Si hasta el año 1981, la disputa estratégica entre los organismos ponía de un lado a los más "moderados" (la Liga, MEDH, APDH a veces) y del otro lado a los más "vocales" (Madres, Abuelas, Familiares, SERPAJ), hacia fines de 1981, la relación de fuerzas se iba inclinando en favor de la oposición más frontal y abierta. Esto se hará más claro después de la derrota de Malvinas.

La guerra de las Malvinas abre el camino para la retirada del régimen militar y para la transición a la democracia. El protagonismo del movimiento de derechos humanos en esta etapa es fundamental (Sonderegger, 1985, entre otros).

Durante el período post-Malvinas y previo a las elecciones, desde fines de 1982 y durante 1983, la "Vida" fue una consigna aglutinadora masiva. La "Marcha por la Vida" del 5 de octubre de 1982 tuvo carácter nacional. En Buenos Aires,

"El líder del SERPAJ, Adolfo Pérez Esquivel, en declaraciones públicas, hizo extensivo el Premio Nobel a otros organismos de derechos humanos, ponía en el escenario público a los organismos de derechos humanos y destacaba como legítima la lucha de las Madres de Plaza de Mayo".

fue encabezada por importantes personalidades del movimiento de derechos humanos, de la política, de las iglesias, del mundo gremial e intelectual. Según Hebe de Bonafini, "la Marcha por la Vida fue algo muy importante porque sentimos que para todo el pueblo el pedido de las Madres tuvo una gran repercusión... Tiene una gran importancia, sobre todo en este momento en que el pueblo que fue a la Plaza sabía que iba a pedir Aparición con Vida. No fue engañado, fue sabiendo a qué iba, y eso es muy importante". (El Porteño, abril de 1983).

Si para afuera la consigna tuvo un efecto movilizador, presentando la imagen de un movimiento de derechos humanos sólido y unificado, internamente provocó una creciente fragmentación, hasta el punto de que algunos organismos quedaron en posiciones de difícil reconciliación. Estas divergencias se manifestaron con más fuerza con la transición a la democracia. Como señala Fernández Meijide: "Las consignas que más dificultades trajeron fueron "Juicio y castigo" y "Aparición con vida", porque en algunos casos se las sentía como consignas sin salida posible... Esa fue la argumentación para afuera; la realidad era que no se quería meter [al gobierno] contra la pared tan crudamente". (Fernández Meijide, entrevista CEDES, diciembre de 1989). Ya en el régimen constitucional, las divergencias ideológicas y estratégicas dentro del movimiento se irán agudizando. Las divergencias confluirán entonces con diferencias personales y de estilo de liderazgo y llevarán a la división de Madres y a varias denuncias dentro de APDH.

La demanda de justicia

La conjunción entre la lucha por los derechos humanos y la demanda de justicia no fue inmediata ni automática. En un sentido muy general, toda demanda de justicia consiste en la exigencia de la restitución de un equilibrio dañado. En este sentido general, el ejercicio de justicia requiere que se tenga conciencia de la dimensión de un daño para saber cuál es la medida del esfuerzo a realizar para repararlo. La desaparición es un daño, pero de una clase muy peculiar.

Es conocido que uno de los mecanismos fundamentales del dispositivo represivo ha sido ocultar sistemáticamente toda información cierta. La desaparición, concebida como daño, implica tanto el secuestro de un cuerpo como la sustracción de un saber. Hallamos aquí una de las particularidades del fenómeno del movimiento de derechos huma-



Botón. Fotografía, Claudia Contreras, 2000.

nos: respondiendo a un daño incierto desarrolla una demanda de justicia indeterminada. Todo lo que en principio puede decirse es que algo ha ocurrido. Una de las primeras tareas del movimiento fue establecer, con algún grado de certeza, qué.

Por otro lado, en la primera etapa de la dictadura, resultaba difícil identificar a los responsables de las desapariciones. La sospecha de que los miembros del gobierno tenían directa vinculación con lo que estaba ocurriendo se despertó más o menos rápidamente. Sin embargo, hallar una explicación para una represión de esa magnitud resultó una tarea mucho más ardua de lo imaginado. Sus resultados fueron frutos más bien tardíos y objeto de polémica.

En un primer período, las señales sobre cómo y quiénes estaban ejerciendo la violencia represora no eran claras. Había indicios que permitían pensar que los secuestros eran obra de bandas irregulares —proposición que resulta absolutamente correcta—. Al mismo tiempo, muchos otros elementos hacían evidente que los operativos contaban con por lo menos la complicidad del Estado y de las fuerzas de seguridad, generando así una versión distinta. Como es bien sabido, un elemento central del terror es crear confusión, miedo, incertidumbre, ambigüedad (Corradi, 1985).

Además de la confusión reinante, de la dificultad de dimensionar el daño y de los obstáculos para atribuir a un grupo, institución, sector o persona la responsabilidad respecto de las desapariciones, la prioridad de las demandas

formuladas durante el primer período estaba en salvar vidas y en lograr un cese de la represión.

El reclamo de justicia aparece primero en el informe de la CIDH en 1979, que recomienda “enjuiciar a los responsables”. A partir de 1980 y 1981, la demanda de justicia comienza a incorporarse al discurso del movimiento, en consignas y solicitadas, convirtiéndose en tema de controversia dentro del movimiento. Así, en ocasión de la primera Semana del Detenido-desaparecido (setiembre de 1981), el debate entre organismos sobre el tenor de la convocatoria es de una intensidad enorme. Para la Liga, había que dar prioridad al reclamo por la paz, la apertura democrática y la verdad —identificada con información sobre lo que había sucedido. Pedir más era visto como demasiado duro para las Fuerzas Armadas, quizás irresponsable en términos de lo que realmente se podía obtener. Para el SERPAJ, las Madres y los Familiares, el reclamo debía vincular la paz con la justicia y la verdad. Dentro de APDH, el tema provocó considerable debate y puso de manifiesto las divergentes líneas internas. En esa ocasión, como en otras, la falta de acuerdo entre organismos llevó a que la convocatoria fuera hecha en dos solicitadas diferentes.

Es a partir de la derrota en la guerra de las Malvinas que el “Juicio y castigo a todos los culpables” se va convirtiendo en una demanda hegemónica dentro del movimiento. Por un lado, la justicia aparece como respuesta institucional con cierta plausibilidad. Por otro, la lucha política dentro del

movimiento se fue resolviendo en favor de las propuestas más opositora y más duras con el gobierno militar. Como señala Fernández Mejjide (entrevista CEDES), en las marchas del 83 hasta los comunistas estaban embanderados en la consigna que pedía justicia.

Durante 1983, las acciones del movimiento se encaminan a conseguir alguna forma de juicio y castigo para un conjunto de culpables que necesariamente debía incluir a los miembros de las fuerzas armadas encargados de la represión, fundamentalmente a quienes habían tomado parte de las juntas militares y a quienes los testimonios recogidos sindicaban como responsables de las detenciones ilegales y las torturas en los centros de detención.

Se abre entonces un período de convergencia con otras organizaciones, incluyendo la CGT y los partidos políticos (Palermo, 1987), y se intenta evitar, por todos los medios posibles, que en la salida el régimen negocie, a cambio de la entrega del poder, la impunidad para los represores. Con el mismo objetivo el movimiento multiplica su presencia en las calles, organizando actos y movilizaciones que tienen por objeto reclamar la aparición con vida de los desaparecidos y repudiar la sanción de la ley de autoamnistía y la emisión del informe final realizado por la última junta militar.

En 1983 no resultaba claro para nadie dentro del movimiento, no sólo en qué iba a consistir finalmente el castigo de las violaciones sino en qué debía consistir ese castigo.

Junto con el temor a que los partidos o los sindicatos negociaran la impunidad para los militares, existía la duda respecto de la posibilidad de probar los delitos cometidos, aun cuando el gobierno que asumiera después de las elecciones tuviera la voluntad de juzgarlos. Se elaboró entonces una estrategia múltiple. Por un lado, apareció el reclamo de una condena "política" para las violaciones a los derechos humanos, que se debía impulsar a través de la creación de una comisión bicameral. Además de su valor intrínseco, esta condena política también podía resultar una alternativa ante la duda respecto de la eficiencia de la justicia ordinaria y de la capacidad de pruebas suficientes para producir una condena judicial. Por otro lado, no se abandonaba la idea de recurrir a los estrados judiciales, y de ahí la urgencia de apoyar y reforzar la labor que debían desarrollar los juzgados federales en el período de implantación de la democracia.

La inquietud crece a medida que se acerca el momento de la entrega del mando por parte de las autoridades del gobierno dictatorial. El 13 de agosto de 1983, el entonces candidato presidencial Raúl Alfonsín, durante una conferencia de prensa, se pronuncia contrario a una ley de Autoamnistía que se esperaba que los militares promulgaran. El 23 de noviembre del mismo año, a pocos días de asumir la primera magistratura, Alfonsín recibe a las Madres, quienes le reclaman que asegure que no vaya a salir del país la documentación probatoria de la existencia de los centros de detención clandestinos, "que se someta a juicio político a

todos los responsables de las desapariciones de miles de personas" y "que se juzgue este problema como un drama político" (Tiempo Argentino, 24/11/83).

Una de las estrategias que se desarrolló para conseguir esta condena política fue tratar de llevar un representante del movimiento a la Cámara de Diputados, a través de la candidatura de Augusto Conte, activo líder del movimiento de derechos humanos. Desde el punto de vista de sus impulsores, esta candidatura introducía las reivindicaciones de los organismos en la competencia electoral y permitía que un miembro del movimiento respaldara desde el parlamento las demandas en favor de la justicia.

Una vez asumido el gobierno constitucional, los reclamos en favor de una condena política se reforzaron. Tras la promulgación del decreto presidencial que ordenaba el juzgamiento de los miembros de las tres primeras juntas militares, Hebe de Bonafini declaraba que "se torna indispensable el juicio político", y aunque evaluaba como positivo el anuncio presidencial, objetaba que ciertos aspectos de su contenido "no han quedado muy claros, como el que se refiere a la necesidad de pruebas para el juzgamiento de los delitos" (Clarín, 15/12/83).

La búsqueda de una condena política se tradujo también en exigencias sostenidas en una supuesta "voluntad popular", representada típicamente por algunas declaraciones de las Madres de Plaza de Mayo. En el sentido común constituido alrededor de la idea de "derechos humanos", la posición de víctima otorgaba un paradójico privilegio: el derecho individual de reclamar frente al Estado por un daño particular y, simultáneamente representar la voluntad de justicia del pueblo. Desde su perspectiva, su lugar del dolor les otorgaba la legitimidad necesaria para arbitrar sobre el tipo de justicia que debía implementarse.

Finalmente, la condena política también se manifestó en el intento de traducir las demandas del movimiento de derechos humanos a la lógica de la confrontación ideológico-política. De acuerdo con esta posición, sostenida típicamente por Familiares (FDDRP), la represión desatada a partir de 1976 debía entenderse como otro episodio en la historia de las luchas populares, de modo tal que tras la condena política a los crímenes de la represión se perseguía también revertir el sentido de las políticas económicas que los habrían motivado. Ninguna de las posiciones descritas era sostenida con exclusividad por ninguno de los organismos de derechos humanos. Por lo demás, si bien en el interior del movimiento existían profundas disidencias de estrategia política, desde afuera no se las percibía como contradictorias sino más bien como complementarias. Hacia fines de 1983, el escenario político argentino estaba atravesado por una gran zanja que separaba a los adversarios del régimen militar de sus antiguos aliados, ahora en silenciosa retirada. Dentro del frente democrático resultaba muy difícil establecer distinciones sutiles entre diferentes consignas de oposición.

a la dictadura y derivar de ellas estrategias de acción precisas. Los reclamos derivaban su valor político en relación con el gobierno militar, por lo cual todas las manifestaciones opositoras —y no sólo las del movimiento de derechos humanos— resultaban, en tanto que opositoras, equivalentes.

Más allá de sus objetivos mediatos, y argumentando de acuerdo con diversos valores, todos los organismos coincidían en combinar las demostraciones de la necesidad ética y moral de castigar los crímenes y la inconveniencia política de permitir la impunidad. Lo importante era obtener “juicio y castigo”. Las respuestas de los organismos a las primeras medidas del gobierno radical permitirían finalmente especificar de qué tipo de juicio y castigo se estaba hablando.

Memoria, verdad y justicia: Derechos Humanos en democracia

La transición a la democracia significó un desafío importante para el movimiento de derechos humanos. El “Somos la vida” de la campaña electoral del Partido Radical no fue una consigna ajena al movimiento. La elección de Alfonsín, vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, implicaba que el nuevo régimen se inauguraba aceptando y haciendo suyos las demandas y valores expresados por el movimiento, incorporándolos como fundamentos éticos del Estado. Mucho más que en otras transiciones en América Latina, los derechos humanos fueron un ingrediente fundante de la nueva democracia.

La labor a encarar en el momento de la transición era multifacética, abarcando distintos planos, sentidos y alcances temporales. Estaban las demandas vinculadas con el pasado y las que se dirigían al futuro; las demandas judiciales, políticas, culturales y sociales.

Un primer plano se vincula con la justicia y el derecho. Las reacciones frente a las desapariciones sistemáticas tardaron no poco tiempo en ser reconocidas como lucha en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, hay consenso en las organizaciones que conformaron el movimiento, en sus interlocutores directos y en su auditorio, respecto de esta denominación.

Con la justicia ocurre algo distinto. La coincidencia entre los integrantes del movimiento (que no es ni fue absoluta) puede resumirse en una consigna que no ha conseguido diluir su ambigüedad a pesar de su resonancia categórica e imperativa: “Juicio y castigo a (todos) los culpables”. ¿Qué juicio? ¿Qué tipo de castigo? ¿Para qué culpables? (González Bombal, 1987).

Si bien las demandas de justicia con relación a las responsabilidades por las violaciones pasadas era uno de los ejes de la actuación de movimiento, las connotaciones de pedir justicia y vigencia de derechos eran mucho más amplias. Por un lado, se planteaba cómo actuar frente a las víctimas de violaciones, cuyos derechos debían ser restituidos y los



Vasos argentinos. Objeto, Claudia Contreras, 2000.

daños reparados. Esto incluía a los directamente afectados y a sus familiares, prioritaria, pero no exclusivamente, a los niños. Por otro lado, la transición a la democracia implica la construcción de una nueva institucionalidad que debe proteger más cabalmente los derechos humanos. ¿Cómo asegurarlos en el futuro? ¿Qué transformaciones institucionales se requieren? A lo cual se agrega otra línea de preguntas: ¿cuál es el contenido de los derechos que deben ser garantizados?

En este punto, las propuestas y las demandas del movimiento de derechos humanos se conjugan con la lucha histórica por la ampliación de la ciudadanía, con toda la conflictualidad social que esta implica.

Un segundo plano es más estrictamente político. En la transición, las diversas corrientes dentro de las fuerzas demo-

cráticas y los grupos afines al gobierno militar se enfrentan para dirimir la cuestión de las relaciones entre civiles y militares, en el contexto de una lucha política que incluye otros temas urgentes (económicos, institucionales, políticos). La agenda política es muy nutrida y, para algunos de los actores relevantes, los temas planteados por las diversas corrientes de los derechos humanos son sólo una parte de un listado mucho más amplio y heterogéneo. Para muchos, además, estos temas no son prioritarios o urgentes: están los que postergan o no se preocupan por el tema, los que impulsan el olvido, los que reivindicán la “guerra sucia” justificando las violaciones.

En este escenario, los que quieren castigar a los culpables son una voz entre muchas otras.

En el plano de la ética, los valores y la cultura, los derechos

humanos se convierten en un elemento clave de la propuesta de construcción de una cultura democrática, humanista, tolerante y pluralista. Las tareas son de largo plazo, múltiples y variadas, aunque sin agenda fija. Si la acción en los planos anteriores pasa necesaria y casi exclusivamente por el Estado, la tarea cultural implica más directamente a la sociedad, aún cuando resulta difícil imaginar su concreción sin el apoyo y la acción conjunta con el aparato estatal. En este campo, la transición a la democracia marcó un momento en que la acción del movimiento de derechos humanos comenzó a tener efectos multiplicadores significativos, tanto en el campo de la producción cultural como en el de la opinión pública. Al asumir Alfonsín, el gobierno hizo suyo una parte de las demandas del movimiento, pero no todas ni de manera cabal. El gobierno respondió a las demandas formuladas por

el movimiento en una dirección: las desapariciones no eran responsabilidad de las fuerzas armadas como institución sino de los individuos que las comandaban; la responsabilidad del Estado (y no de las fuerzas armadas) se reconocía implícitamente en el hecho de que el gobierno parecía estar dispuesto a pagar indemnizaciones.

El candidato electo el 30 de octubre llega a la Presidencia con el propósito de dar una respuesta más o menos categórica al problema de la justicia. Si bien llevar a miembros de las fuerzas armadas ante un tribunal civil resultaba políticamente muy costoso y, de acuerdo con muchas opiniones, de sumo riesgo para el sistema, la total ausencia de juicios parecía literalmente imposible. La política de derechos humanos de Alfonsín se inspiró entonces en su compromiso de llevar adelante los juicios, pero también en la necesidad de limitar su alcance, como parte de su estrategia hacia los militares (Acuña y Smulovitz, 1995).

En el momento inicial de la transición el problema se formulaba en términos de esclarecer "las violaciones a los derechos humanos". Paulatinamente se fue transformando en "la cuestión militar". Esto no es obviamente sólo un cambio de palabras, sino que expresa una inversión de las prioridades iniciales del gobierno: de la necesidad de resolver el problema ético con la sociedad civil, a la necesidad de mantener una relación armónica con el actor militar. En buena medida, esta inversión se produce debido a la presión ejercida por los mismos militares, aunque actores y analistas coinciden en señalar que en el momento de la transición (fines de 1983 y durante 1984) había espacio político para proceder con mayor audacia, dada la debilidad militar.⁷

Hay otro elemento importante a tomar en cuenta. En realidad, un análisis de las propuestas de Alfonsín durante su campaña electoral pone de manifiesto que éstas eran claramente limitadas: la propuesta de justicia se mantenía en el campo de la justicia militar. Además, la distinción de responsabilidades (entre los que dieron las órdenes, los que las ejecutaron y los que cometieron excesos) iba a ser la base de la política de juzgamiento (Mignone, 1991, pp. 150-151; Acuña y Smulovitz, 1995). En el resto del espectro de partidos políticos, incluyendo al candidato a presidente del partido peronista, la propuesta de tratamiento del tema militar era aun mucho más cauta o inclusive favorable a los propios militares (Palermo, 1987).

Desde muy temprano, algunos organismos de derechos humanos (las Madres, los Familiares, el SERPAJ) consideraron que la actitud general con que el gobierno trataba el tema era más cauta y tímida de lo deseado, señalando que sólo se proponían transformaciones graduales impulsadas por el temor a la "desestabilización" desde los cuadros militares. Una buena parte del movimiento de derechos humanos se fue distanciando entonces de las posiciones sostenidas por el gobierno, cuestionando y reclamando por la tibieza de las decisiones. Exigía más, tanto en lo que hace a

la administración de justicia para con los militares responsables de las violaciones como en el proceso de esclarecimiento de las desapariciones y en la libertad de los presos políticos. Otros organismos, compartiendo los mismos objetivos y demandas, privilegiaron el acercamiento con el gobierno y aceptaron las reglas del juego político. Sostenían que con la transición a la democracia, las consignas y demandas debían cambiar.

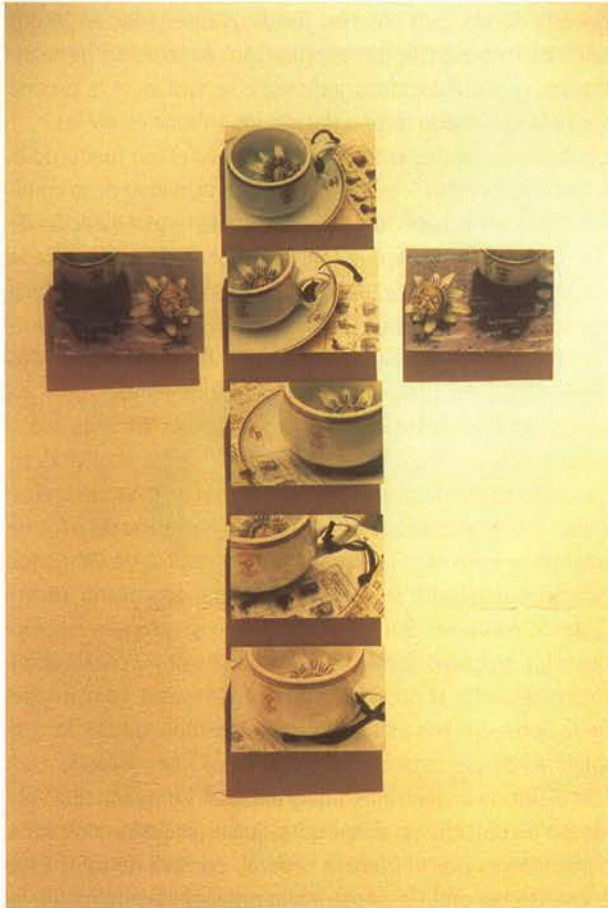
En estas condiciones, el 12 de diciembre de 1983 son promulgados los decretos que disponen el enjuiciamiento de las tres primeras juntas militares y se envía un proyecto de reforma del Código de Justicia Militar para su urgente tratamiento en el Parlamento. Las reacciones de los organismos son ambiguas. Los diarios del día 15 recogen expresiones de cauta satisfacción entre los integrantes más destacados del movimiento, seguramente motivadas por el discurso televisivo, breve y de profunda resonancia simbólica, del presidente. Al día siguiente, el repudio manifestado en una reunión del "Foro del Pueblo Argentino contra las desapariciones" (que convocó a representantes de todos los organismos) a la elección de los tribunales militares como iniciadores del proceso, es unánime.

"Por otro lado, la transición a la democracia implica la construcción de una nueva institucionalidad que debe proteger más cabalmente los derechos humanos. ¿Cómo asegurarlos en el futuro? ¿Cuál es el contenido de los derechos que deben ser garantizados?"

Los organismos se oponen terminantemente a la reforma: desconocen la cualidad moral de los militares para oficiar de jueces, desconfían de que vayan a sacrificar a algún camarada para "salvar" el nombre de la institución y creen que, aun cuando el Consejo Supremo produzca alguna sentencia más o menos resonante, ésta será menos severa que la que podría disponer un tribunal civil.

Todos los organismos del movimiento convergen en la demanda de formación de una Comisión Bicameral que investigue los acontecimientos asociados con la represión. A este reclamo se suman diversos legisladores, aun del oficialismo. El argumento con el que se defiende la conveniencia de esta estrategia es que, dada su condición de representantes del pueblo, una investigación a cargo de legisladores facilitaría el acceso a información en poder de los militares, ya que se verían obligados a entregar los documentos existentes a personas provistas de autoridad.

La formación de esta Comisión Bicameral estaba siendo cuidadosamente diseñada en conversaciones de todos los organismos con miembros del poder ejecutivo y diputados de distintas orientaciones. Se trataba de que, puesto que la vía del Consejo Supremo hacía dudar de la posibilidad de alguna



Cita envenenada. Instalación, Claudia Contreras, 2001.

condena, la contundencia que pudieran tener los resultados de una investigación parlamentaria podía imponer la necesidad de un castigo. Este es otro de los sentidos asociados a la expresión "condena política" y que refiere a un castigo extrajudicial, pero no irregular. Se iba en busca de una condena legal —en el sentido de que aludía a las atribuciones parlamentarias vigentes— y legítima, esto es, referida a algún valor que, como la Justicia, la Soberanía Popular, o los derechos humanos, tuviera preeminencia ética en el momento fundacional de la democracia.

Con todas las previsiones y sorpresivamente, el Presidente Alfonsín convocó a un grupo de personalidades para integrar una comisión oficial que sería la encargada de realizar la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura. Destacados miembros de los organismos de derechos humanos fueron invitados a participar de esta comisión, entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, a quien se le ofreció la presidencia.

Dentro del movimiento, la iniciativa presidencial produjo desconcierto, y luego, reacciones dispares. Los miembros invitados de la APDH y del MEDH decidieron colaborar en la iniciativa gubernamental. En la APDH, esto generó un conflicto interno: cómo preservar el frágil consenso a partir del cual había conseguido funcionar durante todo el gobierno

militar?, ¿privilegiar las posiciones de los integrantes que veían en la formación de lo que luego sería la CONADEP, una maniobra dilatoria? Este conflicto se resolvió en favor del consenso. Confiando en la autoridad moral de los miembros invitados a participar en la comisión, los demás decidieron prestar su colaboración y obtener de la participación en la comisión investigadora el mayor provecho posible.

En otros organismos las reacciones fueron diferentes. Al serle ofrecida la presidencia de la Comisión, Adolfo Pérez Esquivel, representante del SERPAJ, estableció un mecanismo de consulta con los otros organismos. Su condición para aceptar el ofrecimiento era que no fueran los militares los encargados del juzgamiento. Finalmente, su nombre no fue incluido en la lista de integrantes de la Comisión. La posición del SERPAJ era clara: se oponía a que juzguen a los militares, no a la entrega de la documentación en su poder a la CONADEP. En ocasión de la entrega del informe de la CONADEP, el SERPAJ decidió adherir a la movilización que acompañó la entrega pero no convocar a la marcha, puesto que no aprobaba la existencia de los tribunales militares.

En el interior de la CONADEP, el conflicto entre los integrantes que representaban la posición del Ejecutivo (en el sentido de enviar el resultado de las actuaciones para su tratamiento en tribunales castrenses) y los representantes del movimiento de derechos humanos, que se oponían a esto y querían que la investigación corriera a cargo de tribunales civiles, se resolvió (en una votación reñida) en favor de hacer entrega de los materiales al Poder Ejecutivo.

Este incidente, aparentemente anecdótico, ilumina algunos de los rasgos que adquirió el proceso de revisión del pasado en los primeros años de la Argentina democrática. Habla, por un lado, de la imposibilidad primigenia del gobierno radical de elaborar una política que no contara con el aval o desconociera la posición de por lo menos algunos de los organismos de derechos humanos. Indica, además que la influencia del movimiento era tal que la resolución de una comisión convocada por el Poder Ejecutivo podía llegar a contradecir la estrategia presidencial.

La oposición más radical que encuentra la estrategia diseñada por el gobierno para resolver el problema de los desaparecidos fue la de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Defraudadas las exigencias iniciales, este grupo se colocó en una cerrada actitud opositora, a pesar de lo cual la mayoría de las integrantes de la agrupación prestó testimonio en las oficinas de la comisión y colaboró en las investigaciones con fotos u otros materiales necesarios para probar las desapariciones. Las manifestaciones realizadas por las Madres en esa época coinciden en subrayar la lentitud de la justicia y en reprochar la falta de participación del pueblo en los procedimientos relativos a las investigaciones y futuros juicios.

En setiembre de 1984, las Madres de Plaza de Mayo no participaron de la marcha que acompañó la entrega del informe, L

puesto que desconocían su contenido y reclamaban —seguirían reclamando— una comisión bicameral. En esa ocasión, la convocatoria contó con el apoyo de partidos políticos y una amplia gama de organizaciones sociales. Como señala Leis (1989, p. 42), estaban presentes los demás organismos, “pero la mayoría de la gente se sentía ahora convocada por el problema de los derechos humanos y no por una u otra entidad. Los diarios calcularon 50.000 personas.”

Conviene subrayar que la posición que cada organismo tomó respecto de la modalidad de investigación no se correspondía inmediatamente con su posición respecto de los caminos elegidos para hacer justicia. Más claramente: a pesar de que miembros de APDH y el MEDH formaron parte de la CONADEP, a pesar de que en forma personal casi todos los individuos que conformaban los organismos de derechos humanos colaboraron de uno u otro modo con las actividades de esta comisión, durante todo el año 1984 el movimiento siguió manifestándose contrario a la reforma del Código de Justicia Militar. Es decir, la posición respecto del problema de la “Verdad” era una cosa distinta de lo que se sostenía respecto del problema de la “Justicia”.

Todo movimiento social se caracteriza por una enorme heterogeneidad interna y por la diversidad de estrategias, tácticas, modalidades de acción y estilos organizativos de sus componentes. Un movimiento social nunca es sinónimo de una única institución o una organización. Por el contrario, es un conglomerado de demandas, expresadas de maneras diversas, que va constituyéndose en movimiento en la medida en que interpela a un opositor común, en una postura crítica (a menudo implícita) del sistema sociopolítico dominante.

Desde esta perspectiva, una lectura estructural del movimiento de derechos humanos indica que en la medida en que se enfrentaba a un oponente unificado y visible, su accionar resultaba coherente y unitario. La diversidad de metas y estrategias de sus componentes le permitía avanzar en varios frentes simultáneamente. Sin suponer que respondieran a una decisión estratégica y racional, las diferencias resultaban ser eficientes en términos de acción colectiva. El disenso y el conflicto interno no deben ser vistos como negativos. Organismos como Madres de Plaza de Mayo se mantendrán en una cerrada crítica al gobierno, en especial al Poder Ejecutivo, y optarán por dirimir el conflicto en el terreno de la manifestación pública. Otros (APDH, MEDH, CELS) aprovecharán la oportunidad de participar del mecanismo de toma de decisiones y desde allí, apelando a la movilización pública como recurso subsidiario, enfrentarán la estrategia del Ejecutivo en procura de objetivos que no difieren sustancialmente de los que se plantean los otros organismos. De este modo conseguirán que lo que en principio se pensaba como una reunión de notables encargados de garantizar la veracidad de un conjunto de informaciones, se transforme en un tribunal de instrucción sui

generis donde, con criterios jurídicos diseñados en largos años de experiencia de recopilación, exposición de testimonios y presentaciones judiciales, se sustancie la prueba sobre la que luego irían a decidir los tribunales civiles.

Las investigaciones entran en una nueva etapa luego de la entrega del informe de la CONADEP. La actividad de la comisión deja, en el haber del movimiento, la sistematización de una carga de prueba que tendrá un peso decisivo para la etapa civil del juicio a las juntas. Tiene también un enorme impacto sobre la opinión pública, difícil de medir pero presumiblemente decisivo, con la edición del libro *Nunca Más* y la emisión del programa televisivo homónimo.

La inquietud entre los oficiales de las fuerzas armadas crece exactamente por los mismos motivos. El Poder Ejecutivo decidirá entonces arriesgar el choque con los organismos: retira la lista de responsables implicados en la represión del informe final de la CONADEP y crea la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Presidencia, organismo encargado de continuar con las investigaciones, girar sus resultados a los juzgados donde se tramitarán causas y canalizar las relaciones entre el presidente y los organismos. La actividad de la Subsecretaría es rápidamente cuestionada por la casi totalidad de los organismos, en términos muy duros.⁸

Los distintos organismos integrantes del movimiento volvieron a coincidir en el apoyo al juicio iniciado contra los comandantes por la Cámara Federal, en abril de 1985. Este consenso general descansó en la potencia simbólica de la imagen que ofrecían los nueve reos sentados frente a los miembros del tribunal. Sin embargo, representantes de todos los organismos coincidieron en expresar rápidamente, aunque con distinto énfasis, que la realización de este juicio debe considerarse sólo como la primera etapa de un proceso que debe alcanzar “hasta el último de los torturadores”, según la expresión utilizada en varias oportunidades por las Madres de Plaza de Mayo.

A pesar de que todos los organismos coincidían en enmarcar el problema de los derechos humanos en el contexto de un conflicto social de vastos alcances, ni aun en las demandas exigentes (las Madres de Plaza de Mayo) se reclamaba castigo más que para quienes hubieran planeado, dirigido o participado directamente en los actos mismos de la represión: esto es, militares, miembros de fuerzas de seguridad, parapoliciales y otro personal como capellanes y médicos. El reclamo de castigos penales era para los responsables directos; el juicio a los responsables indirectos se dejaba para ser dirimido en el plano político y en el inevitable “juicio de la historia”.

¿Por qué ocurrió algo así? En el reclamo de justicia de las Madres de Plaza de Mayo, la profundidad de la exigencia tenía la medida de la pérdida que la motivaba. La justicia y el castigo que se reclaman están profundamente arraigados en la materialidad del acto de la desaparición. Culpable, en general, es el que hizo, el que participó, el que pudo



Fósil Guía 1. Objeto, Claudia Contreras, 2000.

evitar y no evitó, el que pudo ayudar y no ayudó. En este sentido había culpabilidad o responsabilidad "histórica" que alcanzaba a políticos, sindicalistas, sacerdotes y periodistas, entre otros integrantes de grupos con presunta capacidad de orientar las decisiones del poder. Según la visión dominante en ese momento, sin embargo, a esa responsabilidad indirecta le cabía el "juicio de la historia", juicio para cuya realización no hay poder a quien reclamar, ni haría falta, porque de todos modos ocurrirá.

La justicia de los tribunales, la terrenal, corresponde a los que hicieron algo concreto. El círculo de los culpables alcanza así a todos los que estuvieron en contacto con el cuerpo del desaparecido. A los que secuestraron, torturaron y asesinaron y a quienes mandaron hacerlo, como responsables y culpables directos.

Más allá del juicio

El juicio desplazó el foco de atención y el escenario del conflicto del Poder Ejecutivo al Judicial. Este desplazamiento duró el tiempo en que se desarrolló el juicio. Cuando se promulgaron las sentencias, el descontento de todos los miembros del movimiento se manifestó en declaraciones de oposición al Poder Ejecutivo. El día mismo en que las sentencias fueron pronunciadas, algunas Madres participaron de una marcha improvisada que reclamaba por la injusticia de las condenas y advertía sobre la necesidad de evitar futuras amnistías o garantías legales de impunidad. Cuando ima-

ginaban el castigo para los militares argentinos, estaba más presente el recuerdo todavía fresco de la explosión democrática que auguraba mejores resultados, y menos la ausencia de los antecedentes de juicios de este tipo en la historia latinoamericana. Las sentencias deterioraron la relación del gobierno con los integrantes del movimiento. Una vez producida la sentencia, los caminos de los organismos de derechos humanos y del Ejecutivo se separaron aun más.

Para muchos protagonistas del campo político de esta historia, se había dado un paso doloroso pero inevitable. Era además, el último soportable. Pensaban que, a partir de este momento, el ánimo militar consideraría cualquier otro castigo como gratuito. Sin embargo, el discutido fallo de la Cámara Federal había dispuesto, manejándose con sorprendente independencia respecto de la estrategia del ejecutivo, nuevos procesamientos. Se abrió de este modo un espacio de acción doble para el movimiento de derechos humanos. Por un lado iba a tener que enfrentar las iniciativas del Poder Ejecutivo. Las enfrentó con todos los recursos disponibles, que llegaron a la repetida convocatoria de campañas y movilizaciones callejeras. A pesar de ello, las decisiones del ejecutivo de limitar los procesamientos en tiempo y en extensión siguieron su camino.

En ese punto, la acción se volcó sobre el Poder Judicial, procurando que, dentro de los márgenes cada vez más estrechos que las disposiciones iban dejando, actúe con toda la firmeza posible. La sanción de la ley de Punto Final pro-



Cruz. Instalación, módulos. Centro Cultural Recoleta, 2001. Claudia Contreras.

dujo el resultado paradójico de las presentaciones judiciales masivas resueltas en la febril actividad judicial de los primeros meses de 1987, promovidas por las delegaciones provinciales de los organismos de derechos humanos y la presión popular. También, la imagen de seriedad y eficiencia presentada por la Cámara Federal de Buenos Aires sentaba un ejemplo difícil de ignorar.

El Poder Judicial, muchos de cuyos miembros habían sido señalados por sus orientaciones ideológicas antidemocráticas por los organismos —y en no pocas ocasiones con sobrados motivos— manifestaría ahora, sea por convicción democrática, por un antialfonsinismo militante, o por no quedar expuesto a la crítica social, una imprevisible velocidad en el esfuerzo por alcanzar con la citación a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad sobre los que se tuviera sospechas.

Los resultados de esta historia son conocidos. La sensación de derrota o desazón asociada con la sanción de la ley de Obediencia Debida y la posterior decisión presidencial de los indultos no elimina el impacto social del NUNCA MÁS y de los juicios, dos hitos que permitieron que gran parte de la sociedad vinculara la transición con esta dimensión ética y con la trascendencia histórica de lo que se había vivido.

Sobre el olvido y la memoria

Más allá de las demandas y objetivos específicos en el plano político, uno de los aspectos de mayor importancia en la

causa del movimiento de derechos humanos es su lucha “contra el olvido” y por la recuperación de la memoria. Esta lucha está anclada en una convicción indiscutida dentro del movimiento: que sólo a través del recuerdo permanente de lo ocurrido en la represión se puede construir una barrera contra la repetición de atrocidades similares. Una certidumbre de que el “Nunca más” en el futuro se deriva del recuerdo (é reiterativo?) del pasado traumático.

¿Es la memoria la clave para esto? ¿Quiénes son los depositarios y custodios de esa memoria? ¿Cuáles los mecanismos sociales de su transmisión? ¿Cómo se transforma la experiencia traumática vivida en memoria histórica y social? ¿De qué olvido y de qué memoria estamos hablando?

No se trata del plano individual, en el cual sólo es posible olvidar lo que se vivió, sino de una memoria colectiva y del temor a un olvido colectivo. Tema complejo, con apelaciones éticas y afectivas, además de las ideológicas e instrumentales. “Cuando decimos que un pueblo ‘recuerda’, en realidad decimos primero que un pasado fue activamente transmitido a las generaciones contemporáneas a través de... ‘los canales y receptáculos de la memoria’... y que después ese pasado transmitido se recibió como cargado de un sentido propio. En consecuencia, un pueblo ‘olvida’ cuando la generación poseedora del pasado no lo transmite a la siguiente, o cuando ésta rechaza lo que recibió o cesa de transmitirlo a su vez, lo que viene a ser lo mismo... Un pueblo jamás puede ‘olvidar’ lo que antes no recibió” (Yerus-

halmi, 1989, 17-18).

¿Cómo recuerda un pueblo? ¿Cuáles son “los canales y receptáculos de la memoria”? Lo que la memoria retiene es aquella historia que pueda integrarse en el sistema de valores; el resto es ignorado, “olvidado”, aunque en ciertas circunstancias lo olvidado puede ser recuperado. El sistema de valores actúa como selector de lo que se incorpora a la “tradición”. Del pasado sólo se transmiten los episodios “ejemplares” o edificantes para esa tradición, tal como se la vive en el presente.

Este presente histórico es construido por sujetos en lucha, y esta lucha incluye la disputa por el sentido de la historia y por los contenidos de la tradición y de los valores. Así, en la Argentina de la transición a la democracia de los ochenta, el movimiento de derechos humanos actuó como “empresario” de la memoria, frente a dos corrientes políticas con proyectos ideológicos alternativos: los que glorificaban la actuación de las fuerzas armadas como héroes en una guerra que tuvo algunos “excesos”, y los que pretendieron cerrar las heridas y conflictos de la sociedad a través de la “reconciliación” y el olvido, señalando las urgencias (económicas, políticas) del presente y proponiendo mirar hacia el futuro (o hacer borrón y cuenta nueva).⁹

Frente a estas interpretaciones contrapuestas, el movimiento de derechos humanos se dedica militantemente a activar la memoria, a promover el recuerdo, a señalar qué acontecimientos (afrentas y violaciones) es preciso retener y transmitir. Una parte (relativamente menor) de la empresa activa de la memoria está centrada en elaborar archivos históricos, datos, documentos. La labor central, ideológica y política, se desarrolla a partir de identificar el recuerdo y la memoria con la construcción de una cultura y una identidad, tareas que se han multiplicado a partir de mediados de los noventa. El desafío está en que este proceso activo del recuerdo logre superar el ritual de la repetición de la historia, siniestra y traumática.

Si el recuerdo y el no olvido son siempre parte de la recreación de tradiciones, en períodos de transición y construcción democrática la tarea tiene consecuencias políticas más inmediatas: el re-conocimiento público y oficial de la información sobre violaciones y violadores (la construcción de una “verdad” histórica) constituye un momento crucial de la asignación de responsabilidades.¹⁰

En este sentido, conviene recordar aquí la distinción entre la fase de la “verdad” y la fase de la “justicia”: la fase de la verdad implica el reconocimiento gubernamental de la responsabilidad que tuvieron agentes estatales por los abusos cometidos. Esto se logra a través de la difusión oficial de la “verdad” de lo ocurrido. La fase de la justicia implica la acusación formal y el castigo de los culpables reconocidos como tales, un paso que no siempre resulta políticamente viable en su totalidad (Americas Watch, 1987).

Esta distinción se ve muy claramente en el caso argentino.

“Los distintos organismos integrantes del movimiento vuelven a coincidir en el apoyo al juicio iniciado contra los comandantes por la Cámara Federal, en abril de 1985. Este consenso descansa en la potencia simbólica de la imagen que ofrecen los nueve reos sentados frente al tribunal.”

Desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto, la fase de la “verdad” correspondió a las investigaciones llevadas a cabo por la CONADEP. En su informe se dieron a conocer públicamente las atrocidades cometidas durante el régimen militar: desde entonces, nadie puede aducir ignorancia. Se vendieron cientos de miles de copias del libro Nunca más, que sigue reeditándose y vendiéndose. A su vez, el juicio a los ex comandantes fue la confirmación institucional de esa “verdad” (apelando a la autoridad del Poder Judicial) y el momento fundacional de la “justicia”. Con el correr de la transición, las dificultades políticas de la fase de la justicia se pusieron de manifiesto de manera creciente, provocando revisiones y retrocesos en la política oficial. Hacia fines de la década de los noventa, el ámbito judicial vuelve a primera plana, a partir de la ola de Juicios por la Verdad y los que se llevan a cabo por el imprescriptible crimen de apropiación de niños, así como los casos de procesos en otros países (España, Italia, Francia, etc.).

En términos políticos, todas las frágiles democracias en formación se enfrentan con la dificultad de implementar la verdad y la justicia, presas del temor a la reacción por parte de los culpables (mayoritariamente militares y otros grupos que siempre quedan con poder y con base social), del peligro de un nuevo golpe u otras formas de reacción, y de la imposibilidad de enjuiciar a todos los culpables y de resarcir a todas las víctimas. En estas situaciones, tan comunes en el mundo actual (Neier, 1990), el reconocimiento y la información amplia son un primer paso en la tarea de realizar, aunque no alcanzan. “Sabido lo ocurrido, una nación podrá ser capaz de plantearse un debate honesto sobre cómo y por qué los horrendos crímenes llegaron a ser cometidos. Identificar a los responsables y mostrar lo que hicieron implica estigmatizarlos, lo cual ya es un castigo en sí mismo. Identificar a las víctimas, y recordar cómo fueron torturadas y asesinadas, es una manera de reconocer su valor y su dignidad” (Neier, 1990, p. 34).¹¹

En tanto no hay una única demanda y una única memoria, la situación es compleja. En la Argentina, el reconocimiento de la “verdad”, la humanización de las víctimas y la estigmatización de los responsables son, sin duda, procesos significativos para los directamente implicados y para la sociedad en su conjunto.

La condena moral y social, sin embargo, no pueden reemplazar la centralidad de la justicia, especialmente cuando

se dirige la mirada hacia la construcción de una institucionalidad democrática. "...En la medida en que una sociedad o un gobierno desechan como innecesario el principio de la responsabilidad (accountability), socavan sus posibilidades de convertirse en una verdadera democracia, en la cual los ciudadanos pueden confiar en que sus derechos están firmemente protegidos" (Neier, 1990, p. 35).

Los líderes políticos pueden considerar que juzgar puede no ser parte necesaria de la transición, pueden sentir que los juicios son muy riesgosos, pueden haberlos eliminado del ámbito de las alternativas políticas viables por pactos y negociaciones. Desde una perspectiva histórica, la justicia incompleta implica dejar políticamente sin resolver un conflicto, abriendo así la posibilidad de que el espacio sea ocupado por el dolor y el sufrimiento de las víctimas y afectados directos, con su pérdida irreparable e inolvidable. En tales casos, saldar las cuentas del pasado quedará como una tarea eternamente inconclusa, y las heridas del pasado reaparecerán una y otra vez, de manera repetitiva, sin elaboración ni transformación histórica o simbólica.

Si para las víctimas el daño es irreparable, frente a las limitaciones en el accionar de la justicia, a la sociedad en su conjunto le queda el espacio de construcción de la memoria colectiva para elaborar social y culturalmente las cuentas con el pasado. En el plano cultural, entonces, justicia y memoria quedan identificados.¹²

La presente es una versión revisada del artículo La política de la memoria: el movimiento de derechos humanos y la construcción democrática en la Argentina. Publicado en Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina, Varios autores, Buenos Aires, Nueva Visión, 1995.

1 Esta tensión acompaña toda la historia del movimiento de derechos humanos. Se hizo más evidente en coyunturas críticas: la posición del movimiento frente a la visita de la Comisión de la OEA (a la cual la Liga se oponía por el alineamiento de la OEA con los Estados Unidos) o la demanda de justicia en 1981.

2 Fue sólo a partir de la visita de la CIDH de la OEA, en setiembre de 1979, que comenzó a abrirse el debate público sobre el accionar del régimen militar.

3 Mignone relata que, frente a la desaparición de su hija, "además de iniciar frenéticas —e inútiles— gestiones tocando todos los resortes a mano,.... mi esposa y yo adoptamos tres decisiones que hemos mantenido hasta ahora. Primero, no ocultar el hecho. Segundo, sostener que el operativo había sido oficial. Tercero, participar activamente en la organización de actividades de solidaridad..." (Mignone, 1991, pp. 93-94).

4 La APDH centralizó la labor de registro de denuncias, aunque éstas también eran recibidas en otros organismos. La Asamblea no patrocinaba la presentación judicial de casos individuales (en esto se especializó el CELS desde su creación en 1980), sino colectivos. En 1977 hizo una presentación a la Corte Suprema por privación de la libertad a 425 personas. Frente a la admisión de la Corte que era impotente para poner remedio a la situa-

ción, la APDH envió una carta-petición al presidente. Más adelante, sus archivos fueron la base para confeccionar los listados preparatorios para la visita de la CIDH de la OEA en 1979, y editó una nómina de 5.566 casos de detención-desaparición (Mignone, 1991).

5 Existen numerosos testimonios publicados sobre la actuación de los familiares frente a una desaparición (Sánchez, 1985; Melibovsky, 1991; Mignone, 1991; Ulla y Echave, 1986; Herrera y Tenenbaum, 1990; Giorgi, 1990, publicados en los años ochenta; muchos más fueron publicados posteriormente). No hay estudios que expliquen las variaciones en la modalidad de actuación inicial de los familiares, ni que indaguen acerca de cómo el tipo de reacción inicial condiciona la trayectoria posterior, sea en términos individuales (relativos a la superación de la situación traumática) o sociales (en términos del tipo de inserción en el espacio público-político).

6 Años después, en 1985, Nora Cortiñas reinterpreta el sentido de la consigna: "La consigna 'Aparición con vida' no es sólo una consigna, sino un deseo y al mismo tiempo una acusación. No es una locura. Las madres sabemos perfectamente, aunque sea doloroso decirlo, que la mayoría de los desaparecidos fueron asesinados. Pero creemos que para todo el pueblo argentino... pedir 'Aparición con vida' es lo más justo que podemos hacer todos, porque si no están con vida, hay muchos responsables, y entonces ahí es donde la justicia tiene que actuar". La consigna "Con vida se los llevaron, con vida los queremos", es anterior a esas fechas. Surge en 1978, en una de las manifestaciones habituales en la Plaza (esta vez, en la esquina de la Municipalidad, porque la Plaza estaba ocupada por policías), coincidente con el Mundial de Fútbol (Sánchez, 1985, p. 160).

7 En esta dirección, Fernández Meijide relata el accionar de la CONADEP y la respuesta en los cuarteles: "...entrábamos a los cuarteles, los tipos se fruncían y nos dejaban ver hasta el último calabozo y hasta el último foso... y les revisábamos todos los centros y sacábamos fotos y venían los testigos y decían, 'éste, aquél'. Hoy me parece como una ensoñación. Militares que mandaban preguntar si estaban en la lista, si estaban acusados por algo. Todos perseguidos, todos asustados. Y haber desaprovechado ese momento era como ..." (entrevista CEDES, 12/12/89).

8 Días después de una entrevista en la que la APDH había solicitado al subsecretario de Derechos Humanos información detallada sobre las setecientas causas que la CONADEP había elevado a la justicia, Graciela Fernández Meijide declaraba que el organismo recién creado "se asemeja a un ente liquidador, que perdió la dinámica que tuvo la CONADEP y por lo tanto resulta muy difícil saber cómo está trabajando." (La Voz, 17/1/85)

9 Los indultos de 1989 y 1990 a los miembros de las Fuerzas Armadas (incluyendo a los comandantes de las Juntas militares) y a los pocos líderes de la guerrilla condenados fueron justificados por el objetivo de la "reconciliación nacional". Es difícil, sin embargo, concebir una reconciliación sin arrepentimiento.

10 Neier (1990) utiliza en este tema la diferenciación entre re-conocimiento (acknowledgment) y conocimiento (knowledge). En el contexto de la responsabilidad política, el primero implica la admisión por parte del Estado de las malas acciones cometidas.

11 Al evaluar la importancia del juicio a los ex comandantes, Liwski señala que el Juicio "eliminó esos testimonios fantasmas en la sociedad, puso a las víctimas como seres humanos, las igualó al resto de los seres humanos. Y quitó la base argumental de legitimidad o justificación del accionar del terrorismo de Estado..." (Liwski, entrevista CEDES, 1/10/1990).

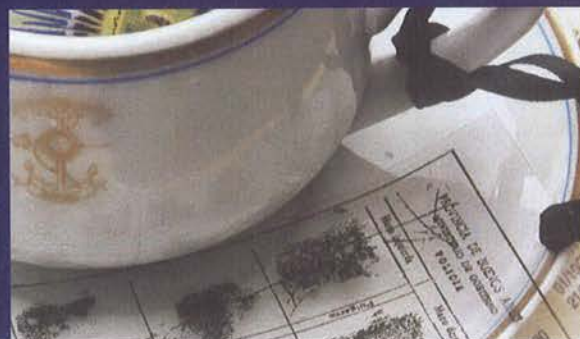
12 En una encuesta realizada en Francia en relación con el caso Barbie, una de las preguntas era: "De las dos palabras siguientes, olvido o justicia, cuál es la que mejor caracteriza su actitud frente a los acontecimientos de este período de la guerra y de la Ocupación". Frente a esto, Yerushalmi se pregunta, ¿es posible que el antónimo de "el olvido" no sea "la memoria" sino la justicia? (Yerushalmi, 1989, p. 26).

Referencias bibliográficas

- Acuña, Carlos y Catalina Smulovitz, 1995. Militares en la transición argentina: del gobierno a la subordinación constitucional. En Varios Autores, Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina. Buenos Aires, Nueva Visión.
- Americas Watch, 1987. Truth and partial justice in Argentina. Washington, Americas Watch.
- Corradi, Juan, 1985. La cultura del miedo en la sociedad civil: reflexiones y propuestas. En Isidoro Cheresky y Jacques Chonchol (eds.), Crisis y transformación de los regímenes autoritarios, Buenos Aires, EUDEBA.
- Giorgi, Alicia, 1990. Caso Giorgi; a los hijos de un detenido desaparecido. Buenos Aires, edición de la autora.
- González Bombal, María Inés, 1987. Derechos Humanos: la fuerza del acontecimiento. En Varios Autores, El discurso político: lenguajes y acontecimientos, Buenos Aires, Hachette.
- González Bombal, María Inés, 1990. El diálogo político: La transición que no fue, Buenos Aires, Documento CEDES No. 61.
- González Bombal, María Inés y María Sonderegger, 1987. Derechos humanos y democracia. En Elizabeth Jelin (ed.), Movimientos sociales y democracia emergente / 1, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Herrera, Matilde y Tenenbaum, Ernesto, 1990. Identidad, Despojo y restitución, Buenos Aires, Editorial Contrapunto.
- Lechner, Norbert, 1986. La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado, Santiago de Chile, FLACSO.
- Leis, Héctor Ricardo, 1989. El Movimiento por los derechos humanos y la política argentina / 1 y / 2. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Melibovsky, Matilde, 1991. Círculo de amor sobre la muerte. Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional.
- Mignone, Emilio, 1991. Derechos humanos y sociedad: el caso argentino. Buenos Aires, EPN/CELS.
- Neier, Aryeh, 1990. What should be done about the guilty?, New York Review of Books, Febrero 1, 32-35.
- Palermo, Vicente, 1987. Movimientos sociales y partidos políticos: aspectos de la cuestión en la democracia emergente en Argentina. En Elizabeth Jelin (ed.), Movimientos sociales y democracia emergente / 2. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Sánchez, Matilde (ed.), 1985. Historias de vida. Hebe de Bonafini, Buenos Aires, Fraterna/del Nuevo Extremo.
- Sonderegger, María, 1985. Aparición con Vida. El Movimiento de derechos humanos en Argentina. En Elizabeth Jelin (ed.), Los nuevos movimientos sociales / 2. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Ulla, Noemí y Hugo Echave, 1986. Después de la noche. Diálogo con Graciela Fernández Meijide. Buenos Aires, Contrapunto.
- Yerushalmi, Yosef, 1989. Reflexiones sobre el olvido. En Varios Autores, Usos del olvido. Buenos Aires, Nueva Visión.

UN CAMINO DE ESPINAS

Claudia Contreras es una artista plástica argentina cuyas obras ilustran esta nota. Cuando se le pregunta por su trabajo y el compromiso con la memoria ella relata: "Mi trabajo en torno a la memoria, a la intolerancia y a la violencia tiene que ver con mi historia personal y colectiva. En el 78 tenía 22 años, vivía aquí, trabajaba durante el día y estudiaba Bellas Artes por la noche, no militaba ni me interesaba la política, igual vivía con el miedo aunque, por supervivencia, trataba de vivir como ciega, sorda y muda. En mi camino diario al trabajo, nunca vi a las Madres en la Plaza, supe de su existencia cuando llegué a Madrid, donde viví entre el 78 y el 82. Aunque lo personal no es el mayor motivo, un primo de mi familia está desaparecido y de eso en mi familia no se habla. Y yo asumo ese compromiso con obras, por él, por todos los que no están y por mí, mi hija y todos los que sobrevivimos al horror, porque creo que el ejercicio de la memoria requiere de un trabajo activo y permanente. A mí me toca desde lo que sé, la plástica. En este sentido, hace unos años presenté un proyecto de intervención del muro del Centro Clandestino de Detención conocido como El Olimpo y trabajé para el Parque de la memoria y el proyecto quedó preseleccionado. El año pasado, en un negocio de venta de rezago gastronómico muy cerca de mi casa, encontré vajilla de las Fuerzas Armadas y ya no pude parar de producir en este sentido. Algunas de las obras ilustran estas páginas. Además, realicé un proyecto de intervención urbana llamada 'Línea de espinas'. Por ejemplo, en la plaza de mi barrio ordené las espinas en fila sobre los bancos de piedra, las clavé en la corteza de los árboles, sin lastimarlos. Ese día había poca gente, solo un grupo de adolescentes, dos abuelos y una señora paseando su perro. Así me refiero a cierta violencia argentina, que nos involucra cotidianamente posibilitando la siniestra convivencia de las víctimas con los victimarios. Sé que pronto voy a seguir poniendo espinas en la ciudad, en mi propia búsqueda del sentido".



Biblioteca

Estos son algunos de los títulos que pueden ser consultados en la Biblioteca del Proyecto Memoria, Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Puán 470, de lunes a viernes de 13 a 16 hs. El catálogo de la biblioteca se encuentra disponible online en www.filo.uba.ar.

Selección y comentarios preparados por Federico Guillermo Lorenz.

Robert Jay Lifton, *The Nazi Doctors. Medical Killing and the Psychology of Genocide*, New York, Basic Books, 1986 (2000). Este libro tiene por objeto estudiar el papel que los médicos desempeñaron en el genocidio planificado de los nazis. Originalmente publicado en 1986, es reconocido como una obra clave en los estudios referidos al Holocausto, y su autor, Robert Jay Lifton, es un prestigioso profesor de Psicología y Psiquiatría. La obra parte de la convicción de que es importante señalar que los médicos nazis fueron hombres para nada extraordinarios, y que esta idea es muy imperante en la actualidad, ante el resurgimiento de fenómenos similares en años recientes, como en los Balcanes y África.

Lifton, por el contrario, pretende analizar lo que define como "mentalidad genocida", que se sustenta en el hecho de que los perpetradores tienen el control sobre lo que hacen o han hecho, y que el dominio que ejercen sobre la vida y la muerte es el que a la vez tienen sobre la verdad. Lo que su investigación refleja es que "desafortunadamente, la verdad es que la gente puede ser socializada fácilmente para matar. El genio humano para la adaptación, que ha servido tan bien desde el punto de vista de la especie, puede volverse en nuestra contra al permitir a todo

tipo de hombres y mujeres adaptarse a mentalidades e instituciones genocidas ya existentes".

Esta mentalidad genocida tiene, a lo largo del tiempo, un elemento central: lo que el autor llama la "paradoja del matar para curar". Sin embargo, Lifton señala que lo que diferencia a los médicos nazis de otros profesionales que colaboraron con regímenes de exterminio es que realmente desempeñaron un papel central en el genocidio. La segunda parte se ocupa, en consecuencia, del papel desempeñado por los médicos en los campos y en la aplicación del Sonderbehandlung, el "plan especial" que consistió en el exterminio, en "matar para curar" el cuerpo social. Aquí, la noción de control de la verdad, pues Auschwitz es "un mundo que no es de este mundo", cobra relevancia. La tercera y última sección, se concentra en el análisis de la Psicología del genocidio focalizando en los médicos. Lifton reconoce un proceso de desdoblamiento que es el que permitió a los profesionales nazis participar en el mecanismo del exterminio: la división de su ser en dos entidades, cada una de ellas actuando como un ser completo, pero en forma separada.

T. G. Ashplant, Graham Dawson and Michael Roper, *The Politics of War Memory and Commemoration*, London and New York, Routledge, 2000.

En los últimos años ha habido un creciente interés en temas relacionados a las formas en que las guerras, que caracterizaron sobre todo al pasado siglo XX, han venido impactando en la memoria colectiva de distintas sociedades. Este volumen colectivo reúne una gama muy variada de trabajos que exploran la incidencia de la guerra, y más genéricamente de la violencia, en los procesos colectivos de construcción de memoria. Su principal objetivo es el

de "explorar las relaciones de poder que estructuran los modos en los que las guerras pueden ser recordadas, atravesando formas que van de la conmemoración pública orquestada por estados nacionales a los testimonios de sobrevivientes".

El libro busca una perspectiva internacional, y así los estudios de caso dan cuenta de diversos contextos nacionales: Argentina, Australia, Gran Bretaña, Finlandia, Israel, Noruega, Portugal y Sudáfrica.

Général Paul Aussaresses, *Services Spéciaux. Algérie 1955-1957*, Paris, Perrin, 2001. Así como existe gran variedad de testimonios de primera mano acerca de la represión en diferentes lugares del mundo escritos o brindados por sus víctimas, resultan proporcionalmente escasos aquellos de los ejecutores y victimarios. Puesto en este contexto, el libro de Aussaresses es de singular importancia. En principio, es importante señalar que el autor es un militar de carrera, que inició sus actividades en el ejército de la Francia Libre de De Gaulle, para pasar a Indochina finalizada la Segunda Guerra Mundial. Luego fue destinado a Argelia, donde su tarea específica consistió en organizar los servicios de Inteligencia de las fuerzas francesas acantonadas en esa colonia. Para cumplir con su tarea, tendiente al objetivo mayor de dismantelar al Frente de Liberación Nacional (FLN), Aussaresses aplicó sistemáticamente la práctica de las torturas y las ejecuciones sumarias. El autor busca los antecedentes de ese servicio en los que realizó durante la ocupación alemana, "en interés de su país", "acciones reprobables por la moral ordinaria": "robar, asesinar, saquear y practicar el terrorismo". De aquí, obtiene la conclusión de que es ese mismo interés nacional el que lo obliga a desempeñar esas fun-

ciones frente a la insurrección argelina: "Lo que hice en Argelia, por mi país, lo creo bien hecho, a pesar de que no me gustó hacerlo. Los que lo hicimos pensando que cumplíamos con nuestro deber no debemos lamentarlo".

Leo Spitzer, *Hotel Bolivia. The Culture of Memory in a Refuge from Nazism*, New York, Hill and Wang, 1999.

Leo Spitzer, historiador residente en los Estados Unidos, nació en 1939 en La Paz, Bolivia. Sus padres eran judíos austríacos que habían emigrado huyendo del régimen nazi. Si bien en la década del '30 varios países de América Latina —en particular México, Argentina, Chile y Brasil— dieron refugio a miles de judíos europeos, las condiciones de admisión se fueron endureciendo, al punto de que en los meses que van desde el Anschluss a la Kristallnacht, en 1938, Bolivia fue una de las pocas naciones del mundo que continuó abriendo sus fronteras a quienes escapaban del nazismo.

La experiencia del asentamiento es la que da sentido al título de libro. Porque Bolivia, desde el punto de vista de quienes llegaron a ella, era el país "menos europeizado" de América y, por lo tanto el mantenimiento de la cultura de origen se reforzó ante la ausencia de posibles lazos con grupos locales culturalmente afines. Asimismo, los lazos con la tierra natal se mantuvieron fuertes debido a las familias que habían quedado en la Europa dominada por los nazis. Así, cuando terminó la guerra, muchos de los refugiados pasaron a otros países sudamericanos o regresaron a sus tierras natales. Durante cerca de dos décadas, más de veinte mil nativos de Europa central vivieron en un país profundamente distinto, con culturas muy antiguas y geográficamente "cerrado" al exterior. Hubo además un segundo grupo, que

llegó a Bolivia cuando la guerra terminó, sobreviviente de los campos de concentración. Este aspecto del Holocausto, prácticamente desconocido, es el tema central de este libro: "Hotel Bolivia examina este episodio particular como una vía de exploración de un aspecto importante pero generalmente negado de la experiencia de los grupos desplazados: la relación entre memoria y cultura durante una era de persecución y genocidio". Los ejes fundamentales que se analizan son "la cultura y memoria europea [de los refugiados], su identidad judía, y su sensación de desplazamiento", en su punto de encuentro con la sociedad y la política bolivianas. La construcción de la memoria en estas condiciones tan particulares es lo que da mayor interés al libro. Spitzer aprovecha su condición de testigo e historiador para analizar las relaciones entre memoria e historia, teniendo fundamentalmente en cuenta la necesidad de contextualización de la memoria, y la interdependencia entre ambas categorías.

Laura Hein and Mark Selden (editors), *Censoring History. Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States*, New York and London, M. E. Sharp, 2000.

La importancia de los libros de texto en la construcción de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado y su relación con episodios controversiales, es el principal objeto de esta recopilación. Los distintos trabajos se ocupan de las explicaciones y narrativas que distintos libros escolares ofrecen a la Segunda Guerra Mundial en tres países: Japón, Alemania y Estados Unidos, y la guerra de Vietnam para este último caso. El análisis se concentra en el nacionalismo, a partir del análisis de su construcción en ciertos manuales, que los autores califican en la Introducción como particularísimos "lugares de memoria".

Efectivamente, los libros de texto alcanzan a amplios sectores sociales en ámbitos pequeños, como las familias, transmitiendo desde una posición de autoridad ("es lo que se enseña en la escuela") elementos para la creación de un pasado "que la sociedad ve como legítimo y verdadero". Al respecto, una cuestión analítica a tener en cuenta es que, mientras en Japón el Estado controla directamente los contenidos de tales manuales, este poder es prácticamente inexistente a nivel nacional en los otros dos países que se estudian. Entre los educadores hay un acuerdo tácito de que la enseñanza tiene como uno de sus principales fines el desarrollo de alumnos conscientes de su lugar y de sus derechos como ciudadanos, dentro del consenso general de los Estados democráticos. Este supuesto se da de bruce con la realidad que los autores de los manuales, maestros y profesores enfrentan en las aulas, al trabajar en clase hechos socialmente "desacreditados". Como definen los autores: cuando el tema es la Segunda Guerra Mundial en Japón o Alemania, o la de Vietnam en los Estados Unidos, es imposible discutir las acciones de los ciudadanos o el trato a los extranjeros de un modo que satisfaga a todos. ¿Los docentes tendrían que defender los éxitos menos objetables del Estado en tiempos de la guerra, y reconocer la brutalidad con que estos objetivos se lograron? ¿O deberían condenar los éxitos bélicos nacionales y sus prácticas? Y de ser así, ¿con qué fundamentos? ¿Como una guerra de agresión? ¿Como una guerra imperialista? ¿Como una guerra violatoria de los derechos humanos?" Estas cuestiones, y su resolución en el aula y en el texto, de acuerdo con los recopiladores, son altamente polémicas, pues apuntan a ideas que tienen que ver con la nacionalidad y la ciudadanía.

Actividades de la Comisión Provincial por la Memoria



La Casa de la Memoria

La Comisión Provincial por la Memoria empezó a trabajar en su nueva sede: el edificio que perteneciera a la ex Dirección de Inteligencia de la policía bonaerense, en la localidad de La Plata.

El primer paso que se está llevando a cabo es la transformación de este sitio que fue utilizado para la represión, el horror, la muerte, el ocultamiento y la impunidad, en un lugar donde se trabaja para la vida, la verdad, la justicia y la memoria.

Bajo esta idea central, la sede de la Comisión se propone como un lugar abierto a la comunidad, donde circule gente de todas las generaciones, donde se investigue, se debatan y se produzcan ideas y los artistas encuentren un sitio para expresarse.

En este momento, la Comisión está dando los primeros pasos en cuanto a la restauración del edificio, con el especial interés de preservar las huellas que dejó el uso anterior. De esta forma, el objetivo de transformar el

lugar no debe ser leído como un intento de borrar, limpiar o eliminar el recuerdo que el material arquitectónico aún mantiene vivo. Para citar algunos: la garita de seguridad y el lugar donde está emplazado el archivo que perteneció a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ambos son los testimonios más contundentes del pasado.

Desde el 24 de marzo –fecha en que se tomó posesión del edificio– a la actualidad, los trabajos se orientaron a acondicionar un espacio para el funcionamiento diario y las sesiones plenarias de la Comisión. Ahora se está en plena construcción de una sala de conferencias con capacidad para 150 personas, que será un lugar donde se realizarán las actividades abiertas al público. Este Auditorium o sala de conferencias se inaugurará en el marco de las actividades del II Encuentro Internacional sobre la Construcción de la Memoria Colectiva, el 3 de agosto próximo.

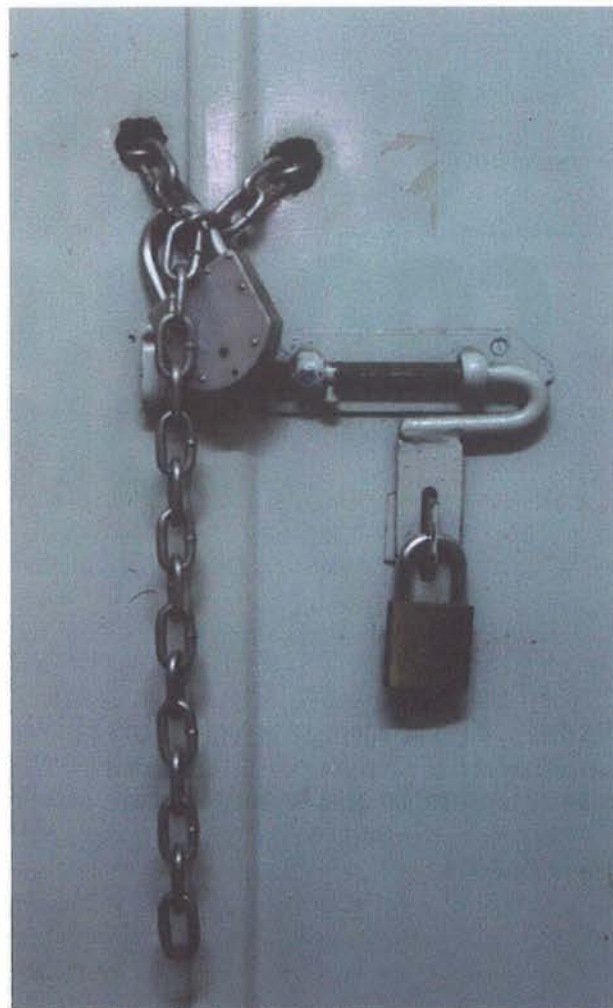
Documentos y archivos

Con la firma de un Convenio con la Universidad de La Plata se dio el paso inicial para avanzar en el proyecto de la creación del Centro de Documentación y Archivo. La institución llevará adelante los trabajos de digitalización de los archivos que pertenecieran a la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense. De esta forma, el acondicionamiento del lugar, la selección del hard y software adecuados, la formación de un grupo técnico profesional que llevará adelante las tareas ya están encaminados.

En septiembre, el equipo formado por informáticos, documentalistas y bibliotecarios dará comienzo al proceso de preservación del material, que incluye tanto la limpieza y reparación de los documentos en su soporte original, como la digitalización y el desarrollo de una base de datos y un sistema de consulta que permitirá la investigación sin arriesgar el acervo existente.

Por otro lado, se han iniciado gestiones para incorporar al Centro otros documentos que brindan información clave para el esclarecimiento de lo sucedido durante la última dictadura militar.

Todo este material conformará un acervo único que será un material de consulta invaluable para todos los que investigan el tema de la dictadura y el terrorismo de Estado en la Argentina.



Dos citas con los docentes

Los días 7 y 8 de agosto, los doctores Bruno Groppo y Enzo Traverso (invitados al II Encuentro Internacional sobre la Construcción de la Memoria Colectiva) darán un seminario donde expondrán sus últimos trabajos sobre la cuestión de la memoria de las experiencias traumáticas que atravesaron las sociedades europeas en el siglo XX. Los prestigiosos académicos italianos, que desarrollan su actividad científica en Francia, hablarán ante docentes, investigadores y alumnos de las carreras humanísticas.

En octubre se realizará el curso de capacitación docente, "El pasado reciente. Las posibilidades de una apropiación significativa de la experiencia límite en el ámbito escolar". El mismo tendrá reconocimiento de la Dirección General de Cultura y Educación y está destinado a docentes del área de Ciencias Sociales del nivel Polimodal. Será dictado por los docentes María Dolores Bejar, Sandra Raggio y Carlos Gassman.

Debates, paneles, talleres de trabajo, cine, teatro, música y muestras

Un encuentro con la memoria colectiva

Los días 3, 4 y 5 de agosto se llevará a cabo en La Plata, el II Encuentro Internacional sobre la Construcción de la Memoria Colectiva, organizado por la Comisión Provincial por la Memoria.

Este evento convoca, por segundo año consecutivo, a investigadores de las distintas disciplinas humanísticas, docentes, alumnos, artistas y a toda persona comprometida con los derechos humanos y la construcción de la memoria colectiva al debate abierto en torno a nuestro pasado reciente. Esta vez, el tema central que orientará el debate será *Las opciones morales ante situaciones límite* en el contexto de la última dictadura militar de la Argentina. Se propone abordar las distintas reacciones de la sociedad frente al horror, la represión y el miedo, incorporando el análisis de las experiencias de otros países latinoamericanos como Brasil y Chile. Además, se debatirá sobre las redes de complicidad y sus alcances, teniendo en cuenta lo sucedido en otros países que transitaron experiencias traumáticas y violentas.

Informes e inscripción: 54 N° 487, entre 4 y 5, La Plata. Telefónicamente: 0221-4831737/ 4895191. Por e-mail: cmemoria@netverk.com.ar

Tal el caso de Francia, Alemania y Rusia. Participarán de los paneles Carlos Altamirano, Daniel Brauer, Bernhard Giessen, Bruno Groppo, Manuel Garretón, Claudia Hilb, Elizabeth Jelin, Luis Alberto Romero, Hilda Sabato, Silvia Sigal, Héctor Schmucler, M. Herminia Tavares de Almeida, Enzo Traverso, Hugo Vezzetti y Horacio Verbitsky.

Al debate académico y político, este año se sumarán una serie de propuestas artísticas. De esta forma, el II Encuentro presentará una serie de documentales, cortos de ficción de jóvenes realizadores, obras de teatro, muestras de plástica y fotografía y recitales de músicos populares. En este marco ha sido invitado a exponer el artista plástico Carlos Alonso, se llevará a escena *Una bestia en la luna*, la obra de Mauricio Iedvabni, con Malena Solda y Manuel Callau, se proyectarán las películas "Yo, sor Alice", de Alberto Marquardt y "Papá Iván", de María Inés Roqué, entre otras. Asimismo, se presentarán libros de reciente edición relacionados con el tema. Tal es el caso de *El Dictador* de María Seoane y Vicente Muleiro; *La imposibilidad del olvido*, una compilación de artículos realizada por Bruno Groppo y Patricia Flier; y la tesis doctoral de Ludmila Catela.

A los paneles donde se abordará el tema de las opciones morales, se suma una serie de talleres de trabajo donde docentes de la provincia de Buenos Aires volverán a encontrarse para debatir y capacitarse en el fortalecimiento de la escuela como espacio para la transmisión de la memoria. Además, habrá foros donde participarán grupos de jóvenes, con el mismo objetivo de compartir el trabajo que vienen llevando a cabo en torno a la memoria.

En otra instancia, el II Encuentro convoca a juristas de todo el país, de Latinoamérica y de los países que llevan adelante juicios contra los militares argentinos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, a dos jornadas de trabajo para compartir experiencias y buscar líneas comunes que fortalezcan las acciones contra la impunidad. Con estas iniciativas, la Comisión busca la constitución de redes de trabajo de ámbitos específicos que tiendan a unir, coordinar esfuerzos y ampliar el círculo de los que trabajan para la Memoria.

DE LUCES Y SOMBRAS

ANSELM KIEFER.
Tres obras intensas sobre
el vínculo entre el arte y
el pasado.



Winterlandschaft, Paisaje de invierno, el cuadro que ilustra la tapa del número 4 de *Puentes*, es una acuarela del artista plástico Anselm Kiefer. Nacido en Donaueschingen, Alemania, en 1945, Kiefer es uno de los pintores alemanes más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Estudió con Joseph Beuys y organizó su primera muestra en 1969. Reticente a las apariciones públicas -vive recluido en la ciudad de Buchen y no permite que le tomen fotografías-, su obra ha sido sin embargo exhibida en casi todo el mundo y, en 1998, fue expuesta también en Buenos Aires, en la Fundación Proa.

Las pinturas de Kiefer recorren y se alimentan de diversos temas (las leyendas egipcias, la alquimia, la Cábala, la historia del éxodo judío, el Holocausto); pero en todos los casos la elección de las técnicas pictóricas y los materiales (acrílico, acuarelas, hierros oxidados, bañeras, materiales desechados y violentados) tiende a acentuar la representación de un mundo victimizado. Kiefer transita en sus cuadros núcleos traumáticos de la historia, la cultura y la mitología alemanas, y explora las cicatrices que dejó en destrucción en Alemania. Y allí reside precisamente una de las apuestas más interesantes y perturbadoras de Kiefer: un modo de abordar, oblicua y a veces irónicamente, el trabajo del duelo desde la perspectiva alemana. Exhibiendo una impronta fuertemente neo-expresionista, Kiefer parece enfrentar la pregunta por el vínculo entre la moral y la imagen: la cabeza de mujer que asciende como humo, con una herida en el cuello y la sangre que mancha la nieve, *Paisaje de invierno*, pintado en 1970, veinticinco años después de la Segunda Guerra Mundial, constituye acaso una respuesta.